

PENAL

FEDERACIÓN DE LA NACIÓN

A.D.R. 517/2011

CIRCULÓ DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DE 2013, SIN
OBSERVACIONES.



4

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN



NÚMERO: 517/2011

XI

17:31 (HORAS)

QUEJOSA: _____

PROMOVENTE DEL RECURSO: PARTE QUEJOSA

CONTRA ACTOS DEL: PRIMER TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

ACTO RECLAMADO: LA SENTENCIA DE FECHA 02 DE MARZO DE
2009, DICTADA EN EL TOCA DE APELACIÓN NÚMERO 1/2008

TRIBUNAL COLEGIADO DE ORIGEN: SÉPTIMO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

JUICIO DE AMPARO DIRECTO: D.P. 1/2010

FECHA DE RESOLUCIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2011

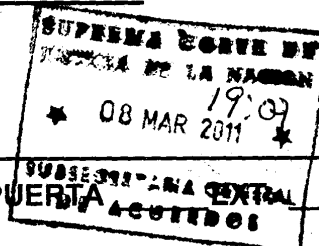
EL TRIBUNAL COLEGIADO RESOLVIÓ: NO AMPARA

MINISTRO PONENTE: _____

PUERTA

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: _____

EXPEDIENTE QUE CONSTA DE TRES CUADERNOS Y UNA MEMORIA USB



PENAL

RED DE INFORMÁTICA JURÍDICA

Núm. de Reg.	Número de Expediente	Tipo de Asunto Materia	Promoviente, Datos de Origen	Fecha de Ingreso	Contenido	Destino	Observaciones
013398	00517/2011-00	AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN MATERIA: PENAL	<p>QUEJOSO:</p> <p>SUJETO RELACIONADO:</p> <p>ENGROSE ADR 5/7/2011 FECHA 8/22/13 HORA 3:21</p> <p>ANEXOS: 18 cuadernos 1 Expedientillo 1 falta toca y engrosar. 1 libro cerrado y contiene una ab</p> <p>ENTREGA RECIBE</p> <p>FEDERAL OFICIO: 729</p>	08/03/2011	<p>CUADERNOS: (DOS CUADERNOS Y UNA MEMORIA USB) RECIBIDO DE UN ENVIADO CON EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO NÚMERO 10/2010, EN 1018 FOJAS SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO; EL EXPEDIENTILLO FORMADO CON EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR [] EN 37 FOJAS SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO; COPIA DEL ESCRITO DE AGRAVIOS, EN 39 FOJAS.</p> <p>AUTORIDAD RESPONSABLE: PRIMER TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO</p> <p>ACTO RECLAMADO: LA SENTENCIA DE FECHA 02 DE MARZO DE 2009, DICTADA EN EL TOCA DE APELACIÓN NÚMERO 10/2008</p> <p>FECHA RESOLUCIÓN: 10/02/2011 ENGROSE: / / RESOLUCIÓN RECURRIDA: NO AMPARA</p> <p>TRIBUNAL COLEGIADO: D.P 2010</p>	SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	N.E.U.N. 9214472

ELABORÓ: Gabriela Robles Enriquez (Oficialia de Partes)

RECIBÍ 1 ASUNTO

REVISÓ TEMA:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ASUNTO: SE REMITEN AUTOS Y MEMORIA
USB, CON RESOLUCION COMPLETA.

OF. 729.

D.P. /2010.

C. PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACION.

P R E S E N T E.

En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha, dictado en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la quejosa

, contra la resolución de diez de febrero de dos mil once, dictada por este Séptimo Tribunal Colegiado, dentro del juicio de amparo directo D.P. /2010, promovido por la quejosa de mérito, contra actos del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, remito a Usted en mil dieciocho fojas útiles, los autos del mencionado juicio de garantías y en treinta y siete fojas útiles, el expediente formado con motivo del referido medio impugnativo, al que va inserto únicamente un escrito; lo anterior, a fin de que se resuelva lo que en derecho proceda.

Por otro lado, se hace constar que en la sentencia recurrida no se decidió sobre la constitucionalidad de algún precepto, ley federal o local, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, ni se estableció la interpretación directa de algún precepto constitucional.

He de agradecer se sirva ordenar se me acuse el recibo de estilo correspondiente.

Reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

México, D. F., a 08 de marzo de 2011.

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SÉPTIMO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO.

LIC. JOSE ELISEO REYES GALVEZ.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA



SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO.

013398

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2011 MZO 8 PM 5 31

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

5/7/2011

- Recibido de un anexo en (1) folio, con:
- (1) Memoria USV
 - Expedientillo del Recurso de Revisión
D.P. 12010, en (37) folios
 - Juicio de Amparo Directo 12010 en
(1018) folios, según su último folio.
 - Copia del escrito de agravios en (32) folios
- [Signature]*

C. PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

quejosa en el juicio de Amparo Directo número /2010, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, respetuosamente expongo:

Con fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, 83, fracción V, 84, fracción II, 86, 88, 89 de la Ley de Amparo, interpongo **RECURSO DE REVISIÓN** contra la ejecutoria pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número /2010, en sesión de diez de febrero de 2011. Resolución que fue notificada el pasado viernes dieciocho de febrero y surtió sus efectos el lunes veintiuno del mismo mes¹.

AGRAVIOS:

El presente recurso es oportuno y procedente toda vez que los conceptos de violación en la demanda de amparo convocaron la interpretación directa de diversos preceptos constitucionales cuya transgresión quedó expresada en la causa del pedir.

El presente recurso es de naturaleza excepcional y su principio rector se encuentra en la fracción IX del artículo 107 constitucional. Por tanto, la materia del recurso se contraerá al estudio de las cuestiones constitucionales contestadas en la sentencia impugnada.

Al mismo tiempo, es pertinente decir que, no obstante su naturaleza excepcional, en la revisión sobre constitucionalidad sigue rigiendo la suplencia de la queja por tratarse de la materia penal, conforme la tesis de rubro: **SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. OPERA RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION REFERIDOS A LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.**²

PRIMERO.- La sentencia genera agravio al interpretar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y violentar el principio de congruencia por no atender la cuestión planteada en la demanda de amparo.

¹ Tesis: P.JJ. 1/2010: SJF. Febrero de 2010. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA RECURRIDA, Y NO A PARTIR DE QUE EL RECURRENTE RECIBA COPIAS DE LA MISMA.

² Tesis 2725. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación. Tomo I. Materia Constitucional. 2000. Vol. 3 Precedentes relevantes. Página 1896-97.

SIN TEXTO



Atento al segundo párrafo del artículo 88 de la Ley de Amparo, transcribo la parte conducente de la sentencia impugnada que estableció la interpretación directa del precepto constitucional invocado, como sigue:

"En primer término, es de hacerse notar que la actuación policial, como lo señala la peticionaria de amparo, debe apegarse a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, como lo establece el artículo 21 constitucional, y que tales principios constituyen una garantía para los gobernados, para la sociedad en general, y particularmente para las personas relacionadas con una investigación policiaca. Sin embargo, es infundada la manifestación de la quejosa en el sentido de que esa garantía fue vulnerada en su contra, porque si bien es cierto que los videos a los que reiteradamente se refiere y que fueron transmitidos en diversos programas televisivos de noticias el nueve de diciembre de dos mil cinco, contienen imágenes ajenas a la realidad, no es menos cierto que del estudio de la ejecutorias que constituye el acto reclamado, se advierte que ningún dato de los contenido en tales videos, fue tomado en consideración en perjuicio de la quejosa, además de que como la propia quejosa lo señala, el primer elemento que contradice el contenido de esas imágenes, es el parte informativo de nueve de diciembre de dos mil cinco, suscrito y ratificado por los agentes [...]"

Foja 1333, artículo 21: Principios de Actuación Policial

En esencia, el concepto de violación que expresaba lo siguiente:

*La acusación en mi contra rompió el **principio de la buena fe ministerial**.*

Es gravísimo que la autoridad encargada de descubrir la verdad, produzca, construya y difunda una mentira. Y eso fue precisamente lo que sucedió con la actuación que empezó en el montaje y culminó en el proceso que hoy me condena a sesenta años de cárcel.

*El artículo 21 constitucional consagra los principios que rigen la actuación policial, a saber: legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. **Esos principios son una garantía pues aseguran al gobernado el desempeño legal y apegado a la verdad de los cuerpos de seguridad pública. Ahora bien, en mi caso, la policía abandonó esos principios y, en su lugar, urdió la escenificación de un falso operativo.** [...]"*

En este caso, el recurso es procedente toda vez que la interpretación que hizo el Tribunal Colegiado de Circuito del precepto constitucional,

SIN TEXTO

UNDER JUDICIAL
SYSTEM COURT OF
RECORDS
1900

dejó subsistente e irresuelto el problema planteado. Adicionalmente, el tema entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

En el presente caso, se surten los requisitos de procedencia del recurso, toda vez que el Tribunal Colegiado interpretó el artículo 21 constitucional y concluyó que efectivamente los principios de actuación policial consagrados en el precepto constitucional constituyen una garantía para los gobernados y particularmente para aquéllos sometidos a investigación policial.

Empero, el Tribunal Colegiado, habiendo apreciado que los principios de actuación policial (legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez) y el respeto a los derechos humanos son efectivamente una garantía de seguridad jurídica, no contestó el concepto de violación expresado ya que su razonamiento eludió el tema planteado.

La cuestión se resume en el siguiente concepto de violación:

... Los vídeos, especialmente el supuesto reportaje en vivo, son piezas esenciales y deben ser estudiados por la autoridad judicial con extremo detenimiento.

Ciertamente, el video no es una prueba que me incrimine. Empero, me causa agravio que el tribunal unitario responsable lo ignore como una prueba sin eficacia.

La tiene... para demostrar la mala fe y la ilegal actuación de la autoridad, primero de los agentes de la entonces Agencia Federal de Investigaciones y luego del ministerio público. El desarrollo de la averiguación previa, especialmente la evolución de los testimonios de las testigos, debe valorarse a partir de esa prueba y de las consecuencias que acarreó el escándalo, una vez sabido que las imágenes no eran reales. Las inconsistencias del expediente y la alteración de la realidad se explican a partir del examen de esas imágenes...

El razonamiento entraña falta de equidad. El video -dijo el tribunal responsable- lejos de ser prueba que acerca a la verdad, refleja algo no real. Ciertamente, pero se trata de un instrumento de irrealidad construido por la policía federal investigadora. Tal parece que el tribunal responsable prefirió no ver ni oír la conducta indebida de la policía. Una policía federal por lo demás que se encuentra constitucionalmente subordinada al ministerio público.

El video ciertamente no es una prueba de incriminación. Sin embargo, del mismo modo que la declaración bajo tortura o coacción sólo genera prueba contra quien genera la violencia; el video, que también es una forma de violencia, debe ser visto como una prueba que opera en contra de una

COXLEY AIR

ADDED BY THE
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
MICHIGAN

5

parte acusadora, cuya policía actuó una falsedad. No hacerlo, rompe la garantía de una justicia equitativa e imparcial. Si la tortura opera en contra del torturador, de la misma manera, la simulación o falsificación debe operar en contra del simulador o falsario.

Es ineludible ver que la actuación de la entonces Agencia Federal de Investigación actualiza una irregularidad grave y una violación a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que rigen constitucionalmente su actuación.

La causa del pedir convocaba al órgano jurisdiccional a pronunciarse sobre varios puntos esencialmente, a saber:

1. ¿Son los principios de actuación policial previstos en el artículo 21 una garantía a favor del gobernado y dispositivo de protección a los derechos humanos? El Tribunal Colegiado se pronunció en sentido afirmativo.
2. ¿Fue el montaje de mi detención una actuación policial que rompió los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y de respeto a los derechos humanos? El Tribunal Colegiado contestó en sentido negativo, esto es que no hubo violación bajo el argumento, incongruente con la causa del pedir, de que los videos y las imágenes no fueron tomadas en perjuicio de la quejosa. El tema planteado era otro y se explica por la tercera cuestión:
3. ¿Son las imágenes contenidas en esos videos prueba de mala fe y constituyen los videos una prueba que opera en contra de la parte acusadora?

No obstante haber sustentado que los principios de actuación policial previstos en el artículo 21 constitucional sí son una garantía del gobernado, el Tribunal Colegiado declinó ejercer la tutela judicial al no atender ni resolver el aspecto central del pedir. Luego entonces subsiste la cuestión planteada.

El concepto de violación claramente dejó sentado que los videos y las imágenes que se desprenden del mismo, no eran una prueba incriminatoria y que el acto reclamado no causaba agravio pues así incluso lo había resuelto la autoridad responsable. Sin embargo, la cuestión no era si los videos habían sido tomados como pieza incriminatoria, sino, al contrario, si éstos constituyen prueba de actuación indebida, de mala fe y por tanto si el contenido de los mismos debe ser estudiado como pieza integrante de autos y como elemento opera en contra de la parte acusadora.

El agravio es tanto más relevante y grave cuando se aprecia que la ejecutoria luego se pronuncia en el sentido de que la quejosa y su defensa no aportaron prueba de mala fe.

IN TEXT

FOODER K1
SUPREMA CC
SUBSECRET

FOODER K1
SUPREMA CC
SUBSECRET

6

"[E]l Ministerio Público es una institución de buena fe, y como tal debe tenérsele en tanto no se demuestre lo contrario. En el caso, la peticionaria de amparo conjetura que se indujo a los testigos a reconocer su voz, en lo que es obvio que no destruye la buena fe que se presume en la institución investigadora pues ninguna prueba aportó durante la instrucción, al respecto [...]"

Pues bien, la cuestión era otra distinta a la respuesta que pronunció el Tribunal Colegiado. Dicho en otros términos, el Tribunal Colegiado ~~omitió entrar al estudio de la cuestión planteada~~ y violentó el principio de congruencia, por haber desatendido el primer planteamiento de constitucionalidad propuesto en la demanda de amparo.

De hecho, el razonamiento vertido en respuesta a este concepto de violación se reprodujo en todo lo largo de la ejecutoria como parte de los argumentos que desestimaron los conceptos de violación.

Así, resulta aplicable la tesis de rubro:

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE INCLUSO CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITA, CON VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, O POR ALGUNA RAZÓN, JURÍDICA, REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA EN LA DEMANDA³.

Ahora bien, a efecto de fijar que este Tribunal Constitucional pueda medir la trascendencia e importancia de la cuestión, me permito transcribir la parte conducente de la exposición de motivos que presentó el proyecto de reforma al artículo 21 constitucional en el año mil novecientos noventa y cuatro.

**CÁMARA DE ORIGEN: SENADORES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
MÉXICO, D.F., A 5 DE DICIEMBRE DE 1994
INICIATIVA DEL EJECUTIVO**

..., la iniciativa plantea las bases de un Sistema Nacional de Seguridad Pública en el que la Federación, los estados y los municipios deberán garantizar una política coherente en la materia. Esta debe incluir, entre otros elementos,... la profesionalización creciente de estas corporaciones y su vinculación de manera renovada con la comunidad para recuperar su prestigio y credibilidad a través del cumplimiento cabal y respetuoso de su deber. Asimismo, se establece como el criterio constitucional el que la actuación de las policías, a todos los niveles, se rija por los principios de legalidad, honestidad y eficiencia.

³ Tesis CXXXII/95. Tesis 2545, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 2000, Tomo I, Materia Constitucional, precedentes relevantes, Volumen 3, página 1769.

SIN TEXTO



1

El mejoramiento de la justicia y la seguridad son dos de los imperativos más urgentes que enfrenta nuestro país. El bienestar de los mexicanos se funda en la seguridad de sus personas y de sus bienes. **Ante la comisión de ilícitos, incluso por quienes debieran vigilar el cumplimiento de la ley, se ha acrecentado la desconfianza hacia las instituciones,** los programas y las personas responsables de la impartición y procuración de justicia y de la seguridad pública. La ciudadanía tiene la percepción de un desempeño judicial y policial que no siempre es eficaz y dotado de técnica, ética y compromiso de servicio.

Esta situación únicamente podrá remediarse por medio de una reforma que incorpore sistemas de justicia y seguridad más modernos, más eficientes, sistemas acordes con las necesidades y los reclamos de nuestro tiempo. Esta iniciativa es un primer paso que atiende los aspectos constitucionales que deben modificarse para avanzar en la reforma del Poder Judicial y de los órganos y sistemas de seguridad pública.

La iniciativa plantea **definir a nivel constitucional las bases sobre las cuales debe regirse la seguridad pública en todo el país.** El cambio que se propone demanda **una nueva concepción de la profesionalización policial.** Es preciso reforzar los procedimientos de evaluación permanente del desempeño profesional de los servidores públicos de seguridad, se debe crear una verdadera carrera policial sustentada en un régimen de prestaciones económicas y sociales congruente con la importancia y el riesgo de su labor. Es necesario revalorar y dignificar al servidor de la seguridad pública para atraer a esta actividad a mexicanos que encuentren en ella un proyecto digno de vida profesional, sentando la bases de seguridad y reconocimiento social que merecen. Es necesario hacerlo en el ámbito federal y promover, con respeto a la soberanía de los estados y a la autonomía de municipios que estos esquemas sean **adopción generalizada.**

LA FEDERACIÓN
DE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA DEFENSA
SECRETARÍA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
SECRETARÍA DE AGRI-CULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
SECRETARÍA DE AGRI-CULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Por ello, la iniciativa propone establecer en el artículo 21 constitucional, la obligación del Estado de velar por la seguridad pública de los gobernados, señalando el mandato para que todos los cuerpos de seguridad pública que pertenezcan a la Federación, entidades federativas y municipios se organicen bajo los principios de legalidad, honestidad, eficiencia y eficacia...

La reforma constitucional buscó sentar las bases constitucionales y legales para la organización y profesionalización de las corporaciones policiales e impulsar un desempeño eficaz, ético y de servicio.

SIN TEXTO

RECEIVED
FEB 10 1964
U.S. AIR FORCE
HONOLULU, HAWAII

RECEIVED
FEB 10 1964
U.S. AIR FORCE
HONOLULU, HAWAII

En este mismo orden de ideas, conviene decir que el texto constitucional recientemente reformado agregó a los citados principios de actuación un mandamiento adicional:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; **la investigación y persecución** para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y **respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.**

Del mismo modo, para entender el nexo entre derechos humanos y seguridad pública, resulta conveniente invocar la tesis número 1/2000, de rubro y texto.

SEGURIDAD PÚBLICA. SU REALIZACIÓN PRESUPONE EL RESPETO AL DERECHO Y EN ESPECIAL DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES.

Del análisis sistemático de los artículos 16, **21**, 29, 89, fracción VI, 129 y 133, de la Constitución, así como 2o., 3o., 5o., 9o., 10, 13 y 15, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1o., 2o., 3o., 10 y 11, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y 1o., 2o., 9o. y 10, de la Ley Orgánica de la Armada de México, se deduce que el Estado mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno y de todas las autoridades que tengan atribuciones relacionadas, directa o indirectamente, con la seguridad pública, deben coadyuvar a lograr los objetivos de ésta, traducidos en libertad, orden y paz pública, como condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la Constitución reconoce a los gobernados. El examen de los diferentes preceptos citados, con los demás elementos que permiten fijar su alcance, lleva a concluir que, jurídicamente, los conceptos de garantías individuales y seguridad pública no sólo no se oponen sino se condicionan recíprocamente. No tendría razón de ser la seguridad pública si no se buscara con ella crear condiciones adecuadas para que los gobernados gocen de sus garantías; de ahí que el Constituyente Originario y el Poder Reformador de la Constitución, hayan dado las bases para que equilibradamente y siempre en el estricto marco del derecho se puedan prevenir, remediar y eliminar o, al menos disminuir, significativamente, situaciones de violencia que como hechos notorios se ejercen en contra de las personas en su vida, libertad, posesiones, propiedades y derechos. **Por ello, sería inadmisibles en el contexto jurídico constitucional interpretar la seguridad pública como posibilidad de afectar a los individuos en sus garantías**, lo que daría lugar a acudir a los medios de defensa que la propia Constitución prevé para corregir esas desviaciones. Consecuentemente, por el bien de la comunidad a la que se debe otorgar la seguridad pública, debe concluirse que resulta inadmisibles constitucionalmente un criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento de fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes del cuerpo social, así como de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad de los órganos del Estado que, so pretexto de la seguridad pública, pudieran vulnerar las garantías individuales consagradas en el Código Supremo. Por tanto, debe establecerse el equilibrio entre ambos objetivos: **defensa plena**

EX-100



EX-100 JUDIC
SUPREMA CORTE
SUBSECRETARIA



EX-100 JUDIC
SUPREMA CORTE
SUBSECRETARIA

de las garantías individuales y seguridad pública al servicio de aquéllas. Ello implica el rechazo a interpretaciones ajenas al estudio integral del texto constitucional que se traduzca en mayor inseguridad para los gobernados o en multiplicación de las arbitrariedades de los gobernantes, **en detrimento de la esfera de derecho de los gobernados.**⁴

Los derechos humanos no están supeditados a la función de seguridad pública. **Al contrario, la seguridad pública está al servicio de las garantías individuales.** La policía federal investigadora (antes AFI) es una corporación policial con funciones de seguridad pública. Adicionalmente, su actuación del nueve de diciembre de dos mil cinco se verificó conforme a una orden ministerial y por tanto la cuestión exige ser examinada a la luz del precepto constitucional.

Luego entonces, procede también apuntar que la cuestión obliga a pronunciarse si el montaje o la escenificación falsa de una detención simulada por la policía investigadora, constituye una violación a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y a las Convenciones Internacionales suscritas por los Estados Unidos Mexicanos.

De igual manera, la cuestión pide definir el impacto procesal que tienen los videos, resultado de un actuar indebido, contrario a los principios constitucionales de actuación.

El agravio que se eleva, postula que esa escenificación, simulacro, montaje o recreación, como se quiera llamar, sí constituye una violación a la garantía prevista en el artículo 21 constitucional y a los derechos humanos fundamentales como son el respeto a la dignidad personal y al principio de inocencia y sí constituye una pieza integrante de autos que opera en contra de la parte acusadora.

Los agentes y mandos policiales que participaron en la escenificación vulneraron además el principio de inocencia. Al apartarse de los principios constitucionales y presentarme ante los medios de información como delincuente o secuestradora, su actuar afectó derechos humanos. Fui retenida ilegalmente, colocada en franca indefensión, sin haber sido puesta a disposición de la autoridad ministerial y evidentemente sin haber sido juzgada.

Por su relevancia, en tanto apoya lo expresado en este punto, transcribo de nueva cuenta la tesis de rubro:

ACTO DE MOLESTIA. LO CONSTITUYE LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS A QUIENES NO TIENEN LA CALIDAD DE DETENIDOS O PRESUNTOS RESPONSABLES.

⁴ Jurisprudencia 35/2000. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000
Página: 557

SIN TEXTO

PODER JU
SUPREMAC
SUBJEC

La toma de fotografías a personas que no han sido puestas a disposición del Ministerio Público en calidad de detenidas o presuntas responsables - cuando éste sólo ha ordenado su localización y presentación- configura **un acto de molestia porque menoscaba o restringe derechos de la persona**, al hacer uso de su imagen, aunado a que la obtención de fotografías puede resultar violatoria de los derechos a la honra y a la dignidad contenidos en los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si el Estado incumple con sus obligaciones relativas a la protección de datos personales, las cuales consisten en: a) solicitar o registrar información que contenga datos personales sólo en los casos previstos por la ley; y, b) tratar confidencialmente tales datos, lo que implica utilizarlos o revelarlos sólo con el consentimiento de la persona a quien correspondan. Así, el hecho de que la autoridad obtenga fotografías de cualquier persona, sin importar su situación jurídica, efectivamente representa un menoscabo y un deterioro en sus derechos, de naturaleza continuada, pues mientras el resultado del acto (las fotografías) no se elimine, el acto de molestia continúa.⁵

El artículo 21 constitucional consagra varios principios de actuación y, en el caso concreto, los agentes y mandos de la Agencia Federal de Investigaciones que intervinieron en la escenificación, incurrieron en violación a la norma constitucional y a derechos humanos fundamentales.

Adicionalmente, la demanda de amparo directo expresó que la violación debe tener un impacto procesal y que la autoridad judicial no puede dejar de valorarla; que la ilicitud constitucional acredita mala fe de la autoridad policial e investigadora y explica la evolución de la indagatoria.

En este caso se trata de la actuación indebida de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, que era entonces la policía federal investigadora subordinada al Ministerio Público Federal, y que la escenificación o simulacro o montaje se produjo en el marco de una investigación ministerial.

Considerando la exposición de motivos de reforma al artículo 21 constitucional, la cuestión que se plantea es de importancia y trascendencia:

¿Qué sentido tiene elevar los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez a rango constitucional y consagrarlos como principios de seguridad y no sancionar a nivel legal o procesal las conductas que evidentemente vulneran esos mismos principios?

La reforma definió varios principios de actuación policial y los elevó a rango constitucional. La Suprema Corte ha señalado que la seguridad pública se debe a los derechos humanos. Por su parte, el Tribunal

⁵ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXX, Noviembre de 2009, Pleno y Salas. Precedente: Amparo directo /2008. Página 401.

SUE TIXE @



Colegiado reconoció además que los principios policiales son una garantía vinculada al respeto a los derechos humanos.

El reconocimiento de derechos y garantías exige un componente de realidad y, en su caso, ante la violación, una reparación efectiva, de lo contrario, la norma constitucional y los derechos que ésta protege devienen una mera declaración de intenciones.

En ese sentido, los conceptos de violación aludieron claramente a los efectos del montaje o escenificación y la cuestión de cómo esas imágenes, es decir los videos, son piezas de autos y acreditan la mala fe y la conducta indebida de la parte acusadora.

Empero, al omitir el estudio planteado, la ejecutoria impugnada reiteradamente sostuvo que el sumario no arrojó prueba de la indebida conducta procesal de la parte acusadora. Por tanto, la cuestión es de evidente relevancia:

¿Es permisible que elementos y mandos de una policía investigadora procedan a escenificar un simulacro ante los medios masivos de comunicación?

¿Constituye prueba de actuación ilícita los videos e imágenes que indubitadamente muestran la escenificación de hechos falsos?

Por ello, es obligado que este Alto Tribunal en tanto Tribunal Constitucional se aboque al estudio de la cuestión planteada.

SEGUNDO.- La sentencia causa agravio en su interpretación del mandamiento constitucional de puesta a disposición sin demora de un inculcado, previsto en artículo 16 de la Ley Fundamental.

Cito al caso, los textos, anterior y reformado, que contienen el dispositivo constitucional de poner sin demora a todo indiciado a disposición de autoridad inmediata o ministerial.

En caso de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo **sin demora** a disposición de la autoridad inmediata, y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.

Texto reformado:

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo **sin demora** a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. **Existirá un registro inmediato de la detención.**

12

Asimismo y en términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, procedo a transcribir la parte conducente de la ejecutoria:

"En cuanto al hecho de que no fue puesta sin demora a disposición del Ministerio Público, debe decirse que **efectivamente no se le puso a disposición de la autoridad inmediatamente** después de las cuatro horas con treinta minutos del nueve de diciembre de dos mil cinco.

... [E]l hecho de que no hubiera sido puesta a disposición de autoridad competente, sin demora, obedeció a **causas de fuerza mayor**, como lo era el preservar la vida y la integridad física de las víctimas, y una vez rescatadas, recibir atención médica y psicológica de urgencia. De lo anterior, se sigue, que si bien es cierto que se aprecia un lapso considerable de tiempo, desde la detención de la quejosa, hasta su puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación, no puede considerarse que ese periodo **resulte violatorio del artículo 16 constitucional, pues es evidente que al no haber una forma lógica de medir en horas o minutos los términos "inmediatamente" o "sin demora" o "sin dilación"**, la valoración correspondiente tiene que apreciar en conciencia las circunstancias particulares del caso, particularmente en la especie, la necesidad de velar por la integridad física de los ofendidos y brindarles auxilio que para ellos garantiza el artículo 20 constitucional en los términos citados. En cuanto a la apreciación del tiempo transcurrido, es ilustrativa la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con número de registro 2020, 971...del siguiente tenor:

FLAGRANTE DELITO. CONCEPTO DEL TERMINO <INMEDIATAMENTE>, EN LA TERCERA HIPÓTESIS PREVISTA POR EL ARTÍCULO 69 REFORMADO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO)... **no es factible definir el término <inmediatamente> en minutos, horas o incluso días, porque en cada caso en particular debe apreciarse en conciencia, el tiempo en que ocurrieron los hechos, el lugar y las circunstancias del caso.'**

Manifiesta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha opinado que la demora tolerable es **'aquella necesaria para el traslado'**. Lo que a pesar de ser apegado a la lógica, resulta inaplicable al caso [...]"

Fojas 1430 - 1433

En otra parte de su considerando, el Tribunal Colegiado razonó:

" En lo que se refiere a la manifestación de la peticionarios de amparo de que en lugar de ponerla a disposición del Ministerio Público **sin demora**, fue llevada o **retenida ilegalmente** en el y colocada contra su voluntad en una escenificación, y que ese tiempo es injustificable y **es una**

SIN TEXTO



violación directa al mandato constitucional, debe decirse que es infundado, y la manera en lo que lo expone la petición resulta tendenciosa, pues enseguida de lo arriba resumido, se limita a señalar las horas que tuvo por ciertas la responsable respecto de la detención y el rescate de las víctimas, e igualmente señala el registro cronológico que aparece en el video transmitido por el programa 'Primero Noticias', y afirma como ahí se aprecia como mínimo una hora retenida, tiempo en que no fue trasladada ni puesta a disposición del Ministerio Público, sino colocada frente a las cámaras...

[A]siste la razón a la petición de amparo cuando manifiesta que no hay fundamento legal o protocolo que permita a la autoridad poner a un indiciado a disposición de los medios y a ser fotografiado o filmado, y ser obligado contra su voluntad a estar en un simulacro escénico. Sin embargo, como ya se ha dicho repetidamente, lo que aparece en los videos de los programas televisivos, no fue tomado en consideración por el tribunal señalado como autoridad responsable ni en beneficio, ni en perjuicio de la quejosa.

El hecho de que omitieran cumplir con la fracción V del artículo 193 Quater, del código adjetivo invocado, pues no precisaron el tiempo aproximado de traslado, es cierto, sin embargo, ello no afecta a los derechos de la imputada de garantías, por las razones arriba apuntadas.

Fojas: 1427, 1428 y 1429

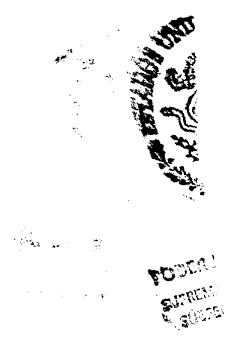
De nueva cuenta, este agravio debe analizarse a la luz de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo. En primer término, conviene precisar que el reclamo consistió en evidenciar y explicar la existencia de una **retención indebida** por parte de la policía federal investigadora.

"Sin entrar, por lo pronto, al debate sobre la fecha de mi detención, es indubitable que fui retenida por la policía investigadora y constreñida a salir frente a las cámaras de televisión. Ese hecho constituye una violación a mis derechos fundamentales.

*En primer término, reclamo una evidente violación a la garantía prevista en el cuarto párrafo del artículo 16 constitucional que manda a la autoridad, cualquiera que ésta sea, a poner "**sin demora**" a toda persona detenida a disposición del Ministerio Público."*

El reclamo expuso la violación al precepto constitucional en tanto se verificó una retención indebida que se explica fundamentalmente por la existencia del montaje o simulacro policial escenificado ante las cámaras de televisión.

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL



La sentencia del Tribunal Colegiado reconoció por su parte que no hubo una puesta a disposición de manera inmediata, puesto que efectivamente mediaron varias horas.

Sin embargo, para declarar infundada la violación, el Tribunal Colegiado interpretó el precepto constitucional al tenor de dos argumentos, a saber: 1º que el término "sin demora" o inmediatamente no se puede medir en horas y minutos y 2º que lo que aplica es **apreciar en conciencia** las circunstancias del caso. Apoya su interpretación en tesis de rubro sobre delito flagrante.

Al mismo tiempo, la ejecutoria reconoce que no hay justificación legal para que la policía ponga a un indiciado a disposición de los medios pero que este aspecto no es relevante puesto que los videos y las escenas no fueron usados como pruebas de incriminación.

También señaló que la interpretación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se inclina por interpretar el término "inmediatamente" como el "tiempo necesario para el traslado" no es aplicable puesto que en este caso operó una causa de fuerza mayor.

En suma, el Tribunal Colegiado interpretó el dispositivo constitucional y dijo: "No hay agravio puesto que el término "sin demora" debe apreciarse según las circunstancias del caso y aquí operó una causa de fuerza mayor."

Ahora bien, el concepto de violación claramente documentó y explicó la retención indebida como producto del montaje o escenificación.

Si bien es admisible que el mandato constitucional y concretamente el término "sin demora" no puede definirse en horas o minutos, no por ello deja de ser una referencia esencialmente temporal.

El concepto de violación respectivo expuso por ello mismo una cronología esencial para dar cuenta de la violación que se manifestó de manera indubitable en la retención ilegal cuya finalidad fue la exposición ante los medios.

Al efecto, el tiempo que transcurre el nueve de diciembre entre las seis con cuarenta y siete minutos cuando entran las primeras cámaras de televisión al hasta a las ocho treinta de la mañana cuando se efectúa, según dicho de los agentes federales, la salida del , constituye una retención indebida.

La apreciación en conciencia que el Tribunal Colegiado dijo realizar de las circunstancias particulares del caso, es inexacta. La interpretación resulta incongruente, puesto que si el concepto de violación se apreció conforme a las circunstancias del caso, entonces el Tribunal Colegiado debió apreciar el simulacro o montaje. Esa circunstancia es ineludible. En el sumario existe evidencia incontrovertible de la escenificación

SIN TEXTO



SECRETAR
DE LA CORTE
DE JUSTICIA

15

mediática y la retención indebida que acreditaría los extremos de la violación constitucional.

Por eso mismo, si se revisa la cronología del caso y se aprecia el término "sin demora" o "inmediatamente" conforme a la interpretación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se desprende una interpretativa más harmónica y acorde a las circunstancias del caso. Es decir, el tiempo sería el necesario para trasladar a los indiciados ante la autoridad ministerial.

Conviene reiterar que ningún ordenamiento legal o protocolo policial justifica o permite la permanencia de los indiciados y al caso de las víctimas.

Este último punto es destacable puesto que el Tribunal Colegiado desvaloró el concepto de violación bajo una excepción, no legislada, de fuerza mayor.

Veamos la pretendida causa de fuerza mayor: La ejecutoria reconoce que sí se aprecia en autos un lapso considerable de tiempo, desde la detención de la aquí quejosa, hasta su puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación.

Afirma que ese lapso de tiempo no se puede considerar violatorio del artículo 20 Constitucional, al no haber una forma lógica de medir en horas o minutos los términos "inmediatamente" o "sin demora" o "sin dilación", que la valoración correspondiente tiene que apreciar en conciencia las circunstancias particulares del caso, particularmente en la necesidad de velar por la integridad física de los ofendidos y brindarles el auxilio que para ellos garantiza el artículo 20 Constitucional.

Sin embargo, omiten tomar en consideración que la existencia de los videos aportados en autos a los que se les niega peso o eficacia probatoria, ponen de manifiesto que:

1.- Mandos y agentes federales tuvieron tiempo de llamar a los medios de televisión para que sus reporteros y camarógrafos, acudieran al " y luego escenificarán un operativo.

2.- Tuvieron tiempo de acondicionar las escenas que aparecen filmadas en esos videos.

3.- Tuvieron tiempo y colocaron en esas escenas a las víctimas, simulando o aparentando un rescate.

En ese contexto, y al no haber valorado que efectivamente aconteció la escenificación, el Tribunal Colegiado eludió apreciar que más que velar por la integridad de las víctimas, la policía los colocó o retuvo en

SIN TEXTO



el sitio y que éstas participaron, voluntaria o involuntariamente, en el simulacro de operativo.

Es decir, las circunstancias particulares son más complejas de lo que pretendió justificar la ejecutoria de amparo para desvalorar la violación.

El debate convoca así otra cuestión constitucional. ¿Colocar a víctimas en la escenificación de un operativo corresponde al dispositivo constitucional de otorgar atención médica y psicológica urgente?

Ignorar los puntos que anteceden, es pasar por alto constancias de autos y tratar de justificar el proceder arbitrario de los agentes policiales y sus mandos. Es posible que ese tiempo no se pueda medir con exactitud en horas y minutos, pero el mismo Tribunal Colegiado reconoció que entre la detención y la puesta a disposición transcurrió un lapso considerable.

El mandato de poner a disposición en forma inmediata a los indiciados es un dispositivo universal, reconocido en casi todas las legislaciones constitucionales y procesales. Se trata de hecho de una las salvaguardas más antiguas contra el proceder arbitrario y su evolución está íntimamente ligada al desarrollo del remedio de *habeas corpus*.

Para ilustrar y dar cuenta de la trascendencia de la cuestión que se plantea, transcribo la parte conducente de la Constitución Española de 1978:

Art. 17. 4. "La ley regulará un procedimiento de *habeas corpus* para producir la inmediata puesta a disposición de la persona detenida ilegalmente..."

Adicionalmente, el artículo 16 constitucional reformado ha ampliado la garantía al elevar a su texto la obligación de producir un registro inmediato de la detención. Una obligación elevada a rango constitucional que dé cuenta y certeza de las condiciones de detención, lo que en el caso no aconteció.

La Ley Suprema no sujeta a condición el respeto al derecho fundamental. Taxativamente ordena la puesta a disposición inmediata, sin dilación del inculpado, sin excepción alguna.

La obligatoriedad del mandato se verifica en las disposiciones del código adjetivo que regula los derechos procesales del inculpado, concretamente el artículo 193:

"Las autoridades que realicen cualquier detención o aprehensión deberán informar por cualquier medio de comunicación y sin dilación alguna, a efecto de que se haga el registro administrativo correspondiente y **que la persona sea**

SIN TEXCO



17

presentada inmediatamente ante la autoridad competente. La autoridad que intervenga en dicha detención elaborará un registro pormenorizado de las circunstancias de la detención.

Desde el momento de la detención hasta la puesta a disposición ante la autoridad ministerial correspondiente, se deberán respetar los derechos fundamentales del detenido.

El Ministerio Público constatará que los derechos fundamentales del detenido no hayan sido violados.

La violación a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores será causa de responsabilidad penal y administrativa.

Adicionalmente, la reforma a la fracción IX apartado A del artículo 20 constitucional, publicada en el 18 de junio de 2008, consagra y regula el principio de exclusión de las pruebas obtenidas ilícitamente.

La ley sanciona al servidor público que, por el mero incumplimiento, sin necesidad de lesión fáctica, viole un derecho constitucional y, de manera directa, con la nulidad de todas las pruebas o actuaciones obtenidas a partir de la violación del derecho fundamental.

No es correcto pretender conferir validez a un acto lesivo de las garantías constitucionales y justificar la omisión en la ausencia de daño o lesión del inculcado ni tampoco en la protección de derechos de terceros.

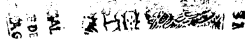
Posición contraria, obligaría a dejar a las agencias del sistema penal un amplio margen dispositivo respecto a la aplicación de las garantías del individuo, es decir que el remedio contra los excesos del poder quedaría en manos del poder mismo.

Así, lo cierto es que la quejosa, después de su detención no fue puesta sin demora a disposición de autoridad competente. La ejecutoria efectuó una interpretación justificativa de la actuación policial e ignoró las circunstancias del caso como es el hecho evidente de que la policía federal de investigación, sus mandos y sus agentes, contravinieron la norma constitucional.

Por ello mismo, resulta de trascendencia que el Alto Tribunal se pronuncie sobre el alcance de los términos "sin demora" e "inmediatamente", "sin dilación" que contiene el texto constitucional respecto de la puesta a disposición de personas detenidas y si son admisibles u oponibles a la garantía constitucional causas de fuerza mayor que no están legisladas o justificadas.

TERCERO.- La sentencia violenta directamente el principio constitucional de exclusión de prueba ilícita y el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SIN TEXTO



La demanda de amparo convocaba al Tribunal Colegiado a examinar a la luz de artículo 22 constitucional que prohíbe el tormento de cualquier especie la declaración del coimputado que sirvió de indicio incriminatorio para integrar prueba circunstancial.

Concretamente, la demanda de amparo expresó:

"... el tribunal unitario responsable minimizó la prueba de las lesiones y pretendió justificarlas como un sometimiento legítimo. Su razonamiento violentó el **artículo 22 constitucional** e ignoró el artículo 8° de la Ley Federal aplicable y los dispositivos de las Convenciones Internacionales en cita."

Empero, y en cumplimiento al ordinal 88 de la Ley de Amparo, la ejecutoria que ahora impugnó se limitó a decir:

"Afirma que el sumario arroja suficientes elementos que demuestran que recibió golpes y fue sometido a violencia... con lo que se violentó el **artículo 22 constitucional** e ignoró el artículo 8 de la Ley Federal aplicable y los dispositivos de las Convenciones Internacionales en cita..."

Lo anterior es infundado, pues como ya se dijo, en caso no concedido que hubiera sido víctima de tortura, ello no demuestra que los incoados hayan sido detenidos con anterioridad a lo manifestado por los agentes aprehensores como al parecer pretende argumentar la impetrante de garantías..."

La ejecutoria de nueva cuenta omitió entrar al fondo de la cuestión planteada e incurrió en violación al principio de congruencia, es decir desplegar una tutela judicial efectiva y dimitir el debate en cita.

Implícitamente, la ejecutoria aceptó, aún y cuando en actuaciones hay evidencia de violencia o tormento sobre un acusado, que una confesión coaccionada tiene validez.

Pues bien, la cuestión deviene de total importancia a la naturaleza del procedimiento penal y concretamente al principio de exclusión de prueba ilícita que se encuentra implícito en el conjunto de garantías judiciales que aseguran el debido proceso y la protección de la persona humana⁶.

La cuestión que sigue a debate es entonces: ¿Si en el marco del artículo constitucional que prohíbe el tormento de cualquier especie puede ser válida y servir de evidencia una confesión coaccionada?

¿Si a la luz del principio de exclusión de prueba ilícita sigue siendo aplicable la tesis de rubro **CONFESION COACCIONADA, DEBE**

⁶ Principio que ahora además ha sido consagrado explícitamente en el artículo 20 apartado A, fracción IX. **Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula.**

SIN TEXTO

19

DARSELE VALIDEZ CUANDO SE ENCUENTRA CORROBORADA CON OTROS DATOS⁷ que invocó el Tribunal Colegiado?

El tormento, la injustificada violencia policial y su forma extrema, la tortura, son actos prohibidos expresamente por el texto constitucional.

Por tanto, ¿Es la coacción un hecho ilícito que obliga a la autoridad judicial a excluir del acervo probatorio una confesión o declaración coaccionada?

¿Es admisible en juicio una confesión coaccionada?

El escrutinio de la investigación arroja que el coimputado sufrió y presentó lesiones, certificadas por médico, al momento de rendir declaración ministerial. Ahora bien, la presencia de lesiones injustificadas confirma que la investigación violentó los más fundamentales derechos humanos.

Las garantías constitucionales, y especialmente la prevista en el artículo 22 que prohíbe el tormento, son la fuente del principio de exclusión de prueba ilícita.

Para mejor ilustración de la cuestión planteada, el texto constitucional reformado establece ya de manera expresa que **"Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula."**

Luego entonces, dicha confesión debió haber sido excluida del acervo probatorio al tenor de una interpretación constructiva del texto constitucional previsto en el artículo 22.

CUARTO.- La sentencia interpreta inexactamente el principio de **supremacía constitucional** previsto artículo 133 de la Ley Fundamental y viola el artículo 14 constitucional respecto al alcance de las formalidades esenciales del procedimiento.

El Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito juzgó fundado el concepto de violación fundado sobre el **derecho de un extranjero a ser informado de la asistencia consular**. No obstante, lo estimó inoperante.

El Tribunal Colegiado arribó a declarar fundada la violación conforme una interpretación del artículo 133 Constitucional y su relación con los derechos fundamentales reconocidos en instrumentos internacionales. Para cumplir con el requisito del artículo 88 de la Ley de Amparo, cito la parte conducente:

"En el noveno concepto de violación [...] Argumento de inconformidad que resulta **parcialmente fundado**, pero inoperante... se advierte que el agente del Ministerio Público de la

⁷ Tesis 4064, página 1972, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 2000, Tomo II, Penal.

SIX TEXTS



Federación que previno en el conocimiento de los hechos a que se contrae el parte informativo de nueve de diciembre de dos mil cinco...al emitir el acuerdo de la misma fecha con que se dio inicio a la averiguación previa, omitió dar cumplimiento a lo que establece el artículo 128, fracción IV, in fine, del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece la obligación del Ministerio Público federal, cuando el detenido sea extranjero, de comunicar la detención a la representación consular que corresponda; omisión con la que igualmente transgredió el artículo 36 de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares, como bien lo señala la peticionaria de amparo, **instrumento internacional que debió acatar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución General de la República.**

El Tribunal Colegiado reconoció expresa y directamente el principio de supremacía constitucional. Lo hizo al señalar que el Ministerio Público debió acatar la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Empero, la ejecutoria que declaró inoperante la violación, omitió asumir las consecuencias que importa el principio de supremacía constitucional, y muy especialmente respecto de una garantía procesal, hoy reconocida con rango de derecho humano fundamental.

La cuestión postula interrogantes que piden una obligada hermenéutica constitucional.

¿Debe considerarse el derecho a ser informado y a recibir la asistencia consular un derecho fundamental del indiciado extranjero?

¿En su caso, y por el principio de supremacía constitucional, debe considerarse el derecho a ser informado de la asistencia consular, consagrado en un tratado internacional, una formalidad esencial de igual jerarquía al derecho a una defensa adecuada, a contar con abogado y recibir consejo legal?

¿Si la violación a este derecho, importa una contravención al artículo 14 constitucional y al debido proceso, si se afecta la defensa del acusado o vicia ipso facto el procedimiento?

¿Si, conforme a la doctrina de actos propios⁸ y el principio de supremacía constitucional, son relevantes ante los órganos jurisdiccionales nacionales, las posiciones procesales sostenidos por el Estado Mexicano en tribunales internacionales, o las opiniones consultivas o fallos de esos mismos tribunales?

⁸ La doctrina de los actos propios, en latín conocida bajo la fórmula "*venire contra factum proprium non valet*", proclama el principio general de derecho que norma la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos. Constituye un límite del ejercicio de un derecho subjetivo, como consecuencia del principio de buena fe y, particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento consecuente.

SIN TEXTO

91

Para ir contestando las interrogantes, conviene reproducir la tesis:

EXTRANJERO SUJETO A AVERIGUACIÓN PREVIA O EN PRISIÓN PREVENTIVA. SE LE DEBE DAR A CONOCER EL DERECHO A SOLICITAR LA ASISTENCIA DE LA REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA DEL PAÍS DEL CUAL ES ORIGINARIO, ADEMÁS DE QUE SE INFORME A DICHA SEDE CONSULAR DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE AQUÉL.⁹

El artículo 36, punto 1, incisos b) y c), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, expresamente señala que todo extranjero sujeto a averiguación previa o en prisión preventiva, que se encuentre privado de su libertad, debe ser informado del derecho que le asiste de contactar al consulado de su país de origen para que conozca de su situación jurídica; así como a dicha representación diplomática a efecto de estar en posibilidad de recibir visita de los funcionarios consulares y en su caso, organizar su defensa ante los tribunales respectivos: **por tanto si la autoridad ministerial o bien jurisdiccional, omitieron cumplir con tal imperativo, es evidente la violación al procedimiento que vulneró la defensa del peticionario**, en consecuencia, a efecto de restituir al justiciable en sus garantías, debe cumplirse con la obligación de que sea asistido por la representación consular de su país de origen y de comunicar a ésta última respecto a la prisión preventiva del quejoso, empero no conlleva a declarar la nulidad de las actuaciones efectuadas durante el procedimiento que en lo general cumplan con las formalidades legales, mismas, que en respeto a la garantía de justicia pronta y expedita en la administración de justicia, prevista por el ordinal 17 del Pacto Federal, deberán permanecer incólumes. Y si la representación consular conducente, estima que debido a la asistencia jurídica brindada a su connacional, resulta legalmente indispensable, el ofrecimiento de un medio de convicción diverso a los desahogados previamente.

El propio Tribunal Colegiado reconoció la violación en mi contra y admitió el rango de fundamental al derecho violado:

“Aspecto anterior en el que resulta fundado el argumento de inconformidad.

Asimismo, no existe constancia en la averiguación previa, de que se le haya informado a la aquí quejosa, sobre su derecho a la asistencia consular, a que se refiere el mencionado artículo 36 de la Convención de Viena, antes mencionada.”¹⁰

“Como puede verse, el representante social de la Federación sí incurrió en transgresión a un derecho fundamental de la indiada.

No obstante, no se aprecia erróneo el argumento del magistrado responsable, de que la ley aplicable no establece como prerrogativa mayor a la de cualquier otro gobernado el que antes de declarar ministerialmente sobre hechos delictivos investigados en su contra, deba necesariamente estar asesorada o asistida por

⁹ Tesis III.2º.P248P de la Novena Época, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, agosto de 2010, páginas 2280 y 2281.

¹⁰ Hojas 1464 y 1465 de la versión pública de la sentencia.

STREET INDEX



22

determinada persona, institución o embajada, pues como se ha visto, si bien existe la disposición expresa en el código adjetivo, que obliga al Ministerio Público a comunicar la detención a un extranjero, a la representación diplomática de su país, el mencionado ordenamiento procesal no obliga al Ministerio Público de la Federación a esperar hasta el extranjero se encuentre asesorado por la embajada o consulado [de] su país, para recibir declaración ministerial; en tanto que el artículo 36 de la convención citada, tampoco dispone que las actuaciones de la autoridad investigadora, deban retrasarse por falta de la comunicación a la representación diplomática..."¹¹

Empero, el Tribunal Colegiado se **desentendió del principio de supremacía constitucional**, pues no apreció que la transgresión a un derecho fundamental, pudiese tener impacto procesal.

El Tribunal Colegiado admitió la violación a una norma de alta jerarquía y a un derecho fundamental, pero hizo nugatorio el contenido sustantivo de ese mismo derecho. Su valoración redujo así un derecho sustantivo a un mero derecho nominal. Como apuntó Sergio García Ramírez en su voto en la opinión Consultiva 16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convierte el derecho en "*meras fórmulas normativas, desprovistas de contenido real*" y en cuyas "*condiciones el acceso a la justicia se vuelve ilusorio.*"

El Tribunal Colegiado falló en observar que la falta de una adecuada información sobre los derechos de un extranjero, incidió de manera directa en la garantía de defensa adecuada, especialmente al momento de rendir declaración ministerial.

La ejecutoria no concedió **el peso debido a la violación, ni al principio de supremacía constitucional**. La omisión ministerial actualizó ciertamente una violación a la Convención Internacional y a la ley federal (Código Federal de Procedimientos Penales), pero también a la Constitución Política en sus artículos 14 (formalidades esenciales del procedimiento) y 20 (adecuada defensa.)

La ejecutoria del Tribunal Colegiado acusa incongruencia:

"**Si bien es cierto que esa violación al procedimiento que vulneró la defensa de la sentenciada, se encuentra comprendida en el artículo 160, fracción XVII, de la Ley de Amparo**, también lo es que para restituirla en el goce de sus garantías, debe cumplirse con la obligación de informarle la posibilidad de que sea asistida por la representación consular de su país de origen y de comunicar a esta última respecto a la prisión preventiva de la peticionaria de amparo ... Debe tenerse en cuenta que la violación a las garantías mencionada **no**

¹¹ Hojas 1465 de la versión pública de la sentencia.

Q
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L



INTERNATIONAL
COURT OF JUSTICE
HAAG



INTERNATIONAL
COURT OF JUSTICE
HAAG

conllea a declarar la nulidad de las actuaciones efectuadas durante el procedimiento que en lo general cumplan con las formalidades legales;

[N]o puede estimarse que la declaración ministerial de la quejosa fue obtenida de manera ilícita a consecuencia de esa violación...

Máxime que no debe perderse de vista que **es a la defensa ante los tribunales, a la que se refiere la mencionada convención**, defensa que sí pudo organizar la peticionaria de amparo con asesoramiento de su representación diplomática."

La ejecutoria es contradictoria, reconoce el rango de derecho fundamental al derecho a ser informado de la asistencia consular. Igualmente reconoce la violación a las leyes del procedimiento pero se abstiene de declarar por lo menos la nulidad de la declaración recibida en contravención de una formalidad esencial del debido proceso.

Cuál es el efecto que debe darse a esa violación? La ejecutoria del Tribunal Colegiado debió advertir que la declaración ministerial del nueve de diciembre de dos mil cinco, rendida sin haberse respetado el derecho a ser informado de la asistencia consular, incumplió una formalidad esencial del procedimiento.

Sobre la trascendencia e importancia de la cuestión, conviene repetir que los Estados Unidos Mexicanos impulsaron la defensa de este derecho ante tribunales internacionales, a saber, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia.

Y, que precisamente, ante la acción de México contra los Estados Unidos de América, la Corte Internacional de Justicia exhortó al país demandado a tener por fundamental el derecho a ser informado y recibir asistencia consular. Que ese derecho debería vincularse a los "Miranda Rights," el catálogo de derechos básicos de un detenido.

Cito aquí, al jurista Juan Manuel Gómez Robledo, sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia ante la acción de México.

"Debe destacarse, en este punto del razonamiento de la corte, en el que el máximo tribunal va más allá de lo dicho en LaGrand, el equilibrio logrado entre el requisito de que se compruebe la existencia del perjuicio como resultado de la violación del artículo 36 y la exigencia de que la revisión y reconsideración abarque tanto el veredicto como la pena, **"dando todo el peso debido, accorder tout le poids voulu, full weight to be given" a esta violación**. Este aspecto del fallo se reproduce en el párrafo 11 del dispositivo y con él la corte quiso, sin duda alguna, no permitir que se ponga en entredicho la importancia que asigna a la violación

SIN TEXTO



como tal del artículo 36. Si se lee este *dictum* a la luz del pronunciamiento sobre la vinculación con los "**Derechos Miranda**", que ya comentamos, la cuestión de la caracterización de los derechos del artículo 36 como derecho humano es ya de poca monta."¹²

Para efectos de la importancia de la cuestión que se eleva ante la jurisdicción de este Tribunal Constitucional, transcribo igualmente la opinión del juez Antonio Augusto Cançado Trindade, entonces juez de la Corte Interamericana y hoy de la Corte Internacional de Justicia.

"en el mundo interdependiente de nuestros días, la relación entre el derecho a la información sobre asistencia consular y los derechos humanos se impone por la aplicación del principio de la no discriminación, de gran potencial... y de gran importancia capital en la protección de los derechos humanos, extensiva a este aspecto de las relaciones consulares. Tal derecho, situado en la confluencia entre la confluencia de dichas relaciones y los derechos humanos, contribuye a extender el manto protector del derecho a aquéllos que se encuentran en situación de desventaja, los extranjeros detenidos- y que, por eso, más necesitan de dicha protección, sobre todo en los medios sociales constantemente amenazados o atemorizados por la violencia policial."¹³

QUINTO.- La sentencia interpreta inexactamente el alcance de la garantía de acceso a la justicia y equilibrio procesal, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para dar cumplimiento al artículo 88, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se procede a transcribir textualmente la parte de la sentencia que establece la interpretación directa de un precepto de la constitución:

*[...] Asimismo, el criterio de la autoridad responsable antes resumido, no implica en forma alguna violación a las **garantías de acceso a la justicia, de equilibrio procesal**, pues es evidente que fue sometida a proceso por un tribunal que estuvo ~~expedito~~ para impartir justicia en los plazos y términos que fijan las leyes; que emitió sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial y en forma gratuita, lo que denota que se respetó absolutamente su garantía de acceso a la justicia, en los términos que establece el **artículo 17 constitucional**, y el hecho de que las pruebas ofrecidas por su defensa no arrojen datos que la favorezcan, no implica en forma alguna que exista*

¹² Juan Manuel Gómez Robledo, El Caso... y Otros Nacionales Mexicanos (México c. Estados Unidos de América) ante la Corte Internacional de Justicia, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Volumen V, 2005.

¹³ Voto concurrente del juez Cançado Trindade, Opinión Consultiva 16/99. CIDH, 1999. Pág. 272.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
REPUBLICA DE CUBA
1960



25

parcialidad en el ánimo del juzgador, máxime que sus determinaciones se aprecian debidamente fundadas, motivadas y congruentes con el contexto probatorio, por lo que no puede argumentarse animadversión alguna en contra de la sentenciada, como al parecer pretende la misma, máxime que siempre tuvo expedito su derecho durante la instrucción del procedimiento para confrontar, contradecir y controvertir los elementos que sirvieron de base a la acusación, vigilar, cuestionar o exigir el desahogo de las diligencias conforme a las disposiciones legales y hacer valer todo aquello que la ahí procesada considerara pertinente para hacer efectivos sus derechos de defensa, por supuesto conforme a la legalidad aplicable a la materia.[...]"

El párrafo citado acusa de nueva cuenta una interpretación formalista. La quejosa no se duele de falta de parcialidad, tampoco de animadversión; la dolencia se expresó en tanto falta al principio de congruencia y exhaustividad en la valoración de las pruebas, tanto en primera, en segunda instancia y en la resolución que en esta vía se impugna.

El derecho de acceso a la justicia no puede quedar en una garantía formal de ser juzgado ante los tribunales en forma gratuita. Hoy, este derecho fundamental debe construirse en forma más amplia. Su interpretación convoca, por ejemplo, a lo que la Constitución Española denomina "tutela judicial."

La tutela judicial efectiva significa erradicar la indefensión. Citaré al caso, lo que la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español ha expresado sobre el tema.

"... La indefensión consiste en el impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación, más trascendente, es la situación en la que se impide a una parte,... en el curso del proceso,... justificar sus derechos e intereses para que le sea reconocidos, o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción..."¹⁴

En el caso concreto, es posible apreciar una ausencia de réplica a los conceptos de violación. El agravio importa una vulneración real a los principios de contradicción y congruencia puesto que la ejecutoria de amparo y el mismo el acto reclamado, omitieron un ejercicio dialectico y crítico de los argumentos de defensa y especialmente de las contradicciones más flagrantes de las piezas de cargo.

Ejemplo, la sentencia que se impugna sí apreció que
y el menor

en sus

¹⁴ Sentencia del Tribunal Constitucional :
27 de diciembre de 1978.

SIN TEXTO

1970
MAY 10 1970
FBI
REC-100

26

primeras declaraciones ante el personal ministerial que previno, manifestaron que al tener a la vista a la quejosa, **no la reconocían, ni por el físico, ni por la voz.**

Al respecto, procede destacar que la valoración de la prueba fue incongruente y se apartó de las elementales reglas de la lógica. Pues el hecho de que en su primera declaración ministerial dijera que en caso de recordar algún otro detalle de su secuestro lo haría del conocimiento del Ministerio Público, es evidente que se refiere a detalles omitidos en esa declaración, no a detalles ya manifestados; se refiere a detalles nuevos, no a corregir lo ya dicho; ni tampoco justificar una evidente retractación.

Asimismo, la sentencia no observó que la declaración de con la que se pretende adminicular la declaración de es sospechosa y carece de un tracto temporal que de cuenta de su incorporación a la averiguación previa.

en declaración ministerial de 10 de Febrero de 2006, compareció ante el Ministerio Público, sin haber sido mencionado como por alguno de los testigos. Refirió conocer a y que en relación a su secuestro, que se percató que "en varias ocasiones, es decir, dos o tres veces, cuando la señora iba a mi puesto de a comprar, inmediatamente llegaba una persona que nunca había visto y que por su forma de vestir y de hablar se me hacía rara, ya que era una persona que vestía bien y que su forma de hablar era diferente, es decir que no podía pronunciar bien el español".

Empero, no había mencionado ni el nombre de La testigo introdujo cambios su declaración ministerial de quince de febrero de 2006 y lo mencionó, después de que ya había comparecido.

En el caso procede afirmar, que el Tribunal Colegiado no contestó el argumento ni se percató del hecho relevante de que no hubiera mencionado a como testigo, o de que fue declarado, cinco días antes de que hiciera mención siquiera a los hechos que narró No se explica de donde resultó conducente recabar el testimonio de por parte de la Institución Ministerial.

Por lo tanto, se plantea que en el caso no existe congruencia alguna en el material probatorio, y que estas incongruencias no fueron debidamente contestadas, o razonadas dialécticamente por el órgano jurisdiccional.

Tampoco se analizó en debida forma que la declaración del menor , en la que dice reconocer a la aquí

SIN SIX TO

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
HONOLULU, HAWAII

27

quejosa como participante en los hechos en los que estuvo privado de la libertad, no es más que una simple retractación de su declaración ministerial del nueve de diciembre de 2005, en donde ya había afirmado que no reconocía a la quejosa.

Se dejó de analizar de igual manera, que el testimonio de , además de que, como él mismo reconoce en su declaración se guió por las imágenes de la televisión donde aparecía la hoy quejosa, y no se contestó el argumento que exponía la exclusión de esta prueba por ilicitud en la forma como fue recabada la prueba.

Finalmente, también se violentó el principio de contradicción en cuanto a la valoración del testimonio de y especialmente respecto de un punto clave en la credibilidad de dicho testigo y que es su versión de la punción en el dedo.

Al respecto debe decirse que el único dato sobre este hecho clave es el dicho del propio , evidentemente insuficiente, ya que en autos, existe prueba pericial de la defensa, no impugnada en el proceso.

En consecuencia, el Tribunal Colegiado realizó una interpretación formalista del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La interpretación expansiva de esta garantía convoca a estudiar los aspectos de efectiva tutela judicial, sobre la base de los principios de contradicción, congruencia y exhaustividad, de tal manera que no se produzca una indefensión argumentativa.

Es decir, la garantía de acceso efectivo a la justicia significa que los alegatos o conceptos de violación sean revisados en conciencia y contestados en forma congruente conforme a un razonamiento dialectico. Que se cumpla con los principios de congruencia y exhaustividad en cuanto al análisis y valoración de las pruebas, y no en cambio, que la argumentación judicial devenga una justificación argumentativa sobre las deficiencias y vicios de las pruebas.

SEXTO.- La sentencia causa agravio en la interpretación del principio constitucional de Inocencia, hoy explícito en la Carta Magna.

De nueva cuenta y en acatamiento al artículo 88, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, transcribo la parte conducente en la que la ejecutoria del Tribunal Colegiado interpretó el principio de presunción de inocencia sin apreciar que el mismo se encuentra implícito en los Artículos 14 y 20 de la Constitución Política. Dice la ejecutoria:

"... En esa tesitura, lo resuelto no violenta en perjuicio de la peticionaria de amparo las garantías previstas en el **artículo 14, de la Carta Magna**, ya que como se ha precisado fue privada de

SIN TEXTO



su libertad mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, como lo fue en la aludida causa /2010, instruida en el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, **en las que en lo esencial se cumplieron las formalidades sustanciales del procedimiento penal [...].**"

".. debe recordarse que **la presunción de inocencia que contempla la Constitución General de la República, garantiza esa presunción a todo gobernado, frente a tribunales constitucionalmente constituidos, y no frente a la opinión pública**; sin que exista elemento probatorio alguna en el sentido de que el juzgador de segundo se hubiese visto influenciado por la opinión pública al momento de resolver. Ni puede estimarse que el hecho de que hubiera sido videograbada o fotografiada en lo que llama "el montaje", determine que el juzgador debe absolverla... pues si se sigue esa línea de pensamiento, se debería absolver a todo aquél que sea fotografiado en el momento de detención, lo que es sencillamente absurdo."

En suma, la ejecutoria reconoce que la presunción de inocencia está contemplada en la Constitución General de la República, y por tanto que se trata de un principio constitucional. La cuestión es por tanto un asunto de interpretación constitucional.

Al mismo tiempo, habiendo reconocido el rango constitucional del principio de inocencia, la ejecutoria sostuvo que éste únicamente es oponible ante los tribunales.

Se cuestiona entonces la interpretación del Tribunal Colegiado por ser reduccionista en cuanto a la naturaleza y alcance de este principio constitucional. Más aún, pugna en forma directa con criterios jurisprudenciales de esta Suprema Corte de Justicia.

Cito al caso, la tesis de rubro: **"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL"**¹⁵

El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, **es un derecho fundamental** que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, **este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no participe"** en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la

¹⁵ 2a. XXXV/2007 Novena Época. Registro: 172433 Instancia: Segunda Sala. Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Mayo de 2007 Página: 1186

SIN TEXTO



29

culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia.

En igual sentido, la tesis de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL**¹⁶.

En efecto, como apunta el criterio citado, el principio de inocencia es un derecho humano fundamental. Al ser una garantía, se trata además de un principio oponible a toda autoridad, incluidas ministerio público y policía investigadora. Opera, como ha interpretado el Alto Tribunal Constitucional en situaciones procesales y extraprocesales.

Ciertamente, el principio de inocencia es una garantía que integra y complementa el derecho al debido proceso. Principio de inocencia y debido proceso, como se dijo en la demanda de amparo, son dos caras de una misma moneda. En otras palabras, no hay debido proceso si no se respeta el principio de inocencia.

Para ilustrar mejor, cito de nueva cuenta otro dispositivo de la Constitución Española de 1978 que puede servir de guía interpretativa respecto de la relación estrecha que guardan el principio de inocencia y el debido proceso.

Art. 24. 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

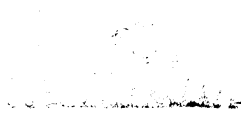
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpables y a la **presunción de inocencia**.

La ejecutoria equivoca efecto con causa. Los conceptos de violación expusieron que dicho principio fue vulnerado por la autoridad, no por la opinión pública. Fue la policía federal, no los medios de comunicación, quien escenificó una detención y generó, entre otras cosas, una percepción pública.

Si se aprecia bien el hecho, es decir el montaje, se podrá concluir que la autoridad policial, apartándose de sus principios de actuación, construyó su acusación y su versión de los hechos desde los medios.

¹⁶ El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de agosto en curso, aprobó, con el número XXXV/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dieciséis de agosto de dos mil dos.

SLIPKNOT



Es ineludible apreciar esa circunstancia, obviarla significa ignorar la realidad, lo que no es admisible si se pretende una tutela judicial efectiva.

El entendimiento y la determinación del peso específico los derechos y libertades de las personas, constituyen la piedra angular del Estado democrático y constitucional. La Constitución no ha permanecido ajena al nuevo paradigma constitucional que expande su discurso sobre los derechos fundamentales y sus garantías.

Con las reformas constitucionales de 2008, la presunción de inocencia, antes reconocida de manera implícita como un principio¹⁷, se establece ahora como derecho fundamental expreso en el artículo 20, apartado B, inciso a de la Constitución y constituye una de las premisas básicas en materia de debido proceso.

El Tribunal Colegiado interpretó la garantía del debido proceso y el principio de inocencia en forma dogmática, atendiendo únicamente al sentido literal del primer párrafo del artículo 14, cuando debió hacer una interpretación conjunta y armónica de dicho precepto con todo el entramado garantista que define los derechos fundamentales que rigen el procedimiento penal.

Para el Tribunal Colegiado las formalidades sustanciales del procedimiento fueron satisfechas.

El razonamiento que hace el Tribunal Colegiado es insuficiente para dar contenido a la noción misma de debido proceso. El **principio de Inocencia**, cuyo corolario es el principio de duda razonable (*In dubio pro reo*) es piedra angular en la construcción de estas reglas y no fue debidamente interpretado.

El Tribunal Colegiado sostuvo que el principio de inocencia es únicamente oponible ante los tribunales.

La anterior proposición equivoca el alcance de los derechos fundamentales en un Estado moderno de Derecho. Equivoca la realidad, a saber: la exhibición mediática comprometió la posición de las autoridades, policial y luego investigadora, con una versión y violentó así desde el primer momento el principio de inocencia y la verdad del expediente.

La ilegalidad de la exposición mediática fue reconocida parcialmente:

"[A]siste la razón a la peticionaria de amparo cuando manifiesta que no hay fundamento legal o protocolo que permita a la autoridad

¹⁷ En la tesis de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL" P. XXXV/2002 Novena Época Tesis Aislada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Agosto de 2002 Página: 14

SIN TEXTO

31

poner a un indiciado a disposición de los medios y a ser fotografiado o filmado, y ser obligado contra su voluntad a estar en un simulacro escénico. Sin embargo, como ya se ha dicho repetidamente, lo que aparece en los videos de los programas televisivos, no fue tomado en consideración por el tribunal señalado como autoridad responsable ni en beneficio, ni en perjuicio de la quejosa [...]"¹⁸

Sin embargo, el Tribunal Colegiado eludió pronunciarse sobre los efectos o impacto procesal de dicha actuación ilegal bajo el argumento de que los videos simplemente no fueron tomados en cuenta por la autoridad responsable que condenó.

Empero, la cuestión obliga a un examen más profundo. La participación de la Agencia Federal de Investigación para mostrarme ante los medios masivos de comunicación como una secuestradora contaminó el proceso, pues comprometió la versión de la autoridad.

Los derechos fundamentales son "derechos universales, indisponibles de la persona física, del ciudadano, del sujeto capaz de obrar"¹⁹. Tienen vocación de universalidad.

Frente a "las crecientes exigencias de protección de los derechos y de las libertades fundamentales, debe corresponder una mayor firmeza al enfrentar las infracciones a los valores básicos de las sociedades democráticas"²⁰, por lo que la presunción de inocencia debe ser protegida constitucionalmente ante actos de cualquier autoridad, no sólo la judicial.

El orden constitucional busca garantizar que ninguna persona sea sometida al escrutinio público sin antes haber sido puesta a disposición de las autoridades correspondientes, encargadas de investigar la verdad, para después ser juzgada en un contexto libre de señalamientos y exposición masiva a la opinión.

Actualmente, el derecho de toda persona a que se le presuma su inocencia no se limita a los tribunales, el principio entraña un reconocimiento constitucional de mayor envergadura y alcance, pues toda persona debe contar con cobijo constitucional en tanto no se pruebe lo contrario.

Precisado lo anterior, es evidente que al resolverse el amparo directo /2010, para el Tribunal Colegiado lo mediático fue un dato sin peso, sin importancia y sin alcance.

¹⁸ Hoja 1431 de la Versión Pública de la sentencia.

¹⁹ Luigi Ferrajoli, *Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales*, Trotta, 2001, Madrid, página 141.

²⁰ Caso *v. Perú*, sentencia de 18 de agosto de 2000, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el mismo sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos, caso *supra* nota 51, párrafo. 101.

SIN TEXTO

38

Dejó de apreciar, en debida forma, que los videos exhibidos en autos relacionados con diversos programas televisivos de noticias, transmitidos el nueve de diciembre de dos mil cinco -relativos a la detención- sí son una prueba que merece un impacto procesal.

Luego entonces, es claro que ese derecho fundamental fue trasgredido, pues la quejosa fue presentada en un "montaje televisivo", por llamarlo de alguna manera, que era detenida al momento en el que se encontraban tres personas privadas de su libertad y que en ese momento eran liberadas por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones.

Al resolverse el amparo directo /2010, solo se dijo que esos videos, tal y como lo había señalado la autoridad señalada como responsable ordenadora, carecían de valor probatorio y no habían sido usados en perjuicio de la impetrante de garantías.

Sin embargo, nada se dijo que esos videos, que ponen de manifiesto el actuar indebido de los elementos de la Agencia Federal de Investigación, quienes, en lugar de poner a la indiciada a la brevedad a disposición del Ministerio Público de la Federación, la pusieron a disposición de los medios de comunicación. Esa situación comprometió la versión de la autoridad y la verdad del expediente con una imagen falsa. La construcción de una mentira estuvo a la base del expediente de averiguación previa.

Ahora bien, es sobre el terreno del derecho penal que se definen, de la manera más dramática, las relaciones entre la autoridad y el ciudadano. Por ello la violación de uno de sus principios más elementales, el de considerar a un imputado inocente hasta estar en condiciones de integrar una defensa real y adecuada, trasciende y vicia por completo todo el procedimiento.

Cuando el supuesto día de mi detención, la policía federal me forzó a participar en una escenificación mediática, se frustró toda posibilidad de un debido proceso. El reconocimiento constitucional fue destruido en mi caso, cualquier opinión sobre mi participación en los delitos que se investigaban se volcó en mi contra.

INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA DE LA CONSTITUCIÓN: "La democracia constitucional viene a configurarse como una construcción jurídica del todo compuesta por garantías e instituciones de garantía"²¹.

De esta manera, la interpretación hecha en ejercicio de la función jurisdiccional, propiamente la de control de constitucionalidad, no puede quedar truncada o limitada por un análisis *literalista* de las normas que reflejan principios mínimos de todo el orden constitucional.

²¹ Luigi Ferrajoli en *Garantismo Penal*, para *Isonomía*, Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, ITAM; Escuela Libre de Derecho, Número 32, abril de 2010.

IN TEXT O

33

Las instituciones públicas, en este caso el tribunal de control constitucional, debe actuar como "instrumento" de tutela de los derechos fundamentales y de la paz: debe utilizar al derecho penal como instrumento de minimización de la violencia en la sociedad.

La Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos humanos han dicho que los cuerpos normativos de derechos fundamentales son "instrumentos vivos", cuya **interpretación** tiene que acompañar la **evolución** de los tiempos y las condiciones de vida actuales.²²

Tal interpretación es consecuente con el rol de las constituciones modernas y es congruente con el constitucionalismo respetuoso de derechos y garantista al que aspiramos.

Por lo expuesto,

A esta SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, respetuosamente pido:

PRIMERO.- Tener por presentado el **RECURSO DE REVISIÓN** en contra de la resolución.

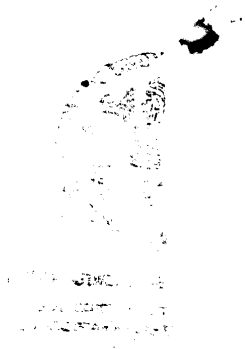
SEGUNDO.- Admitir el recurso interpuesto.

TERCERO.- Al momento de resolver el recurso, tomar en consideración el contenido de este escrito y que cuentan con la oportunidad de dar vida a las palabras de José María Morelos y Pavón: *"Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario."*

CUARTO.- Declarar fundados los agravios; revocar la sentencia impugnada y conceder a la protección de la Justicia

²² Caso *.....* v. Colombia, sentencia de 1 de julio de 2006 de Corte Interamericana de Derechos Humanos, párrafo 155. En el mismo sentido Caso *.....* supra 11 nota 9, párrafo 117; Caso de la Sentencia 17 de junio de 2005; El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/97 de 14 de noviembre de 1997. Serie A No. 16, párr. 114; Caso *.....* sentencia /72 de 25 de abril de 1978 de la Corte Europea Derechos Humanos, párrafo 31.

SIN TEXTO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

34
FORMA A-54

QUEJOSA:

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO:
517/2011
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS
ASUNTOS

En México, Distrito Federal, a nueve de marzo de
dos mil once, cuenta al Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Oficio 729, de ocho de marzo de dos mil once, del Presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.	Original
2. Juicio de amparo directo DP. /2010.	Un cuaderno
3. Expedientillo formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa.	Un cuaderno
4. Una memoria USB.	-----
5. Pliego de expresión de agravios de	Copia simple

Las constancias anteriores se recibieron en la
Subsecretaría General de Acuerdos el ocho del mes y año que
transcurren. Conste.

México, Distrito Federal, a nueve de marzo de dos
mil once.

Con el oficio de remisión de los autos y el escrito de
cuenta, fórmese y regístrese el toca de revisión relativo al juicio
de amparo directo promovido por la parte quejosa citada al rubro,
contra actos del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del
Primer Circuito. Ahora bien, como en el caso la persona
mencionada al inicio de este acuerdo, hace valer recurso de
revisión en contra de la sentencia de diez de febrero de dos mil

once, dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo ADP. 2010, debe estimarse que del presente asunto corresponde conocer a la Primera Sala de este Alto Tribunal, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que del análisis inicial que corresponde a la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que en el propio escrito la recurrente se duele de la interpretación directa realizada por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, respecto de los artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la sentencia penal impugnada en el respectivo juicio de garantías, de donde se sigue que, en principio, el Pleno de este Alto Tribunal no es legalmente competente para conocer del citado recurso; por tanto, remítanse el presente toca, los autos del referido juicio de amparo directo y las demás constancias que sean necesarias a la aludida Sala, para los efectos legales a los que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicable por analogía, la tesis aislada del Pleno de este Máximo Tribunal número P. XVIII/2000, en cuyo rubro se establece: ***"COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE LA REVISIÓN DE SENTENCIAS DICTADAS POR JUECES DE DISTRITO EN LAS QUE SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. SE SURTE CUANDO LA INTERPRETACIÓN SE REFIERA A MATERIAS DE SU ESPECIALIDAD."***, publicada en la página ochenta y cinco, tomo XI, marzo de dos mil, Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la inteligencia de que el



SECRETARÍA DE JUSTICIA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA DE LEY



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

pronunciamiento realizado en este proveído sobre la competencia para conocer del respectivo recurso de revisión de ninguna manera prejuzga sobre el cumplimiento de los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, los que en el presente asunto corresponde valorar, inicialmente conforme a lo previsto en el artículo 90, párrafos primero y segundo, de este último ordenamiento, al Presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, en todo caso, al órgano colegiado de este Alto Tribunal que pudiera llegar a conocer del mismo. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 14, fracción II, primer párrafo, primera parte, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en lo señalado en el punto Segundo del Acuerdo Plenario número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, se acuerda:

I. Remítanse a la Primera Sala de este Alto Tribunal, el toca de revisión en que se actúa, el juicio de amparo directo número ADP 1/2010, y las demás constancias que sean necesarias para los efectos legales consiguientes, y

II. Notifíquese por lista.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Juan N. Silva Meza, quien actúa con el Subsecretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz.

EN 10 MAR 2011 POR LISTA DE LA MISMA FECHA, SE NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN ANTERIOR A LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO DOY FE. *[Signature]*

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS A OÍR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, DOY FE. *[Signature]*



PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN
SUPLENTE
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA



PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN
SUPLENTE
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

26
FORMA 5.3

QUEJOSO:

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
NÚMERO: 00517/2011
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS
ASUNTOS

En la misma fecha, para notificar el acuerdo que
antecede, se giraron los siguientes oficios:

OF. SSGA-XI-9027/2011.- LICENCIADO HERIBERTO
PÉREZ REYES.
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA
SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN.
PRESENTE.

México, Distrito Federal, a nueve de marzo de dos mil once.

ACTUARIO JUDICIAL

LIC. MARCO A. FERNÁNDEZ MORALES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TEXT

SIN

OPINION
APPROVED



DEPARTMENT OF JUSTICE
SECRETARY OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

3+

FORMA A - 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

QUEJOSA:

**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
NÚMERO: 00517/2011**

**AMPARO DIRECTO
EN REVISIÓN
00517/2011**

ANEXOS:

Los autos originales relativos al amparo directo en revisión número 517/2011, el juicio de amparo directo DP. 2010, y un expedientillo formado con motivo del recurso de revisión que se hace valer al índice de este órgano jurisdiccional y del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito cuyas últimas fojas son los folios (36) y (37) y (37) fojas, respectivamente.

Una memoria USB

OF. SSGA-XI-9027/2011.- LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES.
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
PRESENTE.

En el expediente que se menciona al margen, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el acuerdo siguiente:

"México, Distrito Federal, a nueve de marzo de dos mil once.

Con el oficio de remisión de los autos y el escrito de cuenta, fórmese y regístrese el toca de revisión relativo al juicio de amparo directo promovido por la parte quejosa citada al rubro, contra actos del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. Ahora bien, como en el caso la persona mencionada al inicio de este acuerdo, hace valer recurso de revisión en contra de la sentencia de diez de febrero de dos mil once, dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo ADP. 1/2010, debe estimarse que del presente asunto corresponde conocer a la Primera Sala de este Alto Tribunal, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que del análisis inicial que corresponde a la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que en el propio escrito la recurrente se duele de la interpretación directa realizada por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, respecto de los artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la sentencia penal impugnada en el respectivo juicio de garantías, de donde se sigue que, en principio, el Pleno de este Alto Tribunal no es legalmente competente para conocer del citado recurso; por tanto, remítanse el presente toca, los autos del referido juicio de amparo directo y las demás constancias que sean necesarias a la aludida Sala, para los efectos legales a los que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicable por analogía, la tesis aislada del Pleno de este Máximo Tribunal número P. XVIII/2000, en cuyo rubro se establece: "COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE LA REVISIÓN DE SENTENCIAS DICTADAS POR JUECES DE DISTRITO EN LAS QUE SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

PRECEPTO CONSTITUCIONAL. SE SURTE CUANDO LA INTERPRETACIÓN SE REFIERA A MATERIAS DE SU ESPECIALIDAD.", publicada en la página ochenta y cinco, tomo XI, marzo de dos mil, Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la inteligencia de que el pronunciamiento realizado en este proveído sobre la competencia para conocer del respectivo recurso de revisión de ninguna manera prejuzga sobre el cumplimiento de los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, los que en el presente asunto corresponde valorar, inicialmente conforme a lo previsto en el artículo 90, párrafos primero y segundo, de este último ordenamiento, al Presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, en todo caso, al órgano colegiado de este Alto Tribunal que pudiera llegar a conocer del mismo. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 14, fracción II, primer párrafo, primera parte, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en lo señalado en el punto Segundo del Acuerdo Plenario número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, se acuerda:

I.- Remítanse a la Primera Sala de este Alto Tribunal, el toca de revisión en que se actúa, el juicio de amparo directo número ADP. /2010, y las demás constancias que sean necesarias para los efectos legales consiguientes.

II.- Notifíquese por lista.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Juan N. Silva Meza, quien actúa con el Subsecretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz."

FIRMADO
MAEO/LGVP

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a nueve de marzo de dos mil once.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

LGVP

ACTUARIO JUDICIAL
LIC. MARCO A. FERNÁNDEZ MORALES

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

2011 MAR 10 AM 9 06

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



C/ ALEJO
Quejosa:

Amparo Directo: /2010.
n.

**CC. MAGISTRADOS DEL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.**

por propio derecho,
con el carácter de quejosa en los autos del Juicio de Amparo Directo
cuyo número de partida se indica al rubro, respetuosamente
comparezco y expongo:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, 83,
fracción V, 84, fracción II, 86, 88, 89 y demás relativos y aplicables de
Ley de Amparo, por medio del presente escrito vengo a interponer
RECURSO DE REVISIÓN, en contra de la resolución pronunciada por
sus Señorías, al resolver los autos del Juicio de Amparo Directo
número 2010, en la sesión correspondiente al 10 de Febrero de
PE. AL 2011; adjuntando al presente, en original y las copias de ley, el
correspondiente escrito de expresión de agravios; con la atenta suplica
de que en el término que marca la Ley, se sirvan remitirlo a la H.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su trámite y resolución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a
USTEDES CC. MAGISTRADOS, ATENTAMENTE PIDO:

ÚNICO.- Acordar de conformidad lo solicitado.

SAN LEXIO



ESTIMO TRIBUN
TN-MATERIA
PRIMER CA



ORDER
1944



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011.

38
39
FORMA A-94

En diez de marzo de dos mil once, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el oficio SSGA-XI-9027/2011, signado por el Actuario Judicial adscrito a la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, recibido en la Secretaría de Acuerdos de esta Primera Sala, el diez del mes en curso, al que se acompañan los anexos detallados en el propio oficio. Conste. -----

México, Distrito Federal, a diez de marzo de dos mil once. -----

Visto el oficio número SSGA- XI-9027/2011, de fecha nueve de marzo de dos mil once, signado por el Actuario Judicial adscrito a la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, en el que transcribe el proveído dictado en la misma fecha, por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 517/2011, en que se actúa; y anexa el juicio de amparo directo penal

/2010 y el expediente formado con motivo del recurso de revisión, al considerarse que corresponde a esta Sala el conocimiento del recurso, toda vez que en el proveído antes citado, se precisa que la quejosa hace valer recurso de revisión en contra de la sentencia de diez de febrero del presente año, dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el juicio de amparo directo número /2010; fallo en el cual, la recurrente se duele de la interpretación directa realizada por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, respecto de los artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acúsele recibo. -----

Con fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21 fracción III, inciso a) y 25 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los Puntos Segundo, párrafo Segundo y Cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve siguiente, esta Primera Sala acepta la competencia para conocer del recurso de revisión que interpone la quejosa. -----

Como de los agravios se advierte que la recurrente señala que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito realizó una interpretación directa respecto de los artículos 14,16, 17, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. y toda vez que la resolución de diez de febrero del presente año, misma que se terminó de engrosar diecisiete de febrero siguiente, fue notificada personalmente a la recurrente, el dieciocho del mismo mes y año, y el recurso fue interpuesto el siete de marzo siguiente; lo procedente es **ADMITIR EL RECURSO DE REVISIÓN** interpuesto, con fundamento en el párrafo primero del artículo 90 de la Ley de Amparo; con reserva de los motivos que, en su caso, pudiese considerar la Sala para determinar la improcedencia del recurso.-----.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 25, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se designa como ponente al **MINISTRO que suscribe**, a quien por turno corresponde formular el proyecto de resolución respectivo.-----.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

- 3 -

34
40
FORMA A-84

Hágase del conocimiento al Presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal; la anterior determinación, para los efectos legales a que haya lugar.-----

Desglósese del expedientillo el escrito original de presentación del recurso de revisión para ser agregado a este toca, previa copia certificada que se deje en el mismo.-----

Notifíquese; personalmente a la recurrente en el Centro de Readaptación Social de Tepepan; por oficios a la autoridad responsable y al Procurador General de la República, a este último, por conducto del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, enviándole para tal efecto copia simple del escrito del recurso de revisión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, fracción II y 29 de la Ley de Amparo.-----

Así lo provengo y firma el **MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes.

LSJ.

11 MAR 2011

Por lista de la misma
fecha, se notificó el acuerdo anterior a
los interesados. Conste,

Con excepción
de la recurrente.
Conste.

Siendo las catorce horas de la fecha antes
indicada, y en virtud de no haber conpa -
recido los interesados a oír notificaciones,
se tiene por hecha dicha notificación por
medio de lista. **Doy fé.**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

RECIBIDO EN ENVIADO
SIN ANEXO

PRIMERA SALA.
SRÍA. DE ACDOS.

A.D.R. 517/2011.

OF. IV-437-P.

014336

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION



C. LIC. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ.
SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
P R E S E N T E.

En el expediente que se menciona al margen, el
Presidente de esta Primera Sala dictó el siguiente acuerdo:

"México, Distrito Federal, a diez de marzo de dos mil
once. -----

Visto el oficio número SSGA-XI-9027/2011, de fecha
nueve de marzo de dos mil once, signado por el Actuario
Judicial adscrito a la Subsecretaría General de Acuerdos de
este Alto Tribunal, en el que transcribe el proveído dictado en la
misma fecha, por el Presidente de esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión
517/2011, en que se actúa, y anexa el juicio de amparo directo
penal /2010 y el expedientillo formado con motivo del
recurso de revisión, al considerarse que corresponde a esta
Sala el conocimiento del recurso, toda vez que en el proveído
antes citado, se precisa que la quejosa hace valer recurso de
revisión en contra de la sentencia de diez de febrero del
presente año, dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad
de México, Distrito Federal, en el juicio de amparo directo
número /2010; fallo en el cual, la recurrente se duele de la
interpretación directa realizada por el Tribunal Colegiado de
Circuito del conocimiento, respecto de los artículos 14, 16, 17,
21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Acúsele recibo. -----

Con fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84,
fracción II, de la Ley de Amparo; 21 fracción III, inciso a) y 25
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación; en relación con los Puntos Segundo, párrafo
Segundo y Cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, de fecha
veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el día veintinueve siguiente, esta Primera Sala
acepta la competencia para conocer del recurso de revisión que
interpone la quejosa. -----

Como de los agravios se advierte que la recurrente
señala que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Primer Circuito realizó una interpretación directa respecto de los
artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. y toda vez que la resolución de
diez de febrero del presente año, misma que se terminó de
engrosar diecisiete de febrero siguiente, fue notificada
personalmente a la recurrente, el dieciocho del mismo mes y
año, y el recurso fue interpuesto el siete de marzo siguiente; lo
procedente es **ADMITIR EL RECURSO DE REVISIÓN**
interpuesto, con fundamento en el párrafo primero del artículo
90 de la Ley de Amparo; con reserva de los motivos que, en su
caso, pudiese considerar la Sala para determinar la
improcedencia del recurso. -----

En consecuencia, con fundamento en el artículo 25,
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

- 2 -

Federación, se designa como ponente al **MINISTRO que suscribe**, a quien por turno corresponde formular el proyecto de resolución respectivo.-----

Hágase del conocimiento al Presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal; la anterior determinación, para los efectos legales a que haya lugar.-----

Desglósese del expedientillo el escrito original de presentación del recurso de revisión para ser agregado a este toca, previa copia certificada que se deje en el mismo.-----

Notifíquese; personalmente a la recurrente en el Centro de Readaptación Social de Tepepan; por oficios a la autoridad responsable y al Procurador General de la República, a este último, por conducto del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, enviándole para tal efecto copia simple del escrito del recurso de revisión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, fracción II y 29 de la Ley de Amparo.-----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes".-----

Lo que comunico a usted para los efectos legales a que haya lugar.

Le reitero mi atenta consideración.

México, D.F., a 10 de marzo de 2011.

**EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA.**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS
PRIMERA SALA

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.

LSJ/pgt/



1/2

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:30

HORAS DEL DÍA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE, la suscrita

Actuaria Judicial adscrita a la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Licenciada Paula Julia Corona Cedillo, en cumplimiento al acuerdo de fecha DIEZ DE MARZO DE DOS MIL ONCE, dictado en el EXPEDIENTE RELATIVO AL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO 517/2011, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con el objeto de efectuar la NOTIFICACIÓN PERSONAL ordenada en autos, constituida con las formalidades legales, en el Departamento Jurídico del Centro de Readaptación Social de Tepepan en el Distrito Federal, en busca de

, soy informada por el personal de dicho Departamento, que efectivamente la persona buscada se encuentra aquí reclusa, por lo que procedo a requerir su presencia, y hecho que fue, encontrándose presente y cerciorada de que se trata de la misma persona, en virtud de que su nombre y apellidos coinciden con los que tengo

en el acuerdo que se cita; y sus

generales edad años, estatura metros, com-

plexión, te, ojos, cejas

nariz, boca, la

bios, mentón oval, pelo, color

origen, origen del Norte de

ojos y una vez enterada

del motivo de mi visita, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción II, párrafo primero y 29, fracción III de la Ley de Amparo; le hago saber el contenido del acuerdo de fecha DIEZ DE MARZO DE DOS MIL ONCE, dictado por EL PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en el expediente

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
NÚMERO 517/2011.

RELATIVO AL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO 517/2011,
y en este acto manifiesta que se da por notificada del acuerdo de fecha
diez de marzo de dos mil once, y recibe copia simple del mismo. Con lo
que se da por terminada la presente diligencia, firmando al calce para
constancia, los que en ella intervinieron. Doy fe.



LA ACTUARIA JUDICIAL.

LIC. PAULA JULIA CORONA CEDILLO.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

FORMA A-17

43

C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA,
POR CONDUCTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A ESTA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
P R E S E N T E .

En el expediente que se menciona al margen, el
Presidente de esta Primera Sala dictó el siguiente acuerdo:

PRIMERA SALA.
SRÍA. DE ACDOS.

A.D.R. 517/2011.

OF. IV-439-P.

CON ANEXO: COPIA
SIMPLE DEL
ESCRITO DEL
RECURSO DE
REVISIÓN EN 33
FOJAS ÚTILES.

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
13 MAR 2011
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DE AMPARO METROPOLITANO

"México, Distrito Federal, a diez de marzo de dos mil once. -----

Visto el oficio número SSGA- XI -9027/2011, de fecha nueve de marzo de dos mil once, signado por el Actuario Judicial adscrito a la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, en el que transcribe el proveído dictado en la misma fecha, por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 517/2011, en que se actúa; y anexa el juicio de amparo directo penal /2010 y el expediente formado con motivo del recurso de revisión, al considerarse que corresponde a esta Sala el conocimiento del recurso, toda vez que en el proveído antes citado, se precisa que la quejosa hace valer recurso de revisión en contra de la sentencia de diez de febrero del presente año, dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el juicio de amparo directo número /2010; fallo en el cual, la recurrente se duele de la interpretación directa realizada por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, respecto de los artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acúsesse recibo. -----

Con fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21 fracción III, inciso a) y 25 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los Puntos Segundo, párrafo Segundo y Cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve siguiente, esta Primera Sala acepta la competencia para conocer del recurso de revisión que interpone la quejosa. -----

Como de los agravios se advierte que la recurrente señala que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito realizó una interpretación directa respecto de los artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. y toda vez que la resolución de diez de febrero del presente año, misma que se terminó de engrosar diecisiete de febrero siguiente, fue notificada personalmente a la recurrente, el dieciocho del mismo mes y año, y el recurso fue interpuesto el siete de marzo siguiente; lo procedente es **ADMITIR EL RECURSO DE REVISIÓN** interpuesto, con fundamento en el párrafo primero del artículo 90 de la Ley de Amparo; con reserva de los motivos que, en su caso, pudiese considerar la Sala para determinar la improcedencia del recurso. -----

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

- 2 -

En consecuencia, con fundamento en el artículo 25, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se designa como ponente al **MINISTRO que suscribe**, a quien por turno corresponde formular el proyecto de resolución respectivo.-----

Hágase del conocimiento al Presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal; la anterior determinación, para los efectos legales a que haya lugar.-----

Desglósese del expedientillo el escrito original de presentación del recurso de revisión para ser agregado a este toca, previa copia certificada que se deje en el mismo.-----

Notifíquese; personalmente a la recurrente en el Centro de Readaptación Social de Tepepan; por oficios a la autoridad responsable y al Procurador General de la República, a este último, por conducto del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, enviándole para tal efecto copia simple del escrito del recurso de revisión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, fracción II y 29 de la Ley de Amparo.-----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes".-----

Lo que comunico a usted para los efectos legales a que haya lugar.

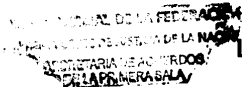
Le reitero mi atenta consideración.

México, D.F., a 10 de marzo de 2011.

**EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA.**



LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.



LSJ/pgt.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

FORMA A-17

44

C. MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO
EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.
P R E S E N T E .

En el expediente que se menciona al margen, el
Presidente de esta Primera Sala dictó el siguiente acuerdo:

"México, Distrito Federal, a diez de marzo de dos mil
once. -----

PRIMERA SALA.
SRÍA. DE ACDOS.

A.D.R. 517/2011.

OF. IV-440-P.

ANTECEDENTE:
TOCA DE
APELACIÓN
/2008,

Visto el oficio número SSGA-XI-9027/2011, de fecha
nueve de marzo de dos mil once, signado por el Actuario
Judicial adscrito a la Subsecretaría General de Acuerdos de
este Alto Tribunal, en el que transcribe el proveído dictado en la
misma fecha, por el Presidente de esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión
517/2011, en que se actúa; y anexa el juicio de amparo directo
penal /2010 y el expediente formado con motivo del
recurso de revisión, al considerarse que corresponde a esta
Sala el conocimiento del recurso, toda vez que en el proveído
antes citado, se precisa que la quejosa hace valer recurso de
revisión en contra de la sentencia de diez de febrero del
presente año, dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad
de México, Distrito Federal, en el juicio de amparo directo
número /2010; fallo en el cual, la recurrente se duele de la
interpretación directa realizada por el Tribunal Colegiado de
Circuitos del conocimiento, respecto de los artículos 14, 16, 17,
21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Acútese recibo. -----

Con fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84,
fracción II, de la Ley de Amparo; 21 fracción III, inciso a) y 25
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación; en relación con los Puntos Segundo, párrafo
Segundo y Cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, de fecha
veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el día veintinueve siguiente, esta Primera Sala
acepta la competencia para conocer del recurso de revisión que
interpone la quejosa. -----

Como de los agravios se advierte que la recurrente
señala que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Primer Circuito realizó una interpretación directa respecto de los
artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. y toda vez que la resolución de
diez de febrero del presente año, misma que se terminó de
engrosar diecisiete de febrero siguiente, fue notificada
personalmente a la recurrente, el dieciocho del mismo mes y
año, y el recurso fue interpuesto el siete de marzo siguiente; lo
procedente es **ADMITIR EL RECURSO DE REVISIÓN**
interpuesto, con fundamento en el párrafo primero del artículo
90 de la Ley de Amparo; con reserva de los motivos que, en su
caso, pudiese considerar la Sala para determinar la
improcedencia del recurso. -----

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

- 2 -

En consecuencia, con fundamento en el artículo 25, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se designa como ponente al **MINISTRO que suscribe**, a quien por turno corresponde formular el proyecto de resolución respectivo.-----

Hágase del conocimiento al Presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal; la anterior determinación, para los efectos legales a que haya lugar.-----

Desglósese del expedientillo el escrito original de presentación del recurso de revisión para ser agregado a este toca, previa copia certificada que se deje en el mismo.-----

Notifíquese; personalmente a la recurrente en el Centro de Readaptación Social de Tepepan; por oficios a la autoridad responsable y al Procurador General de la República, a este último, por conducto del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, enviándole para tal efecto copia simple del escrito del recurso de revisión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, fracción II y 29 de la Ley de Amparo.-----

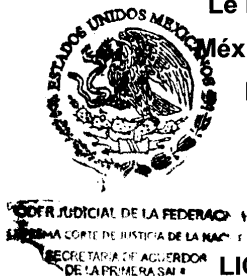
Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes".-----

Lo que comunico a usted para los efectos legales a que haya lugar.

Le reitero mi atenta consideración.

México, D.F., a 10 de marzo de 2011.

**EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA.**



Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser "H. Pérez Reyes", escrita sobre una línea horizontal.

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.

LSJ/pgt.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

C. PRESIDENTE DEL SÉPTIMO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL PRIMER CIRCUITO.
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.
P R E S E N T E .

En el expediente que se menciona al margen, el
Presidente de esta Primera Sala dictó el siguiente acuerdo:

"México, Distrito Federal, a diez de marzo de dos mil
once. -----

Visto el oficio número SSGA- XI -9027/2011, de fecha
nueve de marzo de dos mil once, signado por el Actuario
Judicial adscrito a la Subsecretaría General de Acuerdos de
este Alto Tribunal, en el que transcribe el proveído dictado en la
misma fecha, por el Presidente de esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión
517/2011, en que se actúa; y anexa el juicio de amparo directo
penal /2010 y el expedientillo formado con motivo del
recurso de revisión, al considerarse que corresponde a esta
Sala el conocimiento del recurso, toda vez que en el proveído
antes citado, se precisa que la quejosa hace valer recurso de
revisión en contra de la sentencia de diez de febrero del
presente año, dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad
de México, Distrito Federal, en el juicio de amparo directo
número /2010; fallo en el cual, la recurrente se duele de la
interpretación directa realizada por el Tribunal Colegiado de
Circuito del conocimiento, respecto de los artículos 14, 16, 17,
21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Acúsesse recibo. -----

Con fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34,
fracción II, de la Ley de Amparo; 21 fracción III, inciso a) y 25
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación; en relación con los Puntos Segundo, párrafo
Segundo y Cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, de fecha
veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el día veintinueve siguiente, esta Primera Sala
acepta la competencia para conocer del recurso de revisión que
interpone la quejosa. -----

Como de los agravios se advierte que la recurrente
señala que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Primer Circuito realizó una interpretación directa respecto de los
artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. y toda vez que la resolución de
diez de febrero del presente año, misma que se terminó de
engrosar diecisiete de febrero siguiente, fue notificada
personalmente a la recurrente, el dieciocho del mismo mes y
año, y el recurso fue interpuesto el siete de marzo siguiente; lo
procedente es **ADMITIR EL RECURSO DE REVISIÓN**
interpuesto, con fundamento en el párrafo primero del artículo
90 de la Ley de Amparo; con reserva de los motivos que, en su
caso, pudiese considerar la Sala para determinar la
improcedencia del recurso. -----

PRIMERA SALA.
SRÍA. DE ACDOS.

A.D.R. 517/2011.

OF. IV-438-P.

ANTECEDENTE:
D.P. /2010.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

- 2 -

En consecuencia, con fundamento en el artículo 25, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se designa como ponente al **MINISTRO que suscribe**, a quien por turno corresponde formular el proyecto de resolución respectivo.-----

Hágase del conocimiento al Presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal; la anterior determinación, para los efectos legales a que haya lugar.-----

Desglóse del expediente el escrito original de presentación del recurso de revisión para ser agregado a este toca, previa copia certificada que se deje en el mismo.-----

Notifíquese; personalmente a la recurrente en el Centro de Readaptación Social de Tepepan; por oficios a la autoridad responsable y al Procurador General de la República, a este último, por conducto del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, enviándole para tal efecto copia simple del escrito del recurso de revisión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, fracción II y 29 de la Ley de Amparo.-----

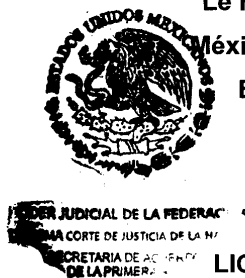
Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes".-----

Lo que comunico a usted para los efectos legales a que haya lugar.

Le reitero mi atenta consideración.

México, D.F., a 10 de marzo de 2011.

**EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA.**



LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.

Handwritten signature of Lic. Heriberto Pérez Reyes, consisting of a stylized 'H' and 'R'.

LSJ/pgt.



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
517/2011.
QUEJOSO:

MINISTRO ARTURO ZALDIVAR LELO DE LARREA.
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

DICTAMEN

Por este conducto solicito se requiera al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el envío de todos los autos originales relativos al juicio de amparo directo 2010 de su propio índice, promovido por la quejosa

lo anterior para el efecto de estar en condiciones de resolver el asunto al rubro citado.

México, Distrito Federal, a catorce de marzo de dos mil once.

Atentamente


MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

2011 MAR 14 PM 6 30

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

10

TEXTS

SECRET



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

47
FORMA A-84

AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011.

En quince de marzo de dos mil once, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el dictamen del Ministro Ponente, recibido en esta Secretaría el catorce del mes en curso. Conste.-----

México, Distrito Federal, a quince de marzo de dos mil once. -----

Visto el dictamen del Ministro Ponente, mediante el cual solicita se requiera al Séptimo Tribunal Colegiado en ~~Materia~~ Penal del Primer Circuito, para que remita a esta Sala, todos los autos originales relativos al juicio de amparo directo /2010, a fin de estar en condiciones de resolver el presente asunto.-----

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, **solicítese al referido Tribunal, todos los autos originales del juicio de amparo**

2010, lo anterior para estar en condiciones de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.-

- 2 -

Devuélvanse los autos a la Ponencia del
Ministro que suscribe.-----

Notifíquese.-----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO
ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza
y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes.-----



LSJ. 

16 MAR 2011

Por lista de la misma
fecha, se notificó el presente a los
interesados. Conste.

Siendo las catorce horas de la fecha a la
indicada, y en virtud de no haber compare-
cido los interesados a comparecer, se
tiene por hecha dicha notificación por
medio de lista. Doy fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

C. PRESIDENTE DEL SÉPTIMO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL PRIMER CIRCUITO.
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.
P R E S E N T E .

En el expediente que se menciona al margen, el
Presidente de esta Primera Sala dictó el siguiente
acuerdo:

PRIMERA SALA.
SRÍA. DE ACOS.

A.D.R. 517/2011.

OF. IV-457-P.

ANTECEDENTE:
D.P. /2010.

"México, Distrito Federal, a quince de marzo de dos
mil once.-----

Visto el dictamen del Ministro Ponente, mediante el
cual solicita se requiera al Séptimo Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito, para que remita a esta
Sala, todos los autos originales relativos al juicio de amparo
directo /2010, a fin de estar en condiciones de resolver el
presente asunto.-----

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25,
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, solicítase al referido Tribunal, todos los autos
originales del juicio de amparo /2010, lo anterior para
estar en condiciones de elaborar el proyecto de resolución
correspondiente.-----

Devuélvanse los autos a la Ponencia del Ministro que
suscribió.-----

Notifíquese.-----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO
ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado
Heriberto Pérez Reyes".-----

Lo que comunico a usted para los efectos legales
a que haya lugar.

Le reitero mi atenta consideración.

México, D. F., a 15 de marzo de 2011.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA.

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
SECRETARIA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA

LSJ/pgt.

OUTTEXTS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMAB-1

la Sala 49
AOR-SI2/2011

OF. 797 PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

OF. 798 PRIMER TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO (Ante. T.P. /2008).

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO NÚMERO /2010 DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, SE DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:

"México, Distrito Federal, a quince de marzo de dos mil once.

Vista la razón que antecede, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, los oficios de cuenta signados por el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante los cuales informa por una parte que aceptó la competencia y admitió a trámite el recurso de revisión 517/2011 de su índice, promovido por la quejosa mismo que fue turnado a la ponencia del Ministro Aturo Zaldívar Lelo de Larrea.

De igual forma, por lo que respecta al segundo documento mencionado, dicha autoridad requiere los autos originales relativos al juicio de amparo citado al rubro a fin de estar en condiciones de resolver el asunto referido.

Atento a lo anterior, solicítase al Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, envíe a este órgano colegiado el toca penal y los autos respectivos, mismos que fueron devueltos el diecisiete de febrero del año que transcorre mediante oficio 533, una vez hecho lo anterior, envíense de inmediato a la superioridad para los efectos legales conducentes."

CÚMPLASE.

A S I lo acordó y firma el Magistrado CARLOS HUGO LUNA RAMOS, Presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ante el Secretario licenciado José Eliseo Reyes Gálvez con quien actúa y da fe." (RUBRICAS).

LO QUE HAGO DE SU CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE.

MÉXICO, D. F., A 15 DE MARZO DE 2011.

EI SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

LIC. JOSE ELISEO REYES GALVEZ.



SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA PENAL

3:06 P.M.
18-marzo-11

015319

SUPLENTE DEL DE
JUSTICIA DE LA NACION

2011 MZO 17 40 11 27

OFICINA DE DISTRIBUCION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

RECIBI DE UN ENVIADO.
SIN ANEXO



ENTRADA AL ARCHIVO
JUDICIAL 17 MZO 2011

2011 MZO 17 PM 12 23

PRIMER SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMAB-1

1a Sala 50
ADR - 317/2011

OF. 856 SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. (REVISION EN S.C.J.N.
517/2011).

OF. 857 PRIMER TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO (Ante. T. P. /2008)

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL
JUICIO DE AMPARO DIRECTO 2011, DEL ÍNDICE DE ESTE
TRIBUNAL COLEGIADO, RELATIVO A LA DEMANDA DE GARANTIAS
PROMOVIDA POR EL QUEJOSO, SE
DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:

"México, Distrito Federal, a veintidós de febrero de dos mil
once.

Visto la cuenta que antecede, agréguese a los autos para
que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario de
Acuerdos del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer
Circuito, a través del cual remite a este órgano colegiado el
original del toca penal /2008, por lo que se tienen por recibidas
dichas reproducciones.

Ahora bien, atento a lo anterior envíense dichas
constancias a la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo solicitó mediante
oficio IV-457-P.

En consecuencia, acúsese recibo a dicho tribunal de las
constancias antes mencionadas; lo anterior para los efectos
legales a que haya lugar".

CUMPLASE.

ASÍ lo acordó y firma el Magistrado **CARLOS HUGO LUNA
RAMOS**, Presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal
del Primer Circuito, ante el Secretario de Acuerdos licenciado José
Eliseo Reyes Gálvez, con quien actúa y da fe." (RÚBRICAS).

**LO QUE HAGO DE SU CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS
LEGALES A QUE HAYA LUGAR; ASIMISMO, SIRVA LA PRESENTE
COMO ACUSE DE RECIBO.**



SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO.

ATENTAMENTE.

México, D.F., a 22 de marzo de 2011.

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SEPTIMO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

LIC. JOSE ELISEO REYES GALVEZ.

016345

SECRETARIA DE JUSTICIA DE LA FEDERACION

2011 MAR 23 PM 2 52

SECRETARIA DE JUSTICIA DE LA FEDERACION

SECRETARIA DE JUSTICIA DE LA FEDERACION

2011 MAR 23 PM 1 02

OFICINA DE MEDIACION
JUDICIAL DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA DE LA FEDERACION

Reunión de enjuicio con:

— toca. hora de (797) pm.
Seguir su último juicio.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

FORMA A-13

51

C. PRESIDENTE DEL SÉPTIMO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO.
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.
P R E S E N T E.

PRIMERA SALA.
SRÍA. DE ACDOS.

A.D.R. 517/2011.

OF. V-411-P.

ANTECEDENTE:
D.P. /2010.

Acuso a usted recibo del oficio número 797 de
fecha quince del mes en curso, mediante el cual
informa que ha solicitado al Primer Tribunal Unitario
en Materia Penal del Primer Circuito, el toca Penal
y los autos respectivos del que deriva el amparo
directo en revisión citado al margen.

Le reitero mi atenta consideración.

México, D.F., a 22 de marzo de 2011.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA.



SECRETARÍA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.

LSJ/pgt

SIN TEXTO

OFICIAL
MONTE DE
COSTA RICA
DE LA PAZ

32
1561
PEDIMENTO NO

A.D.R. 517/2011

FORMADO CON MOTIVO DEL RECURSO DE
REVISIÓN INTERPUESTO POR

~~CON EL CARÁCTER DE~~
QUEJOSO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA
DICTADA POR EL SEPTIMO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DIEZ DE
FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL JUICIO
DE AMPARO DIRECTO NUMERO 2010.

**C. PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA
DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION**

La Suscrita Agente del Ministerio Público de la Federación, designada por el C. Procurador General de la República, para intervenir en el presente asunto con fundamento en los artículos 107, fracción XV constitucional, 5º, fracción IV, 89 y 90 de la Ley de Amparo; 3º, 4º, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ante usted con debido respeto expongo:

Que toda vez con fecha catorce de marzo de dos mil once me fue notificado la admisión del amparo directo en revisión del rubro mencionado mediante el oficio IV-439-P de fecha diez de marzo de dos mil once, mediante el cual se ordena dar vista a la suscrita y siendo que a la fecha no se me ha dado acceso al expediente por los diversos trámites administrativos que se llevan en esa H. Sala que preside, vengo respetuosamente a solicitar gire sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo a fin de que me sea permitido el acceso a dicho expediente y así estar en posibilidad de desahogar la vista ordenada.

Por lo antes expuesto y fundado atentamente pido.

ÚNICO: Acordar de conformidad lo solicitado

México, Distrito Federal, a veinticuatro de marzo de dos mil once.

**LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA FEDERACIÓN**


LIC. DORIANTH FIGUEROA GONZÁLEZ.

018334

CORTE SUPLENTE DE
JUSTICIA FEDERAL

2011 MAR 23 PM 12 53

OFICINA DE MEDIACION
JUDICIAL Y OTROS SERVICIOS

RECIBI DE UN ENVIADO.
SIN ANEXO

PRIMERA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS
2011 MAR 23 PM 3 12

SECRETARIA DE JUSTICIA
FEDERAL



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOCIÓN: 16334

AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011.

En veinticuatro de marzo de dos mil once, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el oficio número VII/22/2011, signado por la Agente del Ministerio Público Federal, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el veintitrés del mes en curso. Conste.-----

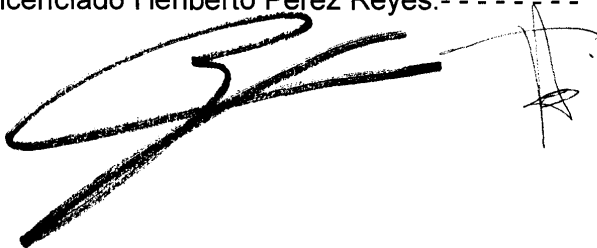
México, Distrito Federal, a veinticuatro de marzo de dos mil once. -----

Agréguese a los autos el oficio número VII/22/2011, signado por la Agente del Ministerio Público Federal; visto su contenido, con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dígase a la autoridad federal oficiante que, hasta el momento en que se emite el presente acuerdo no han sido solicitados de su parte, para su consulta, los autos del amparo directo en revisión citado al rubro; por otra parte infórmesele que los autos se encuentran a su disposición para su consulta en la Ponencia del Ministro que suscribe.-----

Devuélvanse los autos al Ministro Ponente. ---

Cúmplase.-----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO
ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza
y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes.-----

A large, bold, handwritten signature in black ink, likely belonging to Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, is written over the signature line. The signature is stylized and somewhat abstract, with a prominent horizontal stroke and a large loop at the beginning.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

FORMA 4-99

54

**C. LIC. DORIANTH FIGUEROA GONZÁLEZ.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA FEDERACIÓN.
P R E S E N T E .**

**En el expediente que se menciona al margen, el
Presidente de esta Primera Sala dictó el siguiente
acuerdo:**

**PRIMERA SALA.
SRÍA. DE ACOS.**

A.D.R. 517/2011.

OF. V-428-P.

"México, Distrito Federal, a veinticuatro de marzo de
dos mil once. -----

Agréguese a los autos el oficio número VII/22/2011,
signado por la Agente del Ministerio Público Federal; visto su
contenido, con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dígame a la
autoridad federal oficiante que, hasta el momento en que se
emite el presente acuerdo no han sido solicitados de su
parte, para su consulta, los autos del amparo directo en
revisión citado al rubro; por otra parte infórmesele que los
autos se encuentran a su disposición para su consulta en la
Ponencia del Ministro que suscribe. -----

Devuélvanse los autos al Ministro Ponente. -----

Cúmplase. -----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO
ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado
Heriberto Pérez Reyes". -----

**Lo que comunico a usted para los efectos legales
a que haya lugar.**

Le reitero mi atenta consideración.

México, D. F., a 24 de marzo de 2011.

**EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA.**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
SECRETARIA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.

LSJ/pgt.

SLICK EXC

1

PEDIMENTO NO.
~~TOCA NO. 517/2011~~

~~FORMADO CON MOTIVO DEL~~
RECURSO DE REVISIÓN
INTERPUESTO POR

EN CONTRA DE LA SENTENCIA
DICTADA POR EL SÉPTIMO
TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO, EL DIEZ DE FEBRERO
DE DOS MIL ONCE, EN LA QUE SE
DETERMINÓ NO OTORGAR EL
AMPARO SOLICITADO EN EL
JUICIO DE AMPARO DIRECTO
NÚMERO D.P. /2010.

**PRIMERA SALA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

La suscrita Agente del Ministerio Público de la Federación, designada por el C. Procurador General de la República, para intervenir en el presente asunto con fundamento en los artículos 107, fracción XV Constitucional, 5º, fracción IV, 89 y 90 de la Ley de Amparo; 3º, 4º, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, atentamente expone:

interpuso recurso de
revisión, de la sentencia de fecha diez de febrero de dos mil once, dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la que se determinó no otorgar el Amparo solicitado en el Juicio de Amparo Directo número D.P. /2010.

Por acuerdo de diez de marzo del dos mil once, el C. Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió el presente recurso de revisión y ordenó se hiciera del conocimiento del C. Agente del Ministerio Público adscrito.

ANTECEDENTES

Por escrito presentado el treinta de agosto del dos mil diez, , parte quejosa, solicitó el Amparo y la Protección de la Justicia Federal, en contra de la Sentencia de fecha 02 de marzo de 2009, dictada en el toca de apelación número /2008 por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.

SIN TEXTO



ACTOS RECLAMADOS

1.- "Del Tribunal Unitario de Penal del Primer Circuito reclamo: La sentencia pronunciada en segunda instancia, el pasado 2 de marzo de 2009 en el toca penal de 2008, que modifico el fallo codemandado, dictado por el C. Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal en la causa 2006 instruida en mi contra y que me condeno injustamente a 60 años de cárcel por delitos que nunca cometí.

De las ejecutoras reclamo: Los actos de cumplimiento de la sentencia."

2.- Correspondió conocer de dicho amparo al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien admitió la demanda de garantías el siete de septiembre de dos mil diez, ordenando su registro bajo el número D.P. 2010.

3.- Previo el desahogo de las diligencias necesarias, con fecha diez de febrero de dos mil once terminada de engrosar el diecisiete de febrero de dos mil once, el órgano Colegiado del conocimiento dictó sentencia, en la que se determinó no otorgar el Amparo a la parte quejosa.

4.- Inconforme con la anterior resolución mediante escrito presentado el siete de marzo dos mil once, ,

interpuso recurso de revisión, mismo que fue remitido a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

COMPETENCIA

Con fundamento en lo establecido por la fracción II, del artículo 84, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna, se estima, que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, realizo una interpretación directa respecto de los artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROCEDENCIA DEL RECURSO

El recurso de revisión se encuentra previsto como tal en el artículo 82 de la Ley de Amparo, y es el idóneo para controvertir, como ocurre en la especie, las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos de la fracción V, del diverso numeral 83 de la Ley de la Materia.

La notificación de la sentencia de Amparo Directo se tuvo por hecha el día dieciocho de febrero del dos mil once, por lo tanto, el plazo de diez días hábiles para la interposición del recurso de revisión que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintidós de febrero del dos mil once al siete de marzo del presente año y 26, 27 de febrero 5, 6 de marzo por ser

SIN TEXTO



inhábiles y siendo que el escrito de expresión de agravios se presentó el siete de marzo del dos mil once, exigida por el artículo 88 de la Ley en cita, se encuentra interpuesto dentro del término que la ley establece para ello.

El recurso de revisión fue admitido con la reserva de estudio de importancia y trascendencia que en el momento procesal oportuno se realice, de conformidad con los Puntos Primero, fracción I, inciso a), Segundo, fracciones I y II, y Primero Transitorio del Acuerdo 5/1999, del Tribunal Pleno de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la Tesis de Jurisprudencia 2ª./J 139/2006, de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época, Página 381 cuyo Rubro y texto es el Siguiente:

"REVISIÓN. LA CALIFICACIÓN DE SU PROCEDENCIA SE LIMITA AL EXAMEN DE ASPECTOS FORMALES QUE TRASCIENDAN A ELLA. De acuerdo con el artículo 90, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar la procedencia de la revisión con base en las constancias enviadas por el Tribunal Colegiado de Circuito o por el Juez de Distrito, según corresponda, para emitir una determinación fundada y motivada sobre su admisión o desechamiento, pero el estudio está limitado a los aspectos formales que trasciendan a la procedencia del recurso como, entre otros, la extemporaneidad, la falta de firma o de legitimación, la declaración de que el fallo recurrido adquirió la calidad de cosa juzgada, o bien, porque en el juicio de amparo directo no exista algún problema de inconstitucionalidad o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, dado que éstas son cuestiones de inmediata apreciación; pero no puede estudiar aspectos de fondo, como el examen de los agravios expuestos por la parte recurrente y arribar a la conclusión de que son inoperantes o infundados, aun bajo la premisa de que notoriamente lo sean, pues estimar lo contrario conllevaría a extremos que no están previstos en el artículo citado, además de no resultar congruente con el sistema de facultades para resolver los asuntos que impera en el juicio de garantías."

La parte quejosa hizo valer, en síntesis y en lo conducente, los siguientes:

AGRAVIOS

"PRIMERO.- La sentencia genera agravio al interpretar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y violentar el principio de congruencia por no atender la cuestión planteada en la demanda de amparo.

100



En el presente caso, se surten los requisitos de procedencia del recurso, toda vez que el Tribunal Colegiado interpretó el artículo 21 constitucional y concluyó que efectivamente los principios de actuación policial consagrados en el precepto constitucional constituyen una garantía para los gobernados y particularmente para aquellos sometidos a investigación policial.

(...)

El agravio es tanto más relevante y grave cuando se aprecia que la ejecutoria luego se pronuncia en el sentido de que la quejosa y su defensa no aportaron prueba de mala fe.

(...)

SEGUNDO.- La sentencia causa agravio en su interpretación del mandamiento constitucional de puesta a disposición sin demora de un inculcado, previsto en el artículo 16 de la Ley Fundamental.

De nueva cuenta, este agravio debe analizarse a la luz de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo. En primer término, conviene precisar que el reclamo consistió en evidenciar y explicar la existencia de una **retención indebida** por parte de la policía federal investigadora.

(...)

TERCERO.- La sentencia violenta directamente el principio constitucional de exclusión de prueba ilícita y el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(...)

La demanda de amparo convocaba al Tribunal Colegiado a examinar a la luz de artículo 22 constitucional que prohíbe el tormento de cualquier especie la declaración del inculcado que sirvió de indicio incriminatorio para integrar prueba circunstancial.

(...)

CUARTO.- La sentencia interpreta inexactamente el principio de **supremacía constitucional** previsto artículo 133 de la Ley Fundamental y viola el artículo 14 constitucional respecto al alcance de las formalidades esenciales del procedimiento.

El Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito juzgó fundado el concepto de violación fundado sobre el **derecho de un extranjero a ser informado de la asistencia consular**. No obstante, lo estimó inoperante.

El Tribunal Colegiado arribó a declarar fundada la violación conforme una interpretación del artículo 133 Constitucional y su relación con los derechos fundamentales reconocidos en instrumentos internacionales. Para cumplir con el requisito del artículo 88 de la Ley de Amparo, cito la parte conducente.

(...)

STREET

QUINTO.- La sentencia interpreta inexactamente el alcance de la garantía de acceso a la justicia y equilibrio procesal, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para dar cumplimiento al artículo 88, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se procede a transcribir textualmente la parte de la sentencia que establece la interpretación directa de un precepto de la constitución

El derecho de acceso a la justicia no puede quedar en una garantía formal de ser juzgado ante los tribunales en forma gratuita. Hoy, este derecho fundamental debe construirse en forma más amplia. Su interpretación convoca por ejemplo, a lo que la Constitución Española denomina "tutela judicial".

(...)

SEXTO.- La sentencia causa agravio en la interpretación del principio constitucional del Inocencia, hoy explícito en la Carta Magna.

De nueva cuenta y en acatamiento al artículo 88, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, transcribo la parte conducente en la que la ejecutoria del Tribunal Colegiado interpretó el principio de presunción de inocencia sin apreciar que el mismo se encuentra implícito en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política.

Ahora bien, es sobre el terreno del derecho penal que se definen, de la manera más dramática, las relaciones entre la autoridad y el ciudadano. Por ello la violación de uno de sus principios más elementales, el de considerar a un imputado inocente hasta estar en condiciones de integrar una defensa real y adecuada, trasciende y vicia por completo todo el procedimiento.

(...)

OPINION MINISTERIAL

En efecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 107 fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 fracción V de la Ley de Amparo y 10 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se desprende que el recurso de revisión en el juicio de amparo directo procede solamente, cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, en los conceptos de violación la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional, o de un reglamento, o se hubiera planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al dictar la sentencia el Tribunal Colegiado haya decidido en estas materias; o bien, establecido la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal u omitido el estudio y decisión de estas cuestiones.

Precisado lo anterior, el Tribunal Colegiado del conocimiento en la sentencia que se recurre sólo hizo pronunciamiento en relación a cuestiones de legalidad, y de ningún modo decidió sobre cuestiones de inconstitucionalidad de leyes o de interpretación directa de algún precepto constitucional.

SIN TEXTO



En efecto, el Tribunal Colegiado en la resolución que se recurre manifestó que en el caso, los conceptos de violación resultaban infundados e inoperantes, en atención a que contrario a lo aducido por la quejosa, en el presente asunto se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, que tampoco era aplicable la tesis cuyo rubro es: "*CONEXIDAD DE DELITOS. LA FACULTAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA CONOCER DE LOS DEL FUERO COMUN QUE TENGAN CONEXIDAD CON ILICITOS FEDERALES, NO IMPLICA QUE LAS CONDUCTAS DEBAN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA DESCRIPCION TIPICA PREVISA EN EL CODIGO PENAL FEDERAL*", la cual no puede tener efectos retroactivos por tratarse de una jurisprudencia que interpreta una ley procesal, y porque tampoco **se trata de la inconstitucionalidad de una norma penal**; pero además, porque no le beneficia; de ahí que haya considerado que no se viola garantía alguna prevista en el **artículo 14 Constitucional**.

Así también, consideró que la sentencia que se impugna está debidamente fundada y motivada, toda vez que en ella se citaron los numerales legales que sirvieron de apoyo y se expresaron los razonamientos que llevaron a la autoridad responsable a concluir como lo hizo; esto es, que el asunto que nos ocupa, encuadra en los preceptos de las normas que invocó respecto a los delitos cometidos; lo que llevó a concluir al Tribunal Colegiado, que la sentencia recurrida no es violatoria de garantías al **precepto 16 Constitucional**.

Por otra parte, también manifestó que no se irrogó violación alguna a las garantías de la peticionaria de amparo, en lo relativo a la justipreciación del acervo probatorio que obra en la causa de origen, en término de los artículos 280, 284, 285, 288, 289 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales y los numerales 40 y 41 del Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, toda vez que la autoridad responsable se ajustó a los principios de legalidad y a las reglas de valoración de las pruebas.

En relación al **artículo 21 Constitucional**, señaló que en el caso no se advierte una transgresión a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos, por parte de los elementos policiacos que intervinieron en el momento de la detención de la impetrante de garantías y en la liberación de los ofendidos, ni menos una violación alguna a sus garantías de acceso a la justicia y equilibrio procesal, así también manifestó que en ningún momento se ignoró la existencia y contenido de los videos a que se refiere la hoy recurrente.

El mismo manifestó que en forma alguna hubo violación a las garantías de acceso a la justicia, de equilibrio procesal, toda vez que de constancias de autos se advierte que la hoy recurrente fue sometida a un proceso por un Tribunal que estuvo expedito para impartir justicia en los plazos y términos que fijan las leyes; que emitió sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial en forma gratuita, lo cual se traduce en que se le respeto su garantía de acceso a la justicia, en los términos que establece el **artículo 17 Constitucional**, y el hecho de que las pruebas ofrecidas no arrojen datos que

SIN TEXTO

ESTADO DE
JUNIO 1964
SECRETARIA DE
DEFENSA

la favorezcan, no implica en forma alguna que exista parcialidad en el ánimo del juzgador.

En relación al argumento de la quejosa consistente en que no se le informó sobre su derecho a la asistencia consular a que se refiere el artículo 36 de la Convención de Viena, el Tribunal Colegiado señaló que si bien era fundado su argumento, también lo es que no era erróneo el argumento de la responsable, en virtud de que la ley aplicable no establece como prerrogativa mayor a la de cualquier otro gobernado el que antes de declarar ministerialmente sobre hechos delictivos investigados en su contra, debe estar necesariamente asesorada o asistida por determinada persona, institución o embajada, puesto que si bien existe disposición expresa en el Código Adjetivo, que obliga al Ministerio Público a comunicar la detención de un extranjero, a la Representación Diplomática de su País, el mencionado ordenamiento procesal no obliga al Ministerio Público de la Federación a esperar hasta que el extranjero se encuentra asesorado por la Embajada o Consulado de su País; para recibir su declaración ministerial; en tanto que el artículo 36 de la Convención antes citada, tampoco dispone que las actuaciones de la autoridad investigadora deban retrasarse por la falta de comunicación a la Representación Diplomática, además de que ello podría llevar a otras violaciones de derechos fundamentales.

Así también, el Tribunal Colegiado argumentó que la inconformidad del quejoso consistente en que se le violaron en su perjuicio los principios de defensa adecuada y debido proceso, consagrados en los artículos 20 y 14 Constitucionales, por no haberse concedido el tiempo y el efectivo auxilio para hacer comparecer al reportero de la empresa era infundado e inoperante, en atención de que el actuar del Juez no incurrió en ilegalidad o violación de alguna garantía en perjuicio de la sentenciada, ya que la responsable expresó las razones y el fundamento que consideró aplicable para tener a ese testigo acogido al beneficio que invocó, con fundamento en la fracción III, del artículo 243 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, determinación que fue revocada por el Tribunal de alzada y de acuerdo a lo ordenado por ese Tribunal de apelación, la juzgadora desahogó todos los medios que tuvo a su alcance para localizar, citar y declarar al mencionado testigo.

Así se tiene, que de un análisis de la sentencia impugnada, se estima que no se está en los supuestos de procedencia del recurso de revisión, esto es, el Tribunal Colegiado no realizó la interpretación directa de algún precepto constitucional, esto es, no determinó el sentido y/o alcance de los artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 133 Constitucionales, ni desentrañó el contenido de alguna norma Constitucional, ni determinó su sentido y alcance a través de un análisis gramatical, histórico, lógico o sistemático; ni en la demanda de garantías se hizo un verdadero planteamiento de inconstitucionalidad de leyes, por ende, no se le puede imputar al juzgador la omisión del estudio al respecto, no obstante que la recurrente en su demanda de garantías señala que se violan en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 133 Constitucionales, en las manifestaciones que expone para poner de manifiesto dicha violación, propiamente no plantea un problema de constitucionalidad, ni de interpretación

SIN TEXTO



directa de algún precepto Constitucional; sino que **hizo valer meros aspectos de legalidad.**

Siendo aplicable al caso, la jurisprudencia, cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

Octava Época
Registro: 205755
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
VIII, Noviembre de 1991
Materia(s): Común
Tesis: P./J. 46/91
Página: 39

REVISION EN AMPARO DIRECTO. LA INTERPRETACION DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, COMO SUPUESTO DE PROCEDENCIA, EXISTE CUANDO A TRAVES DE ELLA SE DETERMINAN EL SENTIDO Y EL ALCANCE JURIDICOS DE LA NORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LA BASE DE UN ANALISIS GRAMATICAL, HISTORICO, LOGICO O SISTEMATICO. Para determinar si en la sentencia de un juicio de amparo directo se efectúa la interpretación directa de un precepto constitucional, no basta que el Tribunal Colegiado de Circuito lo invoque o lo aplique en su sentencia, sino que es necesario que dicho Tribunal desentrañe y explique el contenido de la norma constitucional, determinando su sentido y alcance con base en un análisis gramatical, histórico, lógico o sistemático. Por consiguiente, si la sentencia recurrida no contiene ninguna interpretación en estos términos, no se da el presupuesto necesario para la procedencia del recurso de revisión en el amparo directo.

Así es, de su demanda de garantías se advierte que la quejosa, en esencia argumenta que en la resolución que se combate, se hizo una indebida valoración de pruebas consistentes en la indebida conducta procesal de la parte acusadora o romper el principio de buena fe, actuar dolosamente, alterar la realidad, así como la inequidad y parcialidad judicial en la valoración de sus declaraciones, violación al derecho de un inculpaado extranjero al ser informado sobre el derecho a la asistencia consular y a la garantía procesal prevista en el artículo 128, fracción IV (Infine) del Código Federal de Procedimientos Penales, la inexacta aplicación de los artículos 45 y 243 bis, fracción III del ordenamiento legal antes invocado; una indebida integración de la prueba circunstancial, así como que no existen elementos suficientes y pruebas lícitas que acrediten los delitos que se le imputan, por lo cual se considera que la mencionada sentencia es violatoria de las garantías previstas en los artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 133 Constitucionales.

SIN TEXTO

REC'D
2001-10-01
REC'D



Tampoco se advierte que la hoy recurrente planteó en los referidos conceptos de violación, la interpretación directa de un precepto constitucional para sustentar o avalar la pretensión de la quejosa, pues sus argumentos giran en torno a aquellas cuestiones que evidentemente tienden a combatir la sentencia reclamada en cuanto a su legalidad, es decir, la violación de garantías constitucionales se hace valer en vía de consecuencia.

Por lo anterior, la suscrita estima improcedente el recurso de revisión interpuesto, tomando en cuenta que no se actualizan los supuestos de procedencia a que hace alusión el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción II del artículo 84, en concordancia con la fracción V del artículo 83, ambos de la Ley de Amparo, y 10, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que en la sentencia que se recurre no se contiene decisión sobre la constitucionalidad de una Ley, ni interpretación directa de un precepto de nuestra Carta Magna, ni se omitió entrar al estudio de la constitucionalidad de leyes, puesto que en el presente asunto la quejosa no planteó en su demanda de garantías la inconstitucionalidad de alguna ley, ni interpretación directa de algún precepto constitucional; por ende, debe desecharse el mismo.

Es aplicable al caso en lo conducente, la tesis visible en la página 179, Tomo 187-192 IV, Tercera Sala, Séptima Época Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es:

"REVISIÓN IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIA DICTADA EN AMPARO DIRECTO POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, CUANDO VERSEN SOBRE VIOLACIONES DE GARANTÍAS.- De acuerdo con lo establecido por el artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión procede contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, exclusivamente cuando decidan sobre la constitucionalidad de una ley o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, por lo que es improcedente el recurso de revisión e infundado el recurso de reclamación respectivo, cuando la resolución recurrida verse sobre violaciones de garantías, pues no se está dentro de ninguna de las hipótesis que exhaustivamente señala la fracción citada".

Así también resulta aplicable la jurisprudencia 63/99, emitida por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, visible en la página 282 Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL PLANTEAMIENTO EN LOS AGRAVIOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. TRATADO INTERNACIONAL O REGLAMENTO, O LA INTERPRETACIÓN DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN, NO HACE PROCEDENTE EL RECURSO SI NO SE HIZO EN LA DEMANDA. O NO FUE EXAMINADO EN

SIN TEXTO


LA SENTENCIA RECURRIDA.- El que en el escrito de agravios por el que se interpone revisión en contra de una sentencia dictada en amparo directo se hagan planteamientos sobre constitucionalidad de leyes, tratados o reglamentos o sobre la interpretación directa de algún precepto de la Constitución, no hace procedente el recurso de revisión si tales cuestiones o bien no se hicieron valer en la demanda de garantías, como fueron examinadas en la sentencia del Tribunal Colegiado ya que es requisito para la procedencia del recurso de revisión el que en la sentencia dictada en el amparo directo se decida sobre los aspectos señalados, o bien, se omita decidir al respecto cuando existen los argumentos relativos en la demanda de garantías, sin que se surta tal procedencia por la introducción de los planteamientos respectivos hasta el escrito de agravios en la revisión."

Por lo antes expuesto y fundado, a esa H. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se formula pedimento en los términos siguientes:

PRIMERO.- Desechar por improcedente el recurso de revisión interpuesto y en consecuencia dejar firme la sentencia recurrida que negó el amparo y protección de la Justicia Federal.

SEGUNDO.- Tomar en consideración el presente pedimento dentro del cuerpo de la resolución que se pronuncie con apoyo en lo dispuesto por el artículo 107, fracción XV Constitucional.

**A T E N T A M E N T E
LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA FEDERACIÓN**



LIC. DORIANTH FIGUEROA GONZÁLEZ.

017678

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2011 MZO 30 AM 10 52

OFICINA DE CLERIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

RECIBI DE UN ENVIADO. en (cc) F. J. J.
SIN ANEXO *f*

RECIBI DE UN ENVIADO
SECRETARIA DE JUSTICIA

2011 MZO 30 AM 11 56

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

PROMOCIÓN: 017678

AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011.

En treinta de marzo de dos mil once, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el pedimento número _____ suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación, designada por el Procurador General de la República, para intervenir en el presente asunto, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el treinta del mes en curso. Conste.-----

México, Distrito Federal, a treinta de marzo de dos mil once. -----

Agréguese a los presentes autos el pedimento número _____ suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación, designada por el Procurador General de la República, para intervenir en el presente asunto, mediante el cual expone su parecer en los términos que señala.-----

Respecto, con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ténganse por realizadas las manifestaciones de la Representación Social Federal.-----

Por último, devuélvanse los presentes autos al
MINISTRO que suscribe. -----

Notifíquese.-----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes. -----



21 MAR 2011 Por esta fecha, a la fecha, se notifica el amparo a los interesados. Conste.

Hecho las catorce horas de la fecha antes indicadas y en virtud de lo que se acordó, dando los interesados su consentimiento, se da fe por fecha y hora de la fecha por medio de lista. Doy fe.

2



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

FORMAB-1

OF. 955 SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. (REVISION EN S.C.J.N. 517/2011).

OF. 956 PRIMER TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO (Ante. T. P. /2008)

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO '2010' DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, RELATIVO AL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR SE DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:

"México, Distrito Federal, a treinta de marzo de dos mil once.

Visto la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, a través del cual remite a este órgano colegiado los originales de los tomos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIII-A, XIII-B, un anexo constante de 330 fojas, dieciséis audicasetes, dos video casetes VHS y una grabadora, agregados al tomo VI, un DVD, agregado al tomo VII; dos video casetes, agregados al tomo VIII, tres DVD's, agregado al tomo XII y diversos objetos que obran agregados a la causa penal '2010 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por lo que se tienen por recibidas dichas reproducciones.

Ahora bien, atento a lo anterior envíense dichas constancias a la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo solicitó mediante oficio IV-457-P.

En consecuencia, acúsele recibo a dicho tribunal de las constancias antes mencionadas; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar."

CUMPLASE.

Así lo acordó y firma el Magistrado CARLOS HUGO LUNA RAMOS, Presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ante el Secretario de Acuerdos licenciado José Eliseo Reyes Gálvez, con quien actúa y da fe." (RÚBRICAS).

LO QUE HAGO DE SU CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR; ASIMISMO, SIRVA LA PRESENTE COMO ACUSE DE RECIBO.

ATENTAMENTE.

México, D.F., a 30 de marzo de 2011.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.



SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
LIC. JOSE ELISEO REYES GALVEZ.

RECIBIDO DE UN ENVIADO, CON:

-CAUSA PENAL /2010, EN:

- *• TOMO I EN 766 FOJAS, SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO.
- *• TOMO II EN 222 FOJAS, SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO.
- *• TOMO III EN 492 FOJAS, SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO.
- *• TOMO IV EN 283 FOJAS, SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO.
- *• TOMO V EN 492 FOJAS, SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO.
- *• TOMO VI EN 22 FOJAS, SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO; EN LAS CUALES SE ENCUENTRAN 16 AUDIOCASSETES, DOS VIDEO CASETES VHS Y UNA GRABADORA.
- *• TOMO VII EN 930 FOJAS, SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO; EN LA FOJA 793 SE ENCUENTRA UN DISCO COMPA CTO.
- *• TOMO VIII EN 806 FOJAS, SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO; EN LA FOJA 299 SE ENCUENTRAN DOS VIDEO CASETES.
- *• TOMO IX EN 716 FOJAS, SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO; EN LA FOJA 669 SE ENCUENTRA UNA GORRA Y EN LA 670 UNA GORRA PASAMONTAÑAS.
- *• TOMO X EN 721 FOJAS, SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO.
- *• TOMO XI EN 842 FOJAS, SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO.
- *• TOMO XII EN 732 FOJAS, SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO; EN LA FOJA 182 SE ENCUENTRA UN DISCO COMPACTO Y EN LA 322 DOS DISCOS COMPACTOS.
- *• TOMO XIII EN 872 FOJAS, SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO.
- *• TOMO XIII-A EN 949 FOJAS, SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO.
- *• TOMO XIII-B EN 577 FOJAS, SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO.

X-UN ANEXO ORIGINAL DE LA CAUSA PENAL 100/2010 EN 330 FOJAS, SEGÚN SU ÚLTIMO FOLIO.

* -COPIA CERTIFICADA DEL TOMO XXX DE LA CAUSA PENAL /2010, EN CUYA CERTIFICACIÓN SE SEÑALAN 226 FOJAS.

ARTURO GUTIERREZ CRUZ.



018014

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2011-MZO 31 PM 12 41

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

PRINCIPAL SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

2011 MZO 31 PM 1 22

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

67
FORMA A-84

AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011.

En cuatro de abril de dos mil once, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el oficio número 955, signado por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el treinta y uno de marzo del año en curso, con los anexos que constan en la razón asentada por dicha oficina. Conste.-----

México, Distrito Federal, a cuatro de abril de dos mil once.-----

Agréguese el oficio número 955, signado por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de fecha treinta de marzo del presente año, mediante el cual remite los autos relativos a la causa penal /2010 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Estado México, con los anexos precisados en dicho oficio. Acúsese recibo -----


Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ténganse por hechas las

manifestaciones de la autoridad oficiante y por
recibida la documentación citada.-----

Devuélvanse los autos a la Ponencia del
Ministro que suscribe.-----

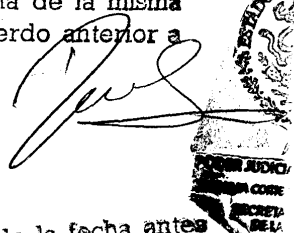
Notifíquese.-----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO
ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza
y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes.-----

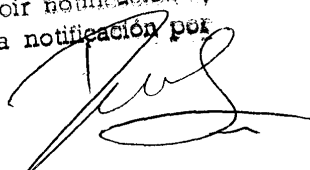


-7 ABR. 2011

Por lista de la misma
fecha, se notificó el acuerdo anterior a
los interesados. Conste;



Siendo las catorce horas de la fecha antes
indicada, y en virtud de no haber compe-
recido los interesados a oír notificaciónes,
se tiene por hecha dicha notificación por
medio de lista. Doy fé.



RECURRENTE:

REVISIÓN: 5/7/2011

11:05 A.M.
5-abril-11

H. PRIMERA SALA DE LA SUPREMA

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN:

por derecho propio, comparezco ante Usted, respetuosamente, con el propósito de solicitarle se sirva expedir a mi costa copia certificada de mi expediente completo, incluyendo los documentos base, así como los videos y demás elementos de prueba incluidos en el mismo. Autorizo en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, para el efecto de tramitar y recibir las copias mencionadas, al C. para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo expuesto a Ustedes, anteriormente, con todo respeto le solicito se sirva:

ÚNICO.- Proveer conforme a lo solicitado.

México, Distrito Federal, a primero de abril de dos mil once.

018553

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2011 ABR 4 PM 2 36

OFICINA DE CLASIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

SECRETARIA DE JUSTICIA

2011 ABR 4 PM 3 30

PRIMER SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS



la Sala
Amparo Directo en Revisión: 517/2011

Quejosa:

Delito: Violación a la Ley Contra la
Delincuencia Organizada y otros.

CC. MINISTROS DE LA H. PRIMERA SALA DE LA H. SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
P R E S E N T E.

en mi carácter de quejosa dentro de los autos del Amparo Directo en Revisión cuyo número de partida se indica al rubro, respetuosamente comparezco y expongo:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, vengo a solicitar atentamente sea expedida, a mi costa **copia** fotostática certificada de todas y cada una de las constancias que integran el Amparo Directo número /2010, del índice del H. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, así como del expedientillo formado con el recurso de revisión al que promuevo, así como también todas y cada una de las constancias que integran el proceso penal /2006, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, incluidas las grabaciones, videos y anexos. Autorizando para recibir las mismas en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Amparo, indistintamente previa identificación, toma de razón y firma que por su recibo dejen asentado en autos, a los CC. Licenciados .

Por lo antes expuesto y fundado, a
A USTEDES CC. MINISTROS ATENTAMENTE PIDO:

UNICO: Acordar de conformidad lo solicitado.

México, D.F., a 5 de Abril de 2011.

PROTESTO LO NECESARIO.

018786

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2011 ABR 5 PM 1 05

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION
2011 ABR 5 PM 2 14
SECRETARIA DE JUSTICIA

RECIBI DE UN ENVIADO
SIN ANEXO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOCIONES: 018553
018786

AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011

En catorce de abril de dos mil once, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los escritos signados por la quejosa, recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, los días cuatro y cinco de abril del año en curso. Conste.-----

México, Distrito Federal, a catorce de abril de dos mil once.-----

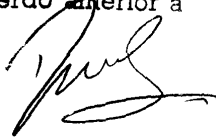
Agréguese a los autos los escritos signados por la quejosa, en los que solicita copia certificada de todo el expediente.-----

Con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese oficio a la Oficina que corresponda para pedir el apoyo necesario para obtener lo solicitado y una vez que se cuente con dichas copias serán entregadas a las personas que señala.-----

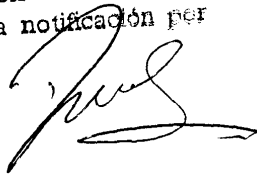
Notifíquese.-----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes.-----

15 ABR. 2011 Por lista de la misma
fecha, se notificó el acuerdo anterior a
los interesados. Conste,



Siendo las catorce horas de la fecha antes
indicada, y en virtud de no haber compare-
cido los interesados a oír notificación,
se tiene por hecha dicha notificación por
medio de lista. Doy fé.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-49

71

LIC. OTILIO ESTEBAN HERNÁNDEZ PÉREZ.
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN.
P R E S E N T E.

En el expediente que se menciona al margen, el
Presidente de esta Primera Sala dictó el siguiente
acuerdo:

PRIMERA SALA.
SRÍA. DE ACUDOS.

A.D.R. 517/2011.

OF. VI-473-P.

"México, Distrito Federal, a catorce de abril de dos mil
once.

Agréguese a los autos los escritos signados por la
quejosa, en los que solicita copia certificada de todo el
expediente.

Con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese oficio a
la Oficina que corresponda para pedir el apoyo necesario
para obtener lo solicitado y una vez que se cuente con dichas
copias serán entregadas a las personas que señala.

Notifíquese.

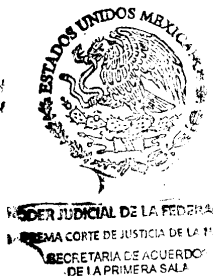
Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO
ZALDÍVAR LELO DE ARREA**, Presidente de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado
Heriberto Pérez Reyes.

Lo que comunico a usted para los efectos legales
a que haya lugar.

Le reitero mi atenta consideración.

México, D. F., a 14 de abril de 2011.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA.



LSJ/pgt.

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.

DIRECCIÓN GENERAL
DE INFORMÁTICA

Apr 15 2 32 PM 2011

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Q
T
X
T
N
I
O

Q
T
X
T
N
I
O



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

72
FORMA A-5

RAZÓN ACTUARIAL

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

PRIMERA
SALA

ACTUARIOS

En la ciudad de México, Distrito Federal, a veintiocho de abril de dos mil once, el suscrito licenciado Víctor Aguirre Reveles, Actuario adscrito a la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hago constar: que el día de hoy a las doce horas con cinco minutos, estando presentes en la antesala de sesiones de esta Primera Sala Diana Jessica Martínez Martínez, quien se encuentra adscrita a la Dirección General de Tecnologías de la Información, la licenciada Leticia Serrano Jaén, Secretaria Auxiliar de Acuerdos encargada del trámite del Amparo Directo en Revisión 517/2011 y el suscrito Actuario, la primera de las mencionadas procedió a copiar, en la computadora portátil que trajo consigo para tal propósito, el disco compacto que se encuentra agregado a fojas ciento ochenta y dos, del tomo XII, del expediente original de la causa penal /2010, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, el cual dio origen al Amparo Directo en Revisión en que se actúa, y una vez concluida la copia del referido disco compacto se procedió a agregarlo nuevamente en la misma foja en la que se encontraba, quedando bajo resguardo de la licenciada Serrano Jaén el duplicado del disco y el expediente original de que se trata; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar y firman la presente diligencia la Secretaria Auxiliar de Acuerdos y el suscrito Actuario. Doy fe.

SECRETARIA AUXILIAR DE ACUERDOS


LICENCIADA LETICIA SERRANO JAÉN.


ACTUARIO.
VÍCTOR AGUIRRE REVELES.

SIN TEXTO



RAZÓN ACTUARIAL

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PRIMERA
SALA

ACTUARIOS

En la ciudad de México, Distrito Federal, a seis de mayo de dos mil once, el suscrito licenciado Víctor Aguirre Reveles, Actuario adscrito a la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hago constar: que el día de hoy a las diez horas con cinco minutos me fueron entregados por el licenciado Heriberto Pérez Reyes, Secretario de Acuerdos de esta Primera Sala, tres discos DVD, que corresponden a los que obran agregados a fojas setecientos noventa y tres del tomo VII (un disco) y trescientos veintidós del tomo XII (dos discos), del expediente original de la causa penal 12010, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, el cual dio origen al Amparo Directo en Revisión en que se actúa, lo anterior a efecto de que fueran copiados en las instalaciones del Canal Judicial de esta Suprema Corte, por lo que acto seguido me constituí en compañía de la licenciada Leticia Serrano Jaén, Secretaria Auxiliar de Acuerdos encargada del trámite del Amparo Directo en Revisión 517/2011, en las oficinas de la Dirección General del Canal Judicial, ubicadas en la puerta 1032 de este Alto Tribunal y nos entrevistamos con José Rivera Barrera, quien dijo ser Director de Continuidad, mismo que procedió a copiar en los equipos de esa Dirección General los discos mencionados y concluido esto quedaron bajo resguardo del licenciado Pérez Reyes los discos originales, los duplicados de los mismos y el expediente original de que se trata; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar y firman la presente diligencia la Secretaria Auxiliar de Acuerdos y el suscrito Actuario. Doy fe.

SECRETARIA AUXILIAR DE ACUERDOS


LICENCIADA LETICIA SERRANO JAÉN.


ACTUARIO.
VÍCTOR AGUIRRE REVELES.

SIN TEXTO

12:26 PM Recurrente:
26 mayo 2011 Amparo en Revisión 517/2011 74
H. Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación:

por derecho propio,
comparezco ante Usted, respetuosamente, con el
propósito de tenerme por desistida de la solicitud
de copias certificadas realizada el 5 de abril de
2011, ratificando mi escrito de fecha 10 de abril
del mismo año y que fue presentado ante esta
Honorable Sala el día 4 de abril de 2011, en
el que solicito copias certificadas de mi expediente y
autonzo al C. para
tramitarlas y reanudarlas.

Por lo expuesto a Ustedes, anteriormente, con todo
respeto les solicito se sirvan:

Unico: Proveer conforme lo solicitado.

México, D.F., a 23 de mayo de 2011

320271

SECRET
EXEMPTED FROM AUTOMATIC
DECLASSIFICATION

2011 MAY 25 AM 11 21

OFICINA DE SERVICIOS
JUDICIALES Y LEGALES

**RECIBI DE UN ENVIADO
SIN ANEXOS
ARTURO QUTIERREZ CRUZ**



SECRETARIA DE JUSTICIA DE LA NACION

2011 MAY 25 PM 1 17

PRIVILEGIO
SECRETARIA DE ACUERDOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 16:30 HORAS
DEL DÍA PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, la suscrita Actuaría
Judicial adscrita a la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Licenciada Paula Julia Corona Cedillo, en
cumplimiento al acuerdo de fecha TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL
ONCE, dictado en AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011, del índice de
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con el objeto de
efectuar la NOTIFICACIÓN PERSONAL ordenada en autos, constituida con las
formalidades legales, en el Departamento Jurídico del Centro de Readaptación
Social de Tepepán en el Distrito Federal, en busca de

soy informada por el personal de dicho
Departamento, que efectivamente la persona buscada se encuentra aquí
recluida, por lo que procedo a requerir su presencia, y hecho que fue,
encontrándose presente y cerciorada de que se trata de la misma persona,
porque al preguntarle sus nombres y apellidos coinciden con los que tengo en el

acuerdo que vengo a notificarle: sus

generales edad años, estatura metros,
complexión tez ojos
color mariz boca,
labios meñón señas particulares
Tiene origenaria de grado
de estudio y una vez

enterado del motivo de mi visita, y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 28, fracción II, y 29, fracción III de la Ley de Amparo; le hago saber el
contenido del acuerdo de fecha TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL
ONCE, dictado por EL PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE LA

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
NÚMERO 517/2011

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en el expediente del AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO 517/2011, y en este acto manifiesta que se da por notificada del acuerdo de fecha treinta y uno de mayo de dos mil once, y recibe copia simple del mismo. Con lo que se da por terminada la presente diligencia, firmando al calce para constancia, los que en ella intervinieron. Doy fe.

LA ACTUARIA JUDICIAL.

LIC. PAULA JULIA CORONA CEDILLO.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOCIÓN: 028271

AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011

En treinta y uno de mayo de dos mil once, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el escrito signado por la quejosa, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el día veinticinco del mes en curso. Conste. -----

México, Distrito Federal, a treinta y uno de mayo de dos mil once. -----

Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa, en el que se "desiste" del escrito de solicitud de las copias certificadas de cinco de abril del presente año, y "ratifica", su solicitud de primero de abril del presente año, en el que autorizó a
-----, para tramitarlas y recibirlas. - - -

Con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se tiene por presentado el escrito que antecede y por desistida del escrito que menciona.

Infórmesele que las copias solicitadas se encuentran a su disposición en la Secretaría de

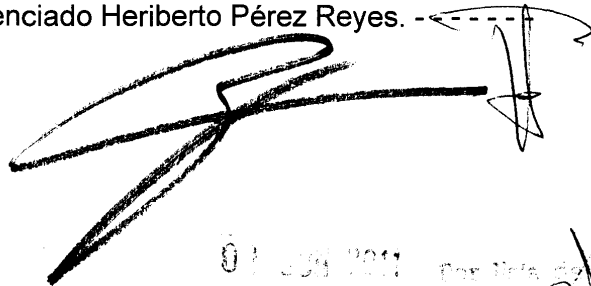
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

- 2 -

Acuerdos de esta Sala, así como un CD y tres DVD, con excepción de casetes y videocasetes, por no contar con los medios para reproducirlos y se le expiden de manera gratuita, previa razón de recibo que conste en autos, de la persona que las recoja.- -

Notifíquese; y de manera personal por conducto de actuario adscrito a esta Primera Sala, a la promovente, en el Centro de Readaptación Social de Tepepan en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción, II, de la Ley de Amparo. -----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes. -----



01 JUN 2011 Por falta de firma
Falta en el expediente el consentimiento
La Secretaría de Acuerdos

El señor juez autoriza la firma de la fracción
II, de la Ley de Amparo, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo
y el artículo 107, fracción II, de la Constitución
Mexicana, en el sentido de que se le expiden los
medios de la Sala, así como un CD y tres DVD, con
excepción de casetes y videocasetes, por no contar
con los medios para reproducirlos y se le expiden de
manera gratuita, previa razón de recibo que conste en
autos, de la persona que las recoja.- -

LSJ.

12.26m
4/002/11
77

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN: 517/2011

C. PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

quejosa, digo :

En atención al acuerdo del treinta y uno de mayo del año en curso de esta Primera Sala, en la que se expiden y dejan en la Secretaría de Acuerdos las copias solicitadas, así como un CD y tres DVD, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo autorizo en todos sus términos y expresamente para recibirlas a los señores ,
y

Autorizo igualmente y para efectos de tramitar, servirse de los medios técnicos para reproducir o copiar el material audiovisual afecto a la causa (CD, DVD, VHS o casset) al señor

Para cualquier efecto estas personas así como los autorizados previamente en la demanda de amparo que da origen a la presente revisión podrán ser notificados en el domicilio ubicado en , en esta ciudad.

Respetuosamente,

036700

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2011 JUL 4 PM 12 19

2011 JUL 4 AM 9 50

PRIMERA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

RECIBIDO SIN ENVIADO
SIN ANEXO

RECIBIDO
SIN ENVIADO
SIN ANEXO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOCIÓN: 036700

AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011

En cinco de julio de dos mil once, el Secretario de
Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
con el escrito signado por la quejosa, recibido en la
Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia,
el día cuatro del mes en curso. Conste. -----

México, Distrito Federal, a cinco de julio de
dos mil once. -----

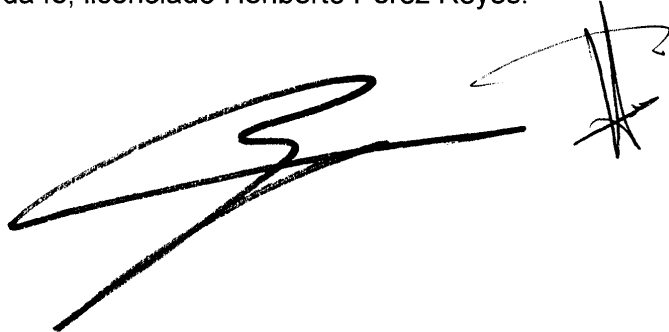
Agréguese a los autos el escrito signado por la
quejosa, en el que ~~autoriza~~ ^{autoriza} en términos amplios a
las personas que ~~que~~ ^{que} menciona en el ocurso de cuenta
y a recibir las copias que refiere el proveído dictado
por esta ~~Presidencia~~ ^{Presidencia} el treinta y uno de mayo del
presente año, así mismo señala domicilio para oír y
recibir notificaciones. -----

Con fundamento en el artículo 25, fracción I,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, se tiene por presentado el escrito de
antecedentes, por autorizados en términos amplios y
para recibir las referidas copias, a

previa razón de
recibo que conste en autos de la persona que las
recoja, se tiene por señalado el domicilio que indica
para oír y recibir notificaciones.-----

Notifíquese personalmente.-----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO
ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza
y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes.-----



LSJ.

07 JUL 2011 Por lista de la misma
fecha, se notificó el acuerdo anterior a
los interesados. Conste.

Siendo las catorce horas de la fecha antes
indicada, y en virtud de no haber compa-
recido los interesados a las notificaciones,
se tiene por hecha dicha notificación por
medio de lista. Doy fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PRIMERA
SALA

ACTUARIOS

79
FORMA A-B

CONSTANCIA DE ENTREGA DE COPIAS

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del seis de julio de dos mil once, en la oficina de Actuarios de la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante la presencia del licenciado Víctor Aguirre Reveles, Actuario Judicial adscrito a la Secretaría mencionada, comparece

se identifica con credencial para votar número expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista, se agrega copia certificada a los autos y se devuelve a la compareciente, quien se encuentra autorizada por la quejosa para recibir las copias certificadas del expediente en que se actúa, y en este acto se le entrega copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto, consiste en: Amparo Directo en Revisión 517/2011 en sesenta y ocho fojas, Amparo Directo Penal /2010 del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en mil veintidós fojas, Toca de Apelación 2008 del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en mil ochocientas noventa y siete fojas, Cuadernillo del Amparo Directo Penal 2010 en treinta y ocho fojas, Causa Penal /2010 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal en dieciséis tomos constantes de: tomo I en setecientas setenta y tres fojas, tomo II en doscientas veintiséis fojas, tomo III en cuatrocientas noventa y cuatro fojas, tomo IV en doscientas ochenta y cinco fojas, tomo V en cuatrocientas noventa y cinco fojas, tomo VI en veintiséis fojas, tomo VII en setecientas ochenta y cuatro fojas, tomo VIII en ochocientas ocho fojas, tomo IX en setecientas dieciocho fojas, tomo X en setecientas veintitrés fojas, tomo XI en ochocientas cuarenta y cuatro fojas, tomo XII en setecientas treinta y seis fojas, tomo XIII en ochocientas setenta y cinco fojas, tomo XIII A en novecientas cincuenta y un fojas, tomo XIII B en quinientas setenta y nueve fojas, tomo XXX en doscientas veintiocho fojas y un anexo de dicha causa en trescientas treinta y dos fojas; así como copia de un disco compacto que corresponde al que se encuentra agregado a fojas ciento ochenta y dos, del tomo XII, y tres copias de discos DVD, que corresponden a los que obran agregados a fojas setecientos noventa y tres del tomo VII (un disco) y trescientos veintidós del tomo XII (dos discos), todos del expediente original de la referida causa penal /2010; lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en los acuerdos de treinta y uno de mayo y cinco de julio, ambos del año en curso, por lo que firma al calce la compareciente de recibido, de conformidad y para constancia. Doy fe.

ACTUARIO

VÍCTOR AGUIRRE REVELES.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

80
FORMA A-53

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE _____ EDADE _____ SEXO _____

DOMICILIO _____

FOLIO _____ AÑO DE REGISTRO 2006 01

CLAVE DE ELECTOR _____

ESTADO 09 DISTRITO _____

MUNICIPIO 010 LOCALIDAD 0001 SECCION _____

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
CORTES O EMENDACIONES.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR
EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

[Firma]
EDUARDO JACOBINO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

NOSE97010EECE

ELECCIONES FEDERALES			LOCALES																			
ESTADO	MUNICIPIO	SECCION	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
09	010	0001																				

La presente copia es fiel que se obtuvo del original de la credencial de elector que tuve a la vista y se devuelve a la compareciente; se certifica en una foja útil para agregarse al amparo directo en revisión 517/2011. Doy fe.

México, D. F., seis de julio de dos mil once.

ACTUARIO

[Firma]
VICTOR AGUIRRE REVELES.
SECRETARIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DE LA PRIMERA SALA

**srll

SIN TEXTO



En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 18:45

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FOROS DEL DÍA SEIS DE JULIO DE DOS MIL ONCE, la suscrita Actuaría Judicial adscrita a la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Licenciada Paula Julia Corona Cedillo, en cumplimiento al acuerdo de fecha CINCO DE JULIO DE DOS MIL ONCE, dictado en el EXPEDIENTE RELATIVO AL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO 517/2011, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con el objeto de efectuar la NOTIFICACIÓN PERSONAL ordenada en autos, constituida con las formalidades legales, en el Departamento Jurídico del Centro de Readaptación Social de Tepepan en el Distrito Federal, en busca de soy informada por el personal de dicho Departamento, que efectivamente la persona buscada se encuentra aquí recluida, por lo que procedo a requerir su presencia, y hecho que fue, encontrándose presente y cerciorada de que se trata de la misma persona, en virtud de que su nombre y apellidos coinciden con los que tengo en el acuerdo que se cita; y sus

generales son: edad años, estatura metros
complexión tez cabello
color cejas ojos co
lor nariz boca labios
grado de estudio
originaria de y una vez enterada

del motivo de mi visita, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción II, párrafo primero y 29, fracción III de la Ley de Amparo; le hago saber el contenido del acuerdo de fecha CINCO DE JULIO DE DOS MIL ONCE, dictado por EL PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en el expediente

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
NÚMERO 517/2011.

RELATIVO AL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO 517/2011,
y en este acto manifiesta que se da por notificada del acuerdo de fecha
cinco de julio del año en curso, y recibe copia simple del mismo. Con lo que
se da por terminada la presente diligencia, firmando al calce para constancia,
los que en ella intervinieron. Doy fe.

LA ACTUARIA JUDICIAL.

LIC. PAULA JULIA CORONA CEDILLO





12:56
82

100 Saka
1000 01/2011

Memorial de *Amicus Ex Parte* del gobierno de la República francesa en el juicio de amparo directo en revisión promovido por [redacted] bajo el expediente 517/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DISTINGUIDA SEÑORA Y DISTINGUIDOS SEÑORES MINISTROS, MIEMBROS DE LA PRIMERA SALA:

Objeto del presente memorial e interés del gobierno de la República francesa en el caso: la defensa del derecho a la asistencia consular y su efectividad.

23- Sep-2011
10:21 P.M.

El objeto del presente escrito en calidad de *Amicus Ex Parte* es proveer a la Primera Sala de este Alto Tribunal las observaciones y argumentos para apoyar el juicio de amparo directo en revisión promovido por [redacted] bajo el expediente 517/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el tema específico de los derechos consulares.

El artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (en lo sucesivo "Convención de Viena" o "Convención") instituye un sistema de protección consular para los nacionales que se hallen detenidos en territorio de otro Estado parte. Para garantizar esta protección, la Convención otorga derechos tanto a los funcionarios consulares del Estado que envía como a los nacionales de dicho Estado que se encuentren en el Estado receptor.

En el caso, la violación a los derechos consulares (en un momento clave de la averiguación previa o de la investigación) impidió que [redacted] ejerciera con plena eficacia los derechos de protección consular que le asisten, conforme a los artículos 5 y 36 de la Convención de Viena, y generó un grave perjuicio al Estado conforme a sus derechos establecidos en la Convención y a los derechos de una de sus nacionales.

En [redacted] modo [redacted] se pronuncia sobre el fondo del asunto que vincula a su nacional [redacted] hoy peticionaria de amparo directo en revisión. El tema que legítimamente le atañe son los derechos y obligaciones derivados de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, mismos que se encuentran reflejados en el derecho interno mexicano. Considera que la violación a los derechos consulares constituye, por sí misma, una falta a las exigencias del debido proceso. Esta posición es reflejo de la misma postura de los Estados Unidos Mexicanos ante la comunidad internacional.

En su momento, [redacted] transmitió igualmente un memorial al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito encargado de juzgar la solicitud de amparo directo de [redacted], relativo a la violación a los derechos consulares (fecha de entrega: 1 de [redacted]).

SIN TEXTO

diciembre del 2010). Cabe subrayar que el Tribunal no mencionó en su fallo el escrito del gobierno a pesar de que éste debía ser considerado como parte del expediente. En todo caso, el Séptimo Tribunal sí se pronunció sobre los argumentos de fondo, rechazándolos en una forma que, desde el punto de vista del gobierno francés, desatiende el marco constitucional mexicano y pasa por alto fallos de jurisprudencia internacional promovidos por el mismo Estado mexicano.

Por lo tanto, con la finalidad de demostrar la existencia de dicha violación así como su alcance, el presente memorial expone lo siguiente:

- Los hechos, tales como aparecen en el expediente, confirman que: a) no fue informada sobre su derecho a contactar al consulado de y a recibir la oportuna y debida asistencia consular antes de rendir su primera declaración ministerial; y b) su detención no fue comunicada de inmediato y sin demora a la representación consular de en violación al Código Federal de Procedimientos Penales (Artículo 128, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales), que refleja en el ámbito interno lo dispuesto por la Convención de Viena (1).
- El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, si bien reconoció la violación a un derecho fundamental, no asumió las consecuencias que tuvo esta grave violación al derecho de asistencia consular en el ejercicio del derecho a una defensa adecuada y, por lo tanto, no protegió adecuadamente una garantía procesal esencial consagrada en los tratados internacionales firmados por México y por la Constitución mexicana (2).
- Por consiguiente, el gobierno pide a la Suprema Corte que reconozca y se pronuncie sobre la violación a este derecho fundamental, condición del debido proceso, en congruencia con la postura y argumentos del Estado mexicano ante la comunidad internacional y los tribunales internacionales de justicia.



ESTADO MEXICANO
SECRETARÍA DE JUSTICIA
10-05-2010

CONFIDENTIAL

SECRET

1. Los hechos, tales como aparecen en el expediente, confirman que a) no fue informada sobre su derecho a contactar al consulado de y a recibir la oportuna y debida asistencia consular antes de rendir su primera declaración ministerial; y b) su detención no fue comunicada de inmediato a la representación consular de , en violación al derecho penal mexicano, que refleja en el ámbito interno lo dispuesto por la Convención de Viena.

A. El derecho penal mexicano, reflejo en el ámbito interno de la Convención de Viena, contiene un alto grado de exigencia en relación al derecho a la asistencia consular.

El inciso b) del párrafo primero del artículo 36 de la Convención de Viena determina las modalidades según las cuales debe llevarse a cabo la notificación consular, con el fin de hacer efectivo el ejercicio del derecho a la asistencia consular. Esta disposición prevé que las autoridades del Estado receptor deben informar "*sin dilación*" a todo nacional de otro Estado que "*sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva*" sobre su derecho a ponerse en contacto con su consulado. Del mismo modo, establece que "*si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva*".

Esta obligación se ve reflejada en la legislación mexicana. El artículo 128, párrafo IV, del Código Federal de Procedimientos Penales, señala que "la detención se comunicará *de inmediato* a la representación diplomática o consular que corresponda". Esta fórmula, "de inmediato", que impacta por su claridad y normatividad, fortalece el derecho a una defensa adecuada al permitir que la asistencia consular sea rápida y efectiva en un momento esencial de la investigación, es decir desde el momento mismo en que la persona extranjera sea detenida, arrestada, retenida o acusada, y antes de que rinda su primera declaración ministerial.

En resumen, tres obligaciones distintas (que encuentran sus fundamentos en el derecho internacional aplicable en México o bien directamente en el derecho procesal interno en materia penal) deben ser destacadas:

- Primero, la autoridad investigadora debe cumplir con su deber de informar al detenido sobre los derechos a la asistencia consular al momento de asegurarlo o privarlo de su libertad y, en todo caso, antes de que rinda su primera declaración ante dicha autoridad.
- Segundo, existe la obligación de notificar la detención del extranjero a las autoridades consulares de su país. En el caso, no hay contravención: las autoridades terminaron por avisar a nuestro consulado sobre la detención de
- Tercero, la obligación descrita en el punto que antecede debe cumplirse "*de inmediato*". Cabe subrayar que se trata de una obligación que no es de comportamiento sino de resultado, como lo sostiene la siguiente jurisprudencia,

SIN TEXTO

SECRET

85
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2006, Tomo XXIII, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

DEFENSA ADECUADA. ALCANCE DE DICHA GARANTÍA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LAS DIVERSAS IX Y X DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, en relación a los alcances de la garantía de defensa adecuada en la averiguación previa a que se refieren las fracciones IX y X del artículo 20 apartado A de la Constitución Federal, que aquélla se actualiza desde el momento en que el detenido es puesto a disposición del Ministerio Público. Lo anterior implica que ninguna de las garantías del detenido durante el proceso penal puede ser concebida como un mero requisito formal, y para que pueda hacerse efectiva y permitir su instrumentación requiere de la participación efectiva en el procedimiento por parte del imputado desde que es puesto a disposición del representante social. Por tanto, en lo que se refiere a la fracción II del dispositivo citado, que establece que la confesión rendida ante el Ministerio Público o Juez sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio, esta Primera Sala considera que la "asistencia" no sólo debe estar relacionada con la presencia física del defensor ante o en la actuación de la autoridad ministerial, sino que la misma debe interpretarse en el sentido de que la persona que es puesta a disposición de la autoridad ministerial cuente con la ayuda efectiva del asesor legal. En este sentido, el detenido en flagrancia, en caso de que así lo decida, podrá entrevistarse con quien vaya a fungir como su defensor inmediatamente que lo solicite y antes de rendir su declaración ministerial. En consecuencia, la primera declaración rendida ante el Ministerio Público, estará viciada y será ilegal cuando no se haya permitido la entrevista previa y en privado con el defensor.

Amparo directo en revisión /2004. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.

Amparo directo en revisión /2005. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosaura Rivera Salcedo.

Amparo directo en revisión /2005. 23 de noviembre de 2005. Cinco votos.
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno.

Amparo directo en revisión /2005. 30 de noviembre de 2005. Cinco votos.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Amparo directo en revisión /2005. 22 de febrero de 2006. Cinco votos. Ponente:
Sergio A. Vallis Hernández. Secretario: Arnoldo Castellanos Morfin.

Tesis de jurisprudencia 23/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintinueve de marzo de dos mil seis.

Ahora bien, los hechos relativos a la omisión de la autoridad investigadora de informar debidamente a la representación consular de Francia en México sobre la detención de

SIN TEXT O

SECRET

ya no se cuestionan. El mismo Tribunal Colegiado, cuya sentencia se revisa, así lo estableció. Se transcribe la parte relevante: *“Asimismo no existe constancia en la averiguación previa, de que se le haya informado a la aquí quejosa, sobre su derecho a la asistencia consular, a que se refiere el mencionado artículo 36 de la Convención de Viena, antes mencionada. Todo lo cual, como se dijo, resulta fundado, pues además de la obligatoriedad del acatamiento de tales preceptos, es evidente que los mismos no tienen el propósito que al parecer consideró el tribunal de alzada, de otorgar algún tipo de ventaja o posición privilegiada al extranjero detenido, sino la darle la posibilidad de defenderse en igualdad de condiciones que un nacional, ya que es obvio que un extranjero, además de la diferencia del idioma en algunos casos, se enfrenta a un sistema de investigación o judicial que desconoce. Razón por la cual el extranjero detenido de conformidad con la citada Convención de Viena, artículo 36, punto 1, incisos b) y c) establece que todo extranjero en prisión preventiva, tiene derecho a que se informe a la representación diplomática de su país, su situación jurídica y también a que se haga de su conocimiento el derecho que tiene para recibir la visita de los funcionarios consulares y en su caso, organizar su defensa ante los tribunales respectivos. Como puede verse, el representante social de la federación sí incurrió en transgresión a un derecho fundamental de la indiciada.”* (Amparo D.P. /2010 páginas 1528 y 1529).

Luego, el mismo Tribunal Colegiado de Circuito advierte en su fallo la violación a la asistencia consular, la cual no es un derecho menor sino un verdadero elemento constitutivo de las garantías mínimas de defensa y del debido proceso.

El alcance de estas reglas entraña una cuestión de interpretación constitucional, profundizada por la reforma en materia de Derechos Humanos que entró en vigor el 11 de junio de 2011.

Por un lado, cabe recordar que el artículo 14 de la Constitución mexicana establece que *“nadie podrá ser privado de la libertad (...) sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”*. Ahora bien, estos derechos del acusado, reiterados en el Código Federal de Procedimientos Penales, deben ser considerados *“formalidades esenciales del procedimiento”* protegidas a nivel constitucional.

Por otro lado, el artículo 133 de la Constitución General de la República Mexicana ordena que *“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión”*, por lo que la Convención de Viena constituye un instrumento internacional que forma parte del derecho mexicano.

Por último, la reforma en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011 profundiza lo que está en juego a nivel constitucional en este caso, ya que el derecho a la asistencia consular es un componente de los derechos de la defensa considerados derechos humanos por el Estado mexicano y por las cortes internacionales de justicia. De hecho, el nuevo artículo 1º de la Constitución mexicana fortalece la protección a los derechos humanos al disponer:

Q
T
E
X
T
O

N
I
S



“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. / Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. / Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

B. Los hechos, tales como aparecen en el expediente confirman que: a) no fue informada sobre su derecho a contactar al consulado de Francia y a recibir la oportuna y debida asistencia consular antes de rendir su primera declaración ministerial; y b) su detención no fue comunicada de inmediato a la representación consular de Francia, como lo exige el Código Federal de Procedimientos Penales.

El momento exacto de la detención de _____ fue tema de debate a lo largo de todo el proceso judicial. Según las autoridades investigadoras, la detención ocurrió el 9 de diciembre de 2005. Según _____ ocurrió el 8 de diciembre. Habiendo desechado los numerosos elementos puestos de relieve por la defensa de _____ (entre otros: la primera declaración y las lesiones de _____, el informe de _____ así como las inconsistencias del parte informativo de la policía federal del 9 de diciembre de 2005), el Tribunal Colegiado fundamentó su postura en un elemento principal: la primera declaración de _____ de 9 de diciembre, en la cual hace referencia al “día de su detención” sin mencionar explícitamente el 8 de diciembre como fecha de detención.

Si entrar en ese debate esencial, el gobierno francés tiene conocimiento de la existencia de zonas oscuras en el expediente que indican o permiten establecer que la detención ocurrió un día antes, y no el 9 de diciembre como sostiene la versión oficial. Lo que se pretende poner de relieve es que, incluso si se admite la postura adoptada por el Tribunal Colegiado de Circuito al respecto, la irregularidad en la comunicación de la detención a la representación consular es evidente y es relevante.

Primero, _____ no fue informada sobre su derecho a la asistencia consular al ser detenida por la policía, ni al ser exhibida ante los medios, ni al ser puesta a disposición de la autoridad, ni tampoco antes de rendir su declaración ministerial. El expediente y el Tribunal Colegiado confirman esta falta, ya que ni en la constancia ministerial de puesta a disposición, ni en el acta de su primera declaración ministerial, se da cuenta de que haya sido informada sobre este derecho.

Segundo, la detención de _____ no fue comunicada “de inmediato” a nuestra representación consular. En efecto, después de haber sido detenida, ya el 8 ya el 9 de diciembre, fue primero exhibida ante los medios de comunicación y presentada como secuestradora durante una “recreación” que no tuvo nada que ver con las circunstancias

SIN TEXTO



exactas de su arresto. Solamente después de estos hechos, fue puesta formalmente a disposición del Ministerio Público, a las 10.16 de la mañana del 9 de diciembre. Su primera declaración ministerial tuvo lugar ese mismo día, a las 15.15. Ahora bien, la autoridad investigadora intentó comunicarse con la embajada de Francia a las 15.05, **es decir un poco menos de cinco horas después de la puesta a disposición ante el Ministerio Público**, pero no lo logró. El Ministerio Público logró por fin avisar al consulado hasta el sábado 10 de diciembre, a las 12.20.

En todo caso, sobresa le incumplimiento de la ley penal mexicana por parte del órgano ministerial. Obviamente, si se decide que lo que le corresponde a la autoridad investigadora es una obligación de resultado, no hay duda alguna de la violación: veintiséis horas separaron la puesta a disposición del aviso efectivo al consulado. Incluso, si se decide que lo que corresponde a la autoridad es solamente una obligación de hacer, la violación del derecho consular sigue clara, ya que cinco horas separaron la puesta a disposición ante el Ministerio Público del primer intento de comunicación, duración establecida sin impugnación en el expediente, que no puede ser considerada como una actuación "de inmediato". Además, el gobierno de Francia considera que existen razones objetivas para dudar de la buena fe del (fallido) intento de comunicación hecho el viernes 9 de diciembre.

- La comunicación tardía de la detención al consulado representa una violación al Código Federal de Procedimientos Penales. Aún más: **se trata de una violación de gran alcance, cada vez más reconocida por la jurisprudencia mexicana, que debería concluir en la anulación del procedimiento**, tal y como ha sido la postura del Estado mexicano ante la comunidad internacional, particularmente ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Séptimo Tribunal Colegiado tomó una postura exactamente contraria que, a nuestro parecer, debería ser corregida por esta Suprema Corte.

SIN TEXTO



2. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, si bien reconoció la violación a un derecho fundamental, no asumió las consecuencias que tuvo esta grave violación al derecho de asistencia consular en el ejercicio del derecho a una defensa adecuada y, por lo tanto, no protegió adecuadamente una garantía procesal esencial consagrada en los tratados internacionales firmados por México y por la Constitución mexicana.

A. El Tribunal Colegiado reconoció la demora ilegal en materia de derechos consulares, pero estimó dicha violación "inoperante".

El Tribunal reconoció la violación en la que incurrió la autoridad investigadora: "En el noveno concepto de violación [...] Argumento de inconformidad que resulta parcialmente fundado, pero inoperante... se advierte que el agente del Ministerio Público de la Federación que previno en el conocimiento de los hechos a que se contrae el parte informativo de nueve de diciembre de dos mil cinco... al emitir el acuerdo de la misma fecha con que se dio inicio a la averiguación previa omitió dar cumplimiento a lo que establece el artículo 128, fracción IV, in fine, del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece la obligación del Ministerio Público federal, cuando el detenido sea extranjero, de comunicar la detención a la representación consular que corresponda; omisión con la que igualmente transgredió el artículo 36 de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares, como bien lo señala la peticionaria de amparo, instrumento internacional que debió acatar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución General de la República".

Sin embargo, el Tribunal declaró inoperante dicha violación: "[S]i bien es cierto que esa violación al procedimiento que vulneró la defensa de la sentenciada, se encuentra comprendida en el artículo 160, fracción XVII, de la Ley de Amparo, también lo es que para restituirla en el goce de sus garantías, debe cumplirse con la obligación de informarle la posibilidad de que sea asistida por la representación consular de su país de origen y de comunicar a esta última respecto a la prisión preventiva de la peticionaria de amparo ... Debe tenerse en cuenta que la violación a las garantías mencionada no conlleva a declarar la nulidad de las actuaciones efectuadas durante el procedimiento que en lo general cumplan con las formalidades legales; / [N]o puede estimarse que la declaración ministerial de la quejosa fue obtenida de manera ilícita a consecuencia de esa violación.../ Máxime que no debe perderse de vista que es a la defensa ante los tribunales, a la que se refiere la mencionada convención, defensa que sí pudo organizar la peticionaria de amparo con asesoramiento de su representación diplomática."

El razonamiento aplicado al caso es el contenido en la siguiente tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2010, Tomo XXXII, correspondiente a la sección de Tribunales Colegiados de Circuito:

EXTRANJERO SUJETO A AVERIGUACIÓN PREVIA O EN PRISIÓN PREVENTIVA, SE LE DEBE DAR A CONOCER EL DERECHO QUE TIENE A SOLICITAR LA ASISTENCIA DE LA REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA DEL PAÍS DEL CUAL ES ORIGINARIO, ADEMÁS DE QUE SE INFORME A DICHA SEDE CONSULAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE AQUEL.

QIN FEXTO

El artículo 36, punto 1, incisos b) y c), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, expresamente señala que todo extranjero sujeto a averiguación previa o en prisión preventiva, que se encuentre privado de su libertad, debe ser informado del derecho que le asiste de contactar al Consulado de su país de origen para que conozca su situación jurídica, así como a dicha representación diplomática a efecto de estar en posibilidad de recibir la visita de los funcionarios consulares y en su caso, organizar su defensa ante los tribunales respectivos; **por tanto si la autoridad ministerial o bien jurisdiccional, omitieron cumplir con tal imperativo, es evidente la violación al procedimiento que vulneró la defensa del peticionario**, en consecuencia, a efecto de restituir al justiciable en sus garantías, debe cumplirse con la obligación de informarle la posibilidad de que sea asistido por la representación consular de su país de origen y de comunicar a esta última respecto a la prisión preventiva del quejoso; **empero, no conlleva a declarar la nulidad de las actuaciones efectuadas durante el procedimiento que en lo general cumplan con las formalidades legales**; mismas, que en respeto a la garantía de justicia pronta y expedita en la administración de justicia, prevista por el ordinal 17 del Pacto Federal, deberán permanecer incólumes. Y si la representación consular conducente, estima que debido a la asistencia jurídica brindada a su connacional, resulta legalmente indispensable, el ofrecimiento de un medio de convicción diverso a los desahogados previamente.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
III.2o.P248 P

Amparo directo. 2010 - 29 de abril de 2010 - Unanimidad de votos - Ponente: José Luis González - Secretaria: Ana Gabriela Urbina Roca.

Dicho de otra manera, el Tribunal estimó que un atraso en el cumplimiento de estas obligaciones, en especial la demora en el aviso al consulado y en la información del derecho a la asistencia consular, **no es lo suficientemente grave o no tiene el peso debido como para justificar la nulidad del procedimiento**, ni para anular la primera declaración de en la medida en que el aviso y la información tuvieron efectivamente lugar (aunque no se hayan dado “de inmediato” conforme a la norma procesal mexicana).

B. El razonamiento del Séptimo Tribunal no asume las consecuencias adecuadas de una grave violación a los derechos fundamentales. Por lo tanto, es violatorio de los tratados internacionales firmados por México, de la ley penal y Constitución mexicanas y es contrario a la postura de México ante los tribunales internacionales.

En primer lugar, la sentencia es inconsistente con la letra de la ley penal mexicana: el Código Federal de Procedimientos Penales no dice que basta con comunicar, tarde o temprano, la detención a la representación diplomática o consular que corresponda, sino que la detención se debe comunicar “de inmediato”. No es una obligación potestativa, sino una norma imperativa que demuestra una voluntad clara del legislador mexicano. Ahora bien, el razonamiento del Tribunal consiste en considerar que tal violación al procedimiento no es grave en la medida en que dichas garantías terminaron por cumplirse. Al contrario, se debe sostener que la temporalidad del cumplimiento de la regla importa, especialmente en el contexto del derecho penal, que otorga un gran papel al principio de inmediatez.

En segundo lugar, la sentencia es contradictoria. Reconoce el carácter fundamental del derecho a ser informado sobre la asistencia consular, reconoce la violación a las leyes del

CONTENTS

SECRET/NO
DE LA FEM

procedimiento, y admite una violación conforme al artículo 133 constitucional y su relación con los derechos fundamentales reconocidos en instrumentos internacionales (en primer lugar la Convención de Viena). **No obstante, se abstiene de declarar la ilicitud o nulidad de la declaración obtenida a partir de la violación, en contravención a una formalidad esencial del debido proceso.** Dicho de otra manera, el tribunal colegiado admitió la violación a una norma de alta jerarquía y a un derecho fundamental, pero le negó cualquier contenido sustantivo de ese mismo derecho. **Al contrario, una violación a un derecho humano fundamental debe provocar por sí mismo la anulación por lo menos de la declaración obtenida de una manera ilícita.**

En tercer lugar, como se ha expuesto, para el Tribunal, la violación es inoperante porque el daño ya fue reparado, por el cumplimiento tardío de la formalidad: "para restituirla en el goce de sus garantías, debe cumplirse con la obligación de informarle la posibilidad de que sea asistida por la representación consular de su país de origen y de comunicar a esta última respecto a la prisión preventiva de la peticionaria de amparo; lo que en el caso ya ocurrió" (páginas 1467 y 1468 de la versión pública de la sentencia). Ahora bien, violar la temporalidad de la regla consular puede provocar daños irreparables, que en el caso deberían llevar al juzgador a anular el procedimiento: cumplir con atraso no es equivalente a cumplir en el tiempo previsto por la ley. **En ese sentido, el hecho, subornado por el Tribunal, que ella tuvo acceso desde el principio a un defensor y a un traductor, es precisamente inoperante: se trata de garantías diferentes y complementarias cuyo respecto se debe analizar una por una.** Por lo tanto, **el Tribunal confunde dos derechos fundamentales, ambos parte del debido proceso:** la asistencia consular y el derecho a contar con un defensor y un traductor. Que haya tenido un defensor de oficio y haya sido asistida por un traductor no subsana la violación de sus derechos consulares, ni garantiza que haya tenido una defensa real y adecuada.

Por lo tanto, al declarar inoperante dicha violación, el Tribunal omitió asumir las consecuencias que se imponían, ya que no apreció que la transgresión a un derecho fundamental pudiese tener un impacto procesal mayor. En ese sentido, la sentencia manifiesta una incapacidad para castigar la violación patente a uno de los derechos de consagrados en la ley mexicana y garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos (Artículo 8, garantías judiciales mínimas del debido proceso).

En cuarto lugar, la sentencia es contraria a la interpretación de las cortes internacionales, que hicieron de las reglas consulares, en especial la notificación consular, una condición del debido proceso en el caso de un extranjero arrestado y acusado de haber cometido un delito o un crimen.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la violación del derecho a la notificación consular puede tener graves consecuencias para los derechos fundamentales de los acusados, incluidos el derecho a un juicio justo y a una defensa adecuada. **En la opinión consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999, la Corte calificó estos derechos como auténticos derechos humanos. Lo reafirmó en varias sentencias, por ejemplo en la sentencia vs. Panamá, del 23 de noviembre de 2010: "151. La Corte ya se ha pronunciado sobre el derecho a la asistencia consular en casos relativos a la privación de libertad de una persona que no es nacional del país que le detiene. En el año 1999, en la opinión consultiva sobre El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, la Corte declaró inequívocamente que el derecho del detenido extranjero a la información sobre la asistencia consular, hallado en el**

SIN TEXTO

artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (en adelante “la Convención de Viena”), es un derecho individual y una garantía mínima protegida dentro del sistema interamericano¹. Este principio fue reiterado por la Corte Internacional de Justicia en el caso en el año 2001². Adicionalmente, existían también instrumentos internacionales no vinculantes que establecían este derecho³. En consecuencia, no es cierto lo afirmado por el Estado que a la época de los hechos, esto es el año 2002, la notificación al consulado era suficiente. / 152. La Corte observa que los extranjeros detenidos en un medio social y jurídico diferente de los suyos, y muchas veces con un idioma que desconocen, experimentan una condición de particular vulnerabilidad, que el derecho a la información sobre la asistencia consular, enmarcado en el universo conceptual de los derechos humanos, busca remediar de modo tal de asegurar que la persona extranjera detenida disfrute de un verdadero acceso a la justicia, se beneficie de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas, y goce de condiciones de detención compatibles con el respeto debido a la dignidad de las personas. Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses⁴. / 153. Es así que desde la óptica de los derechos de la persona detenida tres son los componentes esenciales del derecho debido al individuo por el Estado Parte⁵: 1) el derecho a ser notificado de sus derechos bajo la Convención de Viena⁶; 2) el derecho de acceso efectivo a la comunicación con el funcionario consular, y 3) el derecho a la asistencia misma. / 154. Para prevenir detenciones arbitrarias, la Corte reitera la importancia de que la persona detenida sea notificada de su derecho de establecer contacto con una tercera persona, tal como el funcionario consular, para informarle que se halla bajo custodia del Estado, lo cual debe realizarse en conjunto con sus obligaciones bajo el artículo 7.4 de la Convención. Cuando la persona detenida no es nacional del Estado bajo el cual se halla en custodia, la notificación de su derecho a contar con la asistencia consular se erige también en una garantía fundamental de acceso a la justicia y permite el ejercicio efectivo del

¹ Cfr. *El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal*, *supra* nota 145, párrs. 84 y 124.

² Cfr. ICJ, (*Germany v. United States of America*), I.C.J. Reports 2001, Judgment of 27 June 2001, page 494, para. 77.

³ Cfr. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII), de 13 de mayo de 1971, Regla 38.1, y Naciones Unidas, Asamblea General, Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, Resolución 173, de 9 de diciembre de 1988, Principio 16.2.

⁴ Cfr. *El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal*, *supra* nota 145, párr. 119; *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados*, *supra* nota 82, párr. 121, y *Caso supra* nota 27, párr. 202.

⁵ Se debe tener en cuenta que los estándares siguientes no se aplican a las personas detenidas o retenidas que hayan solicitado una medida de protección internacional (*supra* párr. 106). Si son detenidas, tales personas gozan de los derechos bajo la Convención de Viena, no obstante, hay otras consideraciones para proteger sus intereses, las cuales la Corte no estima pertinente examinar en esta Sentencia.

⁶ Así, el detenido extranjero tiene el derecho a ser informado de su derecho: 1) a que el Estado receptor le informe a la oficina consular competente sobre su situación; y 2) a que el Estado receptor transmita sin demora “cualquier comunicación dirigida a la oficina consular” por el detenido. Cfr. Artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Documento (A/CONF.25/12) (1963) de 24 de abril de 1963, en vigor a partir del 19 de marzo de 1967, y rige desde esa fecha para el Ecuador (que la había ratificado el 11 de marzo de 1965), y para Panamá desde el trigésimo día siguiente al depósito de su instrumento de ratificación, efectuada el 28 de agosto de 1967. Esta notificación le debe ser hecha antes de que “rinda su primera declaración”. *El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal*, *supra* nota 145, párr. 106; *Caso supra* nota 99, párr. 164, y *Caso i* Vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 116. Así como los otros derechos que tiene quien es privado de libertad, éste “constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo”. Ver *mutatis mutandis* *Caso supra* nota 97, párr. 82; *Caso supra* nota 10, párr. 147, y *Caso supra* nota 97, párr. 105.

SIN TEXTO



derecho de defensa, pues el cónsul puede asistir al detenido en diversos actos de defensa, como el otorgamiento o contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas en el país de origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia legal y la observación de la situación de privación de libertad⁷. (...) 157. **Es pertinente recordar que el derecho de un detenido extranjero a solicitar la ayuda del consulado de su país ha sido considerado como un componente de las "garantías mínimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa"**⁸. Es así que la Corte ha destacado varios actos relacionados con la defensa en los que el cónsul puede asistir al detenido (supra párr. 154) y su importancia para garantizar el cumplimiento del derecho a "ser asistido por un defensor" bajo el artículo 8.2.d) de la Convención. De modo tal que "[l]a inobservancia u obstrucción de[l] derecho [del detenido] a la información afecta las garantías judiciales"⁹, y puede resultar en una violación de las misma".

Por su parte, el 31 de marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, rindió su fallo en el caso y otros nacionales mexicanos (México vs. Estados Unidos), en el cual destacó que existe "un deber a cargo de las autoridades que realizan la detención, de brindar dicha información a una persona detenida tan pronto como se percate de que dicha persona es un nacional extranjero, o una vez que existen razones para creer que dicha persona es probablemente un nacional extranjero".

La idea que sustenta esta obligación es que cuando un extranjero es privado de su libertad, debe tener un apoyo que le permita comparecer en términos de igualdad ante la justicia, sin las limitaciones que implican la ignorancia del idioma y/o el desconocimiento de la ley. Por lo tanto, desconocer dicha obligación debe tener consecuencias significativas sobre el procedimiento: en caso contrario, el concepto mismo de debido proceso saldría fuertemente debilitado.

En quinto lugar, al privar de contenido sustancial a los derechos consulares violados, la sentencia del Tribunal es directamente opuesta a la posición que el Estado Mexicano ha elevado en forma constante y gallarda ante la comunidad internacional, como muy recientemente en el caso

En el famoso caso¹⁰, México formuló sus peticiones a la Corte Internacional de Justicia en los siguientes términos: "El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, solicita de la corte que declare y falle: (...) 3. **Que los Estados Unidos tienen la obligación jurídica internacional de abstenerse de aplicar la doctrina de la preclusión procesal, o cualquier otra doctrina de su legislación interna de manera tal que obstaculice el ejercicio de los derechos conferidos por el artículo 36 de la Convención de Viena;** / 4. **Que los Estados Unidos deben, según el derecho internacional, respetar las obligaciones jurídicas internacionales antes mencionadas, en el caso de que, en el futuro, se produjese un arresto, o se llevara a cabo un proceso penal en contra de los 54 nacionales mexicanos que se encuentran en la antesala de la muerte, o en contra de cualquier**

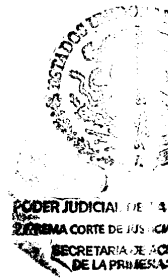
⁷ *El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal*, supra nota 145, párr. 164; Caso (supra nota 99, párr. 164, y Caso (supra nota 157, párr. 116.

⁸ *El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal*, supra nota 145, párr. 122; Caso (supra nota 99, párr. 164, y Caso (supra nota 157, párr. 116.

⁹ *El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal*, supra nota 145, párr. 129; Caso (supra nota 99, párr. 164, y Caso (supra nota 157, párr. 116. *Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párrs. 125 y 126, y Caso (supra nota 27, párrs. 195 y 196.

¹⁰ CIJ, México c. Estados Unidos, 31 de marzo de 2004.

C
A
M
E
R
A
N
I
S



otro nacional mexicano que se encontrare en su territorio, sea ese acto de parte de un poder constituido, legislativo, ejecutivo, judicial o cualquier otro, de jerarquía superior o subordinada en la organización de los Estados Unidos o que las funciones de dicho poder tengan carácter internacional o interno; / 5. Que el derecho a la notificación consular garantizado por la Convención de Viena forma parte de los derechos humanos;”.

Lógicamente, de conformidad con las obligaciones jurídicas internacionales antes mencionadas, México pidió atribuir consecuencias decisivas a las violaciones observadas: “1. Los Estados Unidos deben restaurar el status quo ante, es decir, restablecer la situación existente previa a los actos de: detención, enjuiciamiento, declaración de culpabilidad y condenación de los nacionales mexicanos cometidos en contravención a las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados Unidos;”. En otras palabras, México consideró que el derecho consagrado en el artículo 36 de la Convención es tan fundamental que su violación tiene ipso facto el efecto de viciar la totalidad del proceso penal ventilado en violación a dicho derecho. Empero, la sentencia del Tribunal afirma precisamente lo contrario.

C. La sentencia del Tribunal Colegiado también desconoce que, por las circunstancias del caso, la violación a los derechos consulares de _____ es particularmente grave.

En primer lugar, en el caso de _____, cuya nacionalidad extranjera era obvia desde el primer instante, las faltas ya mencionadas (omisión de informarla sobre su derecho a recibir asistencia consular antes de rendir su primera declaración ministerial y comunicación tardía de su detención a la representación consular) vulneraron sin lugar a duda su defensa en momentos cruciales de la averiguación: su detención (momento en el cual no existía denuncia, querrela o averiguación previa en su contra), su puesta a disposición y su primera declaración ministerial. El efecto negativo para la defensa de _____ estuvo evidenciado por el Tribunal de Apelación, que justamente fundó su decisión de restar valor probatorio a sus primeras declaraciones por su carácter “confuso” y “contradictorio”. De hecho, si su manejo del castellano era correcto o fluido, este hecho no implicaba que fuera capaz de defenderse en este idioma, que es y sigue siendo para ella al fin y al cabo una lengua extranjera (máxime tratándose de momentos de fuerte tensión como su detención y posterior exhibición ante los medios de comunicación).

Asimismo, el Tribunal Colegiado hizo hincapié en la primera declaración para negar que hubiese sido detenida el 8 de diciembre: “Lo anterior es infundado, pues en su declaración ministerial del nueve de diciembre de dos mil cinco, negó su participación en los hechos (...) no dijo nada acerca de que hubiera sido detenida desde el día anterior a su depuesto (...) Como se puede observar, en ningún momento manifestó haber sido detenida un día antes (...) Como puede verse, la única violencia que denunció en su contra fue un golpe en la cabeza y que le jalaron los cabellos, pero en ningún momento manifestó que hubiera sido detenida desde el día anterior” (páginas 1436 y 1437 de la versión pública de la sentencia).

Dicho de otro modo, el Tribunal evidenció la importancia de la primera declaración de _____ (sin seguir esta lógica al analizar y valorar las primeras declaraciones de dos de las tres víctimas, en las que decían no reconocerla) y por lo tanto, confirmó el carácter decisivo de las primeras horas después del arresto. Sin embargo, no asumió plenamente las consecuencias que entonces se imponían por sí mismas, al juzgar que la tardanza en el

SECRET

SECRET
SYSTEMA CORPUS
SECRET
DE LAPE

cumplimiento de las obligaciones consulares no fue suficientemente grave como para conllevar la nulidad del procedimiento. La interpretación del Tribunal aparece estructuralmente contradictoria en detrimento de la acusada. Lo anterior, en materia de derechos humanos, no es congruente con el nuevo artículo 1º de la Constitución.

Finalmente, el evidente desconocimiento del sistema jurídico mexicano por parte de nunca fue cuestionado. Asimismo, los autos del caso manifiestan que no tuvo desde el inicio un defensor de su elección que tuviera acceso al expediente. De hecho, el 19 de diciembre de 2005, designó por escrito al Lic. como su defensor particular. El 26 de diciembre de 2005, ratificó por escrito la designación de su defensor particular y reiteró su petición para que se le permitiera tomar protesta del cargo: *“Único.- Tenerme por reiterada y confirmada la designación de los defensores particulares mencionados en el cuerpo del presente escrito... por lo cual solicito se le tome la protesta a mi defensor particular para no quedar en estado de indefensión, ya que hasta el momento no han querido, en esa unidad especializada en investigación de secuestros, tomar la protesta al representante común, lo que es violatorio al derecho constitucional que me asiste en tener una defensa adecuada.”* El 28 de diciembre, el Ministerio Público autorizó al defensor a visitar a sin acordar sobre la consulta del expediente. Al fin, el 27 de febrero de 2006, o sea, 70 días después del nombramiento, y apenas tres días antes del ejercicio de la acción penal contra compareció ante el Ministerio Público a protestar su cargo como defensor particular la acusada. Todo lo anterior vulneró evidentemente el derecho a una debida defensa.

Por lo tanto, de haber contado con el apoyo y los consejos de su consulado en los primeros y decisivos instantes del procedimiento penal, su defensa hubiera sido sin lugar a duda mejor organizada y más congruente y convincente.

En segundo lugar, cabe subrayar que la demora en el cumplimiento de las reglas consulares no tiene nada que ver con circunstancias independientes de la voluntad de la autoridad investigadora, sino que fue el resultado de una actuación voluntaria con graves consecuencias: la autoridad prefirió tomar tiempo para una recreación mediática exhibiendo a como culpable ante millones de televidentes (en violación evidente del principio de presunción de inocencia) en vez de cumplir rigurosamente con las leyes internacionales y mexicanas aplicables en materia de derecho consular. Por lo tanto, ninguna razón jurídicamente aceptable puede justificar esta prolongación excesiva. En ese sentido, también el montaje desembocó en una vulneración de los derechos de defensa, pues divulgó una supuesta flagrancia en la comisión de un delito de secuestro. De hecho, es menester tomar en cuenta la interconexión de las diferentes violaciones a los derechos de ocurridas en las primeras horas para mediar adecuadamente la gravedad del caso.

Todo ello demuestra el gran alcance del argumento relativo a la violación de los derechos consulares, ignorado por el Tribunal Colegiado: se violó un componente esencial de los derechos de defensa, los derechos consulares, con el fin de permitir que se violara otro componente esencial de los derechos de defensa, la presunción de inocencia, tal y como ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un caso parecido, en la sentencia vs. Perú del 25 de noviembre de 2004 (Cf. párrafos 158 y siguientes), la Corte Interamericana juzgó: *“el derecho a la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención exige que el Estado no*

SIN TEXTO

SECRETARÍA DE LA
CORTES DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE LA
PRIMERA

condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella”.

En tercer lugar, hay razones objetivas que permiten dudar de la buena fe de la autoridad investigadora en su primer intento de comunicación el viernes 9. El Tribunal sustentó parte de su razonamiento de la siguiente manera: “Además que en concepto de este órgano colegiado no puede estimarse que la declaración ministerial de la quejosa fue obtenida de manera ilícita a consecuencia de esa violación, ya que no debe olvidarse que en primer término, se intentó la comunicación a la sede diplomática, misma que no se logró por el horario de labores de esa Legación” (página 1468 de la versión pública de la sentencia). Es importante mencionar que, en caso de una llamada hecha fuera de los horarios laborales normales del Consulado de Francia, la persona que intenta comunicarse con sus servicios escucha un mensaje que le proporciona un número de emergencia, disponible las veinticuatro horas del día, incluyendo fines de semana y días festivos. Un policía francés hispanohablante está físicamente presente en su puesto de trabajo las veinticuatro horas para atender las llamadas hechas a este número de emergencia. Por consiguiente, resulta muy extraño, para no decir inverosímil, que no fuese posible comunicarse con el consulado el viernes 9, lo que crea fuertes dudas sobre la sinceridad y buena voluntad del primer intento de comunicación. Al respecto, no deja de sorprender que la autoridad investigadora logró avisar al consulado el día siguiente, sábado 10 de diciembre, es decir, de nuevo fuera de los horarios laborales normales del consulado, lo que pone justamente de relieve la falta de voluntad real asociada al primer intento realizado el viernes.

SIN TEXTO



- 97
- 97
- La violación a los derechos consulares de resulta tan evidente como grave: la omisión en la información del derecho a la asistencia y la demora en la comunicación a la representación diplomática constituyeron en este caso una violación de tal alcance que se hizo nugatoria la protección al ciudadano extranjero otorgada por las leyes mexicanas en materia consular. Por lo tanto, es menester revisar la sentencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y declarar la afectación a la garantía de debido proceso legal y la nulidad de actuaciones, entre otras, la declaración ministerial de rendida durante el procedimiento de averiguación previa.
 - En conclusión, el gobierno francés pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconozca y se pronuncie sobre la violación al derecho a la asistencia consular, condición del debido proceso, cuya efectividad no fue garantizada en el caso de en vulneración grave de su defensa y de sus derechos humanos, de acuerdo al derecho internacional y mexicano y conforme a la postura constante de los Estados Unidos Mexicanos ante la comunidad internacional.

Por lo expuesto, el gobierno de la República francesa eleva en forma respetuosa, ante la alta investidura y consideración de esta Corte y de sus Integrantes el presente memorial.

Ciudad de México, Distrito Federal a primero de septiembre de dos mil once.

052009

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2011 SEP 22 PM 12 56

OFICINA DE COORDINACION
JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2011 SEP 23 AM 9 24

PRIMERA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

RECIBI DE UN ENVIADO:
SIN ANEXO

cn (16) for

OFICINA JUDICIAL DEL
SISTEMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARIA DE LA
DE LA PRIMERA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-54

98

PROMOCIÓN: 052009

AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011.

En once de octubre de dos mil once, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el escrito del Gobierno de la República Francesa, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia. Conste. -----

México, Distrito Federal, a once de octubre de dos mil once. -----

Agréguese a los autos el escrito que en la parte superior indica "Memorial de Amicus Ex Parte del gobierno de la República Francesa en el juicio de amparo directo en revisión promovido por bajo el expediente citado al rubro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".-----

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ténganse por hechas las manifestaciones que mencionan para los efectos legales correspondientes.-----

Devuélvase los autos al Ministro que suscribe.-----

Cumplase.-----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO
ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza
y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes.-----

A large, bold, handwritten signature in black ink, likely belonging to Arturo Zaldívar LeLo de Larrea, the Minister mentioned in the text. The signature is stylized and spans across the line of the text.

LSJ



99

i(dh)eas

AC

**COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL DISTRITO FEDERAL**

**CONSULTORÍA GENERAL JURÍDICA
CDHDF-CGJ-021-2012**

México, D.F., a 21 de febrero de 2012

ASUNTO: AMICUS CURIAE

QUEJOSA:

**REFERENCIA: AMPARO DIRECTO
EN REVISIÓN 517/2011**

**MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE
LARREA**

**PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN.**

**Los suscritos LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA, PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL (CDHDF),**

A.C.,

ENCARGADO

A.C.

28-02-12 Lic. Leticia
10:00 AM Zaldívar - Dr. Miramón

DIRECTOR GENERAL**A.C.****DIRECTORA****A.C. (Y**

comparecemos ante esta Ilustre Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de allegar el presente documento **AMICUS CURIAE**, promovido por diversas organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.

I. NATURALEZA DEL AMICUS CURIAE

Como es del conocimiento de la Honorable Corte, el *amicus curiae* (amigo de la Corte o amigo del tribunal) es el documento que contiene una opinión jurídica y voluntaria ofrecida por terceros ajenos al proceso ante un Tribunal para colaborar con su resolución.

En el sistema jurídico mexicano existen precedentes sobre el planteamiento del *amicus curiae*, en los que se entendió como un documento válido *per se*, lo que no hace obligatorio que el juzgador se manifieste en cuanto a su contenido. Entonces, esta figura jurídica debe entenderse como una herramienta disponible al juzgador para ayudar a clarificar criterios y estándares que, en el presente caso, se relacionan sustancialmente con los derechos humanos. Es por ello, que las aportaciones hechas mediante esta figura jurídica son muy bien valoradas por los juzgadores, en tanto que aportan un enfoque distinto para el análisis de un problema específico, además de que contribuyen a la publicidad y la transparencia con las que debe contar todo órgano judicial en una sociedad democrática.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibe y admite constantemente escritos de *amicus curiae*, lo cual refleja la transparencia en el trabajo del Máximo Tribunal, así como el respeto a la publicidad que los casos de interés público deben tener, como son todos aquellos que resuelve la Suprema Corte, en particular, así como los que atienden los órganos del Poder Judicial de la Federación, en general.